

Informe

sobre la situación
de los Derechos
Humanos en Jalisco

- 2009 -

Informe

sobre la situación
de los Derechos
Humanos en Jalisco
- 2009 -



Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2009

© Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. 2009

Primera edición: Noviembre de 2009

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)

Asociados. Jorge Barajas Martínez. Sergio René de Dios Corona. Juan Larrosa Fuentes. Francisco Macías Medina. Gerardo Moya García. Jorge Manuel Alejandro Narro Monroy. Carlos Armando Peralta Varela. César Octavio Pérez Verónica. María Guadalupe Ramos Ponce. Jorge Enrique Rocha Quintero. Oscar Gerardo Vargas López. David Velasco Yáñez. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona.

Consejo directivo

Carlos Armando Peralta Varela. Presidente.

María Guadalupe Ramos Ponce. Vicepresidenta.

Francisco Macías Medina. Secretario.

Gerardo Moya García. Tesorero.

César Octavio Pérez Verónica. Vocal.

Dirección ejecutiva y coordinadores de proyectos

Francisco Macías Medina. Director Ejecutivo.

César Octavio Pérez Verónica. Litigio Estratégico.

Gerardo Moya García. Interlocución Estratégica.

Coordinación editorial

Gerardo Moya García.

Corrección de estilo

Gerardo Moya García.

Diseño y Diagramación

Luis Alberto Partida de la Cruz

La información contenida en este informe puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se respete y cite la autoría de todos los que colaboraron en la construcción de este texto. Además, se solicita que en caso de utilizar el texto, se informe a su editor al siguiente correo electrónico: cepad@cepad.org.mx.

Este informe fue financiado por The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Impreso y hecho en México.

Índice

	Artículo	Autor	Pag
1.	Presentación. Un año de lucha sobre la acción ciudadana	Carlos Peralta	7
2.	Introducción.	Gerardo Moya García	11
Análisis de casos paradigmáticos			
3.	Maltaraña. Una comunidad sitiada.	Paulina del Pilar Gutiérrez Ramírez	17
4.	El camino de la esperanza y la memoria contra la impunidad. Actualización del caso de Néstor Alán Rodríguez Licea.	Francisco Macías Medina	25
5.	Un rechazo legítimo, una carretera ilegal.	Nora Berenice Lorenzana Aguilar	33
6.	Presa el Zapotillo. Irregularidades y contradicciones de un proyecto, dignidad y resistencia de las comunidades	Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC)	39
7.	Comité Salvabosque, en defensa del bosque El Nixticuil.	Adrián Guillermo Hipólito Hernández y Laura Sofía Herrera Rivera.	45
8.	Protagonismo, autoritarismo y misoginia: Un Ombudsman carente de autoridad moral.	Paola Lazo Corvera	53
9	Un Ombudsman que violenta derechos fundamentales. La visión jurídica de una elección ilegal.	César Octavio Pérez Verónica	59
10	La voz de las víctimas. El seguimiento de un caso paradigmático de violencia institucional de género en Jalisco.	Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC	69

Análisis de escenario y prospectivas

11	El Examen Periódico Universal y el estado de Jalisco.	Gerardo Moya García	75
12.	Nuestro peor delito. Apreciaciones respecto al programa “La calle No es Vida”.	Rogelio Padilla Díaz.	81
13.	Hacer transparente a la CEDHJ: La solicitud de información respecto de la recomendación 2/2009	Alberto Bayardo Pérez Arce	85
14.	La simulación activa del Ombudsman. Análisis sobre la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco durante 2008.	Carlos A. Peralta Varela y Francisco Macías Medina	91
15.	El derecho a la Participación Ciudadana en Jalisco	María del Mar Estrada Rebull y Margarita Sierra.	103
16.	La ciudad para unos cuantos. Una mirada al estado del derecho a la movilidad y al espacio público en Guadalajara, como elementos esenciales del derecho al desarrollo.	Mercedes Paloma Cruz Vázquez, María Elena de la Torre Escoto, Jaime Meade Altamirano y Étienne Von Bertrab.	111
17	Las mujeres en Jalisco. Entre leyes antimujeres y autoridades que impiden su participación ciudadana.	María Guadalupe Ramos Ponce	121
18.	Índice de autores		129
19.	Información Institucional		135

Un año de lucha sobre la acción ciudadana

6 de noviembre del 2009

.....
Debe distinguirse entre ciudadanía formal y sustantiva. La primera puede definirse como el vínculo y perteneciente a una nación. La segunda, hace referencia a una serie de prerrogativas y derechos civiles, políticos y específicamente sociales que implica también cierta clase de participación de los individuos en los asuntos de gobierno.

Marshall
.....

Durante el tiempo que abarca el presente informe fuimos testigos de cómo los ciudadanos en Jalisco volvimos a tomar las calles en torno a la defensa de nuestros derechos. En relación a las elecciones y el derecho al voto nulo; en favor de la movilidad no motorizada, de la ecología y el desarrollo urbano sustentable; en contra de donativos ilegales y la transparencia en el uso de recursos públicos; en la defensa del territorio y contra la militarización que viola garantías básicas; en oposición a la criminalización de la mujer; de la protesta ciudadana; en contra de la impunidad; de las diversas formas de discriminación y a favor de la justicia, entre otros muchos asuntos. Los ciudadanos buscamos ser tomados en cuenta e incidir en las formas de actuar y las decisiones de las autoridades que deben servirnos. Fuimos testigos también de cómo algunas de las demandas fueron reconocidas y aceptadas, pero que la gran mayoría de las opiniones fueron ignoradas y más aun, algunos ciudadanos fueron reprimidos por sus posturas y acciones. En cualquier caso, observamos que algunos grupos mostraron perseverancia ciudadana en contra de la tradición de dejar hacer, sin cuestionar.

Debe tenerse presente que desde el surgimiento del concepto contemporáneo de ciudadanía se han generado polémicas en torno a si es un concepto que contribuye al individualismo o si puede favorecer la vida comunitaria. Si es un concepto que legitima un estado de dominación capitalista o si puede impulsar fórmulas relevantes de igualdad social y con ello impulsar comunidades solidarias. El trabajo de Marshall realizado a mediados del siglo pasado causó furor, entre otras razones, porque amplió el concepto de ciudadanía vía el reconocimiento de una serie de derechos de carácter social-colectivo. La hipótesis fundamental en el trabajo realizado por Marshall fue “que hay una especie de

igualdad humana básica asociada con el concepto de membrecía plena de una comunidad” (Marshall 2005:19¹). Dicha membrecía se vincula al goce efectivo de diferentes derechos civiles y políticos de naturaleza individual, pero también con derechos sociales que se ubican en el terreno de derechos colectivos. En cualquier caso, si bien el concepto de ciudadanía desde esta lógica continúa en disputa, en la actualidad ayuda justificar la lucha de los individuos por una sociedad con una mejor calidad de vida. El asumirse como ciudadano en esta perspectiva conlleva el poder exigir el respeto pleno a los derechos civiles (a que se respete mi contrato), ampliar los derechos políticos (mi derecho a anular el voto), y a poder legítimamente realizar actividades de exigibilidad en torno a los derechos sociales.

Obviamente, esta tarea es sumamente compleja partiendo de la premisa de que los ciudadanos Jaliscienses en general somos percibidos como apáticos y poco conocedores de nuestros derechos. Ejercen poco o en forma muy simple, su derecho a participar en la toma de decisiones públicas. Ablanado (2006:8²) sugiere que el régimen político que prevaleció durante la mayor parte del siglo XX en el país, tuvo un impacto profundo sobre la sociedad, y sus efectos se aprecian “en las actitudes de los ciudadanos hacia la política, en la postura adoptada por el gobierno y funcionarios públicos hacia las organizaciones de la sociedad civil, en la manera en que se aplican las leyes, y en la falta de desarrollo de ciertas habilidades y valores por parte de los ciudadanos para poder participar en la esfera pública en un contexto más abierto y democrático”. Evidentemente, ese sistema de inclusión/control de la sociedad establecido durante los años del priismo, en alguna medida aún perdura. Se conserva la idea de que el gobierno es el único encargado de elaborar políticas y atender los asuntos públicos, por lo tanto, los ciudadanos organizados autónomamente para atender a intereses y necesidades de la sociedad fuera de los mecanismos gubernamentales, son vistos con suspicacia. Debemos ser claros al mencionar que esta forma de relación sociedad gobierno, no fue desechada con la llegada del PAN al gobierno estatal, aparentemente esta siendo adaptada para que encaje en los nuevos tiempos sociales. Llevando el problema al extremo, existen autores como Guerrero (2004:131³) que afirman en relación a nuestro país que “existe una cultura política en donde la ciudadanía, como conciencia y práctica no sólo esta ausente, sino que también favorece la preservación de relaciones de tipo clientelista entre los grupos y sectores sociales y de poder... Este tipo de cultura política no exige de sus élites ni responsabilidad pública ni rendición de cuentas, sino una relación de tipo asistencial”. En este sentido “el ciudadano moderno ha existido más como excepción que como regla de la vida pública” (Guerrero 2004:140).

Durante el 2009 pues, se han llevado a cabo esfuerzos serios por darle a conocer al gobierno que sí existe ciudadanía sustantiva en nuestra sociedad. Que hay grupos de personas activas, conocedoras de sus derechos, y dispuestas a luchar para mejorar la calidad de vida y la justicia social. Esta ciudadanía sustantiva si bien tiene en su contra una lógica histórica de sometimiento y una cultura

1. Marshall T.H y Bottomore T. (1950, traducción 2005). Ciudadanía y Clase Social. Buenos Aires, Argentina: Losada.
2. Ablanado Terrazas Ileri (2006) De sociedad a sociedad civil. Análisis de las causas del déficit de participación ciudadana en México. Texto en mecanograma presentado en el VI Seminario Anual de Investigación sobre el Tercer Sector en México. Ciudad de México.
3. Guerrero, Manuel Alejandro (2004). *México: La paradoja de su democracia*. México DF: Universidad Iberoamericana.

política tradicionalmente apática, demuestra que pueden darse cambios, es por tanto, un germen que puede reproducirse. Contribuye con sus acciones a impedir o cambiar acciones, y es a la vez una motivación que puede ser compartida y respaldada para ampliar la cultura de acción ciudadana en el estado. Este informe da cuenta, desde la perspectiva de los diferentes autores que contribuyeron a su conformación, de las acciones de grupos y personas por hacer valer sus derechos, pero sobre todo, por impulsar un Jalisco con rostro más humano y ciudadano.

Doctor Carlos Peralta Varela

Presidente del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC

INTRODUCCIÓN

La realidad nos rebasa. La escueta pretensión de analizar los hechos durante el 2009.

Gerardo Moya García

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Hace exactamente un año, en noviembre de 2008, se presentó el *Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2007-2008*, que conjuntó elementos de dos años de trabajos. Desde la emisión del primer *Informe* en el 2006, los debates al interior del CEPAD fueron en el sentido de construir un espacio editorial que permitiera, más allá de divulgar el trabajo del organismo, hacer visible el de otras organizaciones civiles, movimientos sociales y académicos de Jalisco, que implicara la denuncia de aquellas situaciones en que se vieran gravemente vulnerados los derechos humanos de la población.

Otros objetivos además de informar, son el de generar opinión pública respecto de las diversas temáticas que se advirtieron como trascendentes durante el año, así como mostrar las maneras de defender derechos humanos de las organizaciones de la sociedad que nos vemos involucradas en el *Informe*.

Esta perspectiva es importante, ya que permite al lector tener un punto de vista de los hechos, en muchas ocasiones, sino es que en todas, opuesto a aquél que pregona ser el “oficial” y que se ofrece desde las instancias públicas y en la mayoría de los medios de comunicación. Esto posibilita forjarse un criterio más allá de la escueta información que circula, así como empatizar con aquellos actores sociales que viven en carne propia las violaciones de derechos humanos, o de quienes los acompañan. La mayor parte de ellos, considerados como grupos en situación de vulnerabilidad.

Como podrán observar en el contenido del presente *Informe*, salta a la vista un Estado (entiéndase quien tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley), ocupado únicamente en perpetrarse en el poder y en gozar de las ventajas que del poder emanan; nada más alejado de su misión como garante del Estado de Derecho.

Este perpetrado actuar, entra en conflicto directo con las necesidades de la mayoría de la población y acrecienta el descontento social respecto de quienes nos representan y deben servirnos (servidores públicos). No existe pues solo una “desconfianza” en el actuar de la autoridad, sino un evidente repudio a las formas de llevar a cabo la política pública de manera opaca y decantada hacia unos cuantos.

No obstante lo anterior, lejos de escuchar el “sentir social” parece que la que armadura que les protege se torna cada vez más gruesa. Muestra de ello, la dan la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y los nombramientos de quienes actualmente presiden dos importantes instituciones que deben estar al servicio de la población y alejadas de intereses políticos y económicos: la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ambos titulares fueron clara y abiertamente repudiados por la sociedad civil organizada nacional y extranjera debido a la evidencia de su actuar en los cargos públicos que ocuparon previo a su elección.

En Jalisco, los ejemplos de este “enconchamiento” de la clase política, los tenemos con el empecinamiento en la construcción de la presa de El Zapotillo; en la construcción de la línea dos del macrobús, y hasta en el terreno que deberá albergar la tan mentada Villa Panamericana por mencionar algunos.

Lo que no se ve a simple vista, son los tan bien ponderados “grupos fácticos” que están detrás de quienes se dicen tener el poder. Tampoco se ven los orígenes, intereses y negocios de los mismos; sin embargo, la intuición y algunos escándalos, apuntan en algunos casos, a la dirección de la delincuencia organizada que dicen combatir.

Las personas y grupos que defendemos derechos humanos, no tenemos entonces frente a nosotros, únicamente al tradicional Estado, sino a quienes están detrás del mismo imponiendo sus intereses de grupo.

Vale la pena hacer mención asimismo, de que la realidad en materia de derechos humanos en el estado, nos rebasa, y rebasa también la escueta colaboración que a ella se hace en este espacio con el objeto de presentarla. Por ello, siempre quedarán fuera de este esfuerzo editorial muchos hechos y análisis que merecen nuestra atención.

De forma continuada con la construcción del *Informe 2007-2008*, el actual presenta en su primera parte, el análisis de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos. Un buen número de ellos, replica en torno al actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en casos concretos, y la actualización, noticia y seguimiento de casos que ha trabajado el CEPAD en el presente año. Tres casos más forman parte de este análisis: la situación que viven el pueblo *wixárika* frente a la construcción de una carretera que pretende atravesar su territorio; la angustia de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de desaparecer bajo el agua ante la anunciada y no consultada presa de El Zapotillo, y la pretendida destrucción de el bosque de El Nixticuil en Zapopan, a manos de intereses inmobiliarios.

La segunda parte engloba el análisis de temas presentes en el escenario y sus prospectivas, en donde la CEDHJ aparece nuevamente. Podrán encontrar asimismo, los alcances del Examen Periódico Universal de la ONU para el estado de Jalisco; las apreciaciones respecto del programa “La calle No

es Vida” (implementado por el Ayuntamiento de Guadalajara), a través de la perspectiva de quien trabaja “desde la calle”; las implicaciones del derecho a la participación ciudadana en Jalisco y el estado del derecho a la movilidad y al espacio público como elementos esenciales del Derecho al Desarrollo. Finalmente, se aborda la política “antimujeres” que se advierte en las reformas legales y en los espacios de participación que les son coartados.

Si la lectura del presente, logra cumplir con algunos de los propósitos enunciados en un inicio, nos daremos por bien servidos.

Análisis de casos paradigmáticos

MALTARAÑA. UNA COMUNIDAD SITIADA

2009

Paulina del Pilar Gutiérrez Ramírez
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Introducción. A tres años del combate al narcotráfico

Desde Diciembre de 2006, el gobierno federal en búsqueda de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, ha puesto en práctica operativos conjuntos de elementos policiales y militares en los estados de Michoacán, Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Veracruz¹. A través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007, se crea el cuerpo especial del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, mismo que depende de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). Su misión de conformidad con el artículo segundo del decreto de referencia es aquella que:

[...] establece el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en particular, proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación, para lo cual contará con los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos, que le permitan cumplir con tales misiones.²

A partir de la creación de dicho cuerpo especial, el despliegue de elementos de las fuerzas armadas en el territorio nacional ha ido en aumento. El despliegue inicial constaba de un promedio mensual de 40,000 efectivos en las calles, para alcanzar, de acuerdo a cifras oficiales arrojadas en el Tercer Informe de Gobierno del 1º de septiembre de 2008 al 30 de junio de 2009 “un promedio mensual de 48,750 efectivos militares[...]”.

El Ejecutivo y la Secretaría de Defensa Nacional han justificado los graves incidentes y el incremento del índice de violencia con la declarativa de guerra al narcotráfico y la delincuencia organizada, sin embargo, dichos operativos se han visto matizados por varios elementos que desfiguran el actuar del Ejército como el histórico garante de la protección de la sociedad civil en México.

Dentro del panorama encontramos que tanto nacional como internacionalmente se ha manifestado la preocupación en torno a las tareas encomendadas a las fuerzas armadas por su incapacidad de realizar los operativos con apego a la legalidad, a la seguridad jurídica, la integridad de las personas. En el informe de la organización internacional “Human Rights Watch”, se afirma que “en el marco de

las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias”³.

Aunado a las violaciones de derechos humanos ya mencionadas, se han logrado documentar otras tantas como los cateos y visitas domiciliarias ilegales; el empleo arbitrario de la fuerza pública, amenazas, robo, entre otras; todas ellas especificadas en cada una de las poco más de 40 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la SEDENA de enero de 2007 a octubre de 2009⁴, periodo de la implementación de las fuerzas armadas en los operativos mencionados anteriormente.

Recientemente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha manifestado reiteradamente su preocupación por la presencia del Ejército en tareas de Seguridad Pública. En uno de sus informes temáticos, llamado *¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón*, de cuenta de las afectaciones a la sociedad civil como consecuencia de la inserción y empoderamiento político de una institución, que conforme a lo señalado en los numerales 16 y 129 de la Constitución Federal, no debe realizar labores de seguridad pública, aún cuando exista un decreto presidencial que los faculte.

Asimismo, el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT), entre otras, han trasladado la preocupación de las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares a instancias internacionales, con el objeto de que recomienden y reiteren al Estado mexicano la necesidad de cumplir con los estándares internacionales en materia de seguridad pública. En específico, con un enfoque que contemple concretamente la inclusión del concepto de *seguridad ciudadana* en las políticas públicas en materia de seguridad nacional, concepto reiterado constantemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al emitir sus informes a los Estados, entre ellos México.

Con respecto al concepto, Marta Altolaquirre refiere que “la seguridad ciudadana comprende el pleno respeto de los derechos humanos y el establecimiento por parte de los Estados de las condiciones necesarias para su goce sin discriminación alguna y con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad”; asimismo, señala que “una de las preocupaciones de la CIDH en relación con la seguridad ciudadana es la participación de las Fuerzas Armadas en actividades que deben corresponder exclusivamente a la Policía Nacional”.

En los casos paradigmáticos registrados por las organizaciones civiles antes mencionadas, así como por la CNDH, se puede apreciar otra constante en las violaciones de derechos fundamentales; las

afectaciones más graves y severas se concentran en los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, las niñas y niños, jóvenes, mujeres, comunidades campesinas y pueblos indígenas, migrantes, así como las personas de la tercera edad. De lo anterior se dio cuenta en audiencia pública ante la CIDH en Octubre de 2008, en donde a letra manifestaron que los grupos antes mencionados así como los periodistas y los defensores de derechos humanos sufren de agresiones; así como se presentan constantemente las “agresiones sexuales a mujeres; las poblaciones campesinas y pueblos indígenas son hostigadas y amenazadas con el pretexto de buscar armas,(quienes) han sido fuertemente estigmatizadas como cultivadores de narcóticos y se les ha pretendido ligar a sus líderes con el narcotráfico; los que sufren estos abusos se ven atemorizados por presentar las denuncias correspondientes”⁵.

En la mira internacional

En el Examen Periódico Universal (EPU), el cual vigila y evalúa el cumplimiento de los países miembros de las Naciones Unidas conforme a las obligaciones contraídas internacionalmente en materia de derechos humanos, el Estado mexicano recibió en febrero de 2009 un total de 91 recomendaciones. De ellas, 11, es decir, el 12%, se refieren a las fuerzas armadas en el contexto nacional que se ha venido describiendo⁶.

Las recomendaciones emitidas al Estado mexicano en el EPU, plasman una urgencia por adecuar el actuar de las autoridades en las actividades de seguridad pública. Especial atención merecen las ocho recomendaciones rechazadas por el Estado mexicano ya que cinco de ellas se refieren a que sean los tribunales civiles, quienes conozcan de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, y énfasis expuesto a los casos de tortura perpetrados por elementos de las fuerzas armadas⁷.

Otro elemento importante a resaltar dentro del EPU, se refiere a la recomendación al Estado mexicano para establecer medidas estructurales que hagan frente a la violencia y la violación sistemática de los derechos fundamentales [...], de los cuales las mujeres son víctimas. Se da particular importancia a la impunidad de las violaciones de derechos humanos de las mujeres; la necesidad de capacitación de los funcionarios públicos en la sensibilización sobre la violencia y la discriminación en contra de las mujeres; así como de los demás grupos en situación de vulnerabilidad⁸.

Jalisco, ¿Nuevo espacio geográfico de operativos conjuntos?

Jalisco no parecía aminorar las denominadas áreas o “espacios geográficos determinados”⁹ enunciados por el ministro Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la CIDH al responder a los planteamientos de las organizaciones civiles sobre el mantenimiento de los elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Sin embargo, hoy en día, Jalisco se encuentra en la lista de los espacios geográficos en los que su población ha sido víctima de violaciones de derechos humanos perpetradas por elementos de las fuerzas armadas.

Como evidencias institucionales encontramos que el secretario de Seguridad Pública, Prevención y Rehabilitación del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, ha afirmado lo siguiente: *“Hemos tenido operativos limítrofes entre Jalisco y Michoacán, todos nos dicen que los delitos pasan de aquel lado (Michoacán), el ejército mexicano está trabajando con nosotros. Hemos detenido gente junto con el ejército y estamos consientes de que existe un foco rojo en la frontera con Michoacán”*¹⁰. Asimismo, la información referente a Jalisco, con que cuenta la CNDH, obtenida a través de solicitud de transparencia, nos indica que del año 2005 a julio del presente, se han registrado 42 quejas en las que se señala a elementos de la SEDENA, siendo el 2009 el de mayor incidencia. Los principales hechos violatorios y su acumulación son la falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; el incumplimiento de formalidades para emisión de orden de cateos y visitas domiciliarias; la prestación indebida del servicio público; la detención arbitraria; ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada; el apoderamiento de un bien mueble sin consentimiento del propietario; la desaparición forzada; el empleo arbitrario de la fuerza pública, entre otras¹¹.

Maltaraña, una comunidad sitiada

Al transitar por las orillas del norte de la Laguna de Chapala, justo en la carretera Guadalajara-La Barca en dirección sureste del Estado, se encuentra el municipio de Jamay. Municipio que obtiene tal calidad en el año de 1914, momento hasta el cual era considerado como pueblo del municipio de La Barca.

La ubicación geográfica del municipio de Jamay posiciona a varias de sus comunidades en las orillas del sureste del estado. Tal es el caso de la comunidad de Maltaraña, también conocida como La Palmita. Dicha comunidad comparte frontera con la comunidad de Ibarra, municipio de Briceñas, ubicado al noroeste del estado de Michoacán. Sin embargo, los beneficios que pudiera representar ser una comunidad colindante con otro Estado se revierten con las afectaciones que se han provocado a los habitantes de Maltaraña en lo que se ha venido llamando “la guerra contra el narcotráfico”.

Para lograr comprender el alcance y gravedad de las afectaciones ocasionadas por elementos de las fuerzas armadas, a la comunidad de Maltaraña, es necesario tener en cuenta condiciones sociales, económicas y culturales en las que habitan sus pobladores.

De acuerdo con el último conteo nacional de población y vivienda realizado por el INEGI y la información arrojada por el Consejo Estatal de Población, la Comunidad de Maltaraña cuenta con aproximadamente 564 habitantes que viven en un nivel de marginación medio¹² y cuentan con aproximadamente 127 viviendas particulares habitadas. Poco más del cincuenta por ciento de su población se dedica al sector primario en agricultura de baja productividad y ha sido una comunidad

que perfila para recibir apoyo de programas de Desarrollo Socioeconómico de Personas en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad, del Programa de Desarrollo de Comunidades Marginadas y del programa 3x1 para Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

El cuadro de pobreza en la mayor parte de su población, limita las posibilidades de sus habitantes a potencializar su desarrollo; necesidades que conllevan, como en muchos otros poblados del país, a que las personas de sexo masculino migren con el objeto de laborar en el extranjero. Esto último pone de manifiesto la realidad aún más compleja y delicada de que los hechos que se susciten en la comunidad, provocan afectaciones en su mayoría a las mujeres que ahí moran. Todo lo anterior, remite a la comunidad de Maltaraña, a un cuadro de vulnerabilidad en el conjunto de sus características.

Los hechos

El pasado 01 de junio de 2009, entre las 12:00 y las 14:30 horas, alrededor de 30 elementos del Ejército mexicano, ingresaron a la comunidad rural de Maltaraña y realizaron cateos o revisiones domiciliarias con el objeto –según comentaron- de buscar drogas y armas. En grupos de dos, tres o hasta seis elementos del Ejército, ingresaron a decenas de domicilios sin ninguna justificación u orden judicial que ameritara los allanamientos. A quienes los cuestionaban les referían que “se encontraban realizando un Operativo Nacional por órdenes directas del Presidente de la República”, que por tanto, no requerían de una orden escrita para realizar las revisiones domiciliarias. Asimismo, manifestaron que la resistencia no sería impedimento para que los cateos se realizaran. Otros relatos, indican que los militares afirmaban contar con una orden escrita, la cual en ningún momento mostraron bajo el argumento de que otros de los elementos que iban más adelante la traían.

Al interior de los domicilios se encontraban mujeres, niñas y niños de entre cinco y 15 años, así como personas de la tercera edad. El testimonio de una madre de familia nos deja ver el drama vivido:

Me encontraba en mi casa cuando los militares llegaron hasta mi puerta, estaba junto a mis cuatro hijos, tres mujercitas adolescentes y un niño. El hecho de que los militares se metieran a revisar mi domicilio diciéndome ‘que se encontraban realizando un operativo nacional y estaban autorizados para realizarlo’, tanto yo como mis hijos sufrimos muchos nervios y mucho miedo de que nos hicieran algo, pero yo más debido a que tengo la presión alta. El hecho de a ver a los militar entrar a mi casa, sola con mis hijas me hizo que me recorriera el miedo por todo el cuerpo debido a mi enfermedad. Aún tenemos mucho miedo por lo ocurrido y que vuelva a ocurrir.

Otro testimonio narra que los militares encontraron en su domicilio un arma de bajo calibre, la cual fue sustraída por uno de los elementos quien le ofreció devolvérsela a cambio de una cantidad de dinero. En otro caso, los soldados se negaron a entregarle el arma a su propietario, pese a que se encontraba dentro del domicilio para su defensa personal, y no era un arma de las catalogadas como prohibidas. Manifestó que no le permitieron anotar la matrícula para reclamarla con posterioridad,

ni le proporcionaron información respecto de dónde acudir para recuperarla; tampoco el nombre del militar que la sustrajo. Por otro lado, es importante resaltar que en varios de los hogares en los que se encontraban únicamente mujeres y niñas, estas últimas fueron amenazadas con rifles para evitar que se movieran. Lo anterior se describe el siguiente testimonio:

Sin mi consentimiento ingresaron a mi casa y realizaron el cateo ordenándole a mi hija que se quedara afuera, la cual fue apuntada con sus armas por los militares que resguardaban por fuera del domicilio. A mi otra hija le ordenaron que fuera a buscar a su padre al campo hasta que éste llegó y conversó con ellos. Una vez que los soldados se fueron de mi casa, se me subió la presión. Tanto mi esposo como mis dos hijas menores de edad se encontraban con mucho terror por los hechos recién ocurridos, y con mucho miedo a que regresen nuevamente.

Los testimonios también indican que estando los militares en la Plaza principal de la comunidad de Maltaraña, arribó al lugar la policía municipal de Jamay quien les solicitó datos a los militares. Finalmente, éstos se retiraron por el bordo que lleva a la comunidad de Magdalena, Michoacán, mismo lugar por el que ingresaron. Varios testimonios indican que los militares volvieron días después a media noche y únicamente transitaron por la calle principal de Maltaraña.¹³

Los hechos antes descritos violentan la legalidad y seguridad jurídica; el respeto al derecho a la integridad y seguridad personal, a la propiedad, así como el trato especial a grupos vulnerables como las mujeres y las niñas y niños; van en contra de los preceptos constitucionales que están obligados a respetar y garantizar y las obligaciones y compromisos que México ha adquirido internacionalmente en la materia. Algunos de ellos son: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, entre otras.

Asimismo, nos interesa enfatizar la gravedad que implica la violencia perpetrada a las mujeres y niñas en el presente caso. Los hechos propiciaron un riesgo inminente y una vulneración a su estabilidad y equilibrio emocional en torno a su integridad como mujeres. Fueron las mujeres las más victimizadas en esta revisión ilegal, ya que no se les permitió impedir ser molestadas en su intimidad y privacidad, ni romper las barreras sociales ante una institución incapaz de reconocer las necesidades especiales de las mujeres.

Ante el escenario expuesto, los y las habitantes de la comunidad de Maltaraña han decidido presentar, a nombre propio y con el acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., así como del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC., una queja ante la CNDH para que se investiguen y esclarezcan las violaciones de derechos humanos cometidos en Maltaraña,

así como para que se sancione a los responsables en busca de lograr que la impunidad y el silencio que encubren las violaciones de derechos humanos perpetradas por elementos de las fuerzas armadas en los poblados campesinos, marginados o en situación de vulnerabilidad no se perpetúen.

Notas Aclaratorias

- 1 Ministro Alejandro Negrín Audiencia Temática “El impacto de las políticas de seguridad pública sobre los derechos humanos en México”. 22 de octubre de 2008. 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, DC.
- 2 Extraído del dictamen de la Segunda Comisión, por el que se solicita al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, proporcione información sobre las acciones que se han llevado a cabo para cumplimentar el Decreto Presidencial de fecha 9 de mayo de 2007. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/08/asun_2353915_20070831_1188579413.pdf
- 3 Impunidad Uniformada. HRW. Abril de 2009. Pág. 2 <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0409spwebwcover.pdf>
- 4 Recomendaciones 15, 34, 37,38, 39, 40 respectivas al año 2007. Recomendaciones 10, 29, 30, 31, 32, 33,34,35, 36, 49, 54, 57, 67, respectivas al año 2008. Recomendaciones 08, 13, 15, 18, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, respectivas al año 2009
- 5 Audiencia Temática “El impacto de las políticas de seguridad pública sobre los derechos humanos en México”. 22 de octubre de 2008. 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, DC.
- 6 Recomendaciones 35, 36, 37, 43, 46, 51; y 3, 4, 5, 6, 7 de las recomendaciones rechazadas por el Estado mexicano.
- 7 www.cencos.org.
- 8 Recomendaciones número 11, 22, 23 y 48.
- 9 Declaración del Ministro en la Audiencia Temática “El impacto de las políticas de seguridad pública sobre los derechos humanos en México”. 22 de octubre de 2008. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, DC.
- 10 Medios UDG Noticias Ocotlán. 13 de julio de 2009. <http://mediosudgnoticiasocotlan.blogspot.com/2009/07/luis-carlos-najera-dio-conocer-avances.html>
- 11 .Exp.2009-659-T. Oficio no. 6135. 14 de agosto de 2009.
- 12 http://www.ceajalisco.gob.mx/localidades.php?cve=047&loc=0003#Escena_1
- 13 La información descrita es producto de los testimonios de las personas afectadas de la Comunidad de Maltaraña

Bibliografía

- ALTOLARRIAGA, Mónica. Seguridad Ciudadana en el Hemisferio. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Vol.38. 2003.
- Audiencia Temática “El impacto de las políticas de seguridad pública sobre los derechos humanos en México”. 22 de octubre de 2008. 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington, DC.
- ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, primera edición, México DF, 2009.

- Comunicado de prensa CNDH. CGCP/092/09. México, DF, 22 de julio de 2009. <http://www.cndh.org.mx/comsoc/compre/2009/092.html>
- Dictamen de la Segunda Comisión, por el que se solicita al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, proporcione información sobre las acciones que se han llevado a cabo para cumplimentar el Decreto Presidencial de fecha 9 de mayo de 2007.
- Documento de Recomendaciones hechas por los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Marco del Examen Periódico Universal de México. Febrero de 2009.
- Directorio para denuncia ciudadana. http://www.sedena.gob.mx/archivos/denuncia/DIRECTORIO_ACTUALIZADOSEP.2009.pdf
- Informe de Human Rights Watch. Impunidad Uniformada. HRW. Abril de 2009. Pág. 2 <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0409spwebwcover.pdf>
- Medios UDG Noticias Ocotlán. 13 de julio de 2009. <http://mediosudgnoticiasocotlan.blogspot.com/2009/07/luis-carlos-najera-dio-conocer-avances.html>
- Primer Informe de Gobierno. Sección *Estado de Derecho*, apartado *Crimen Organizado*, subtema *Combate al Narcotráfico*. http://primer.informe.gob.mx/1.1_ESTADO_DE_DERECHO/?contenido=145
- Respuesta a Solicitud de Información vía infomex a la CNDH. Exp.2009-659-T. Oficio no. 6135. 14 de agosto de 2009
- Recomendaciones 1990-2009. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. <http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp>
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. (2009). *Documento que presenta la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" como insumo para el Examen Periódico Universal de México*. México, DF:
- SANDOVAL PALACIOS, Juan Manuel. Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México. Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. VI. No. 18, Mayo-Agosto 2000.
- Tercer Informe de Gobierno. Sección *Estado de Derecho*, apartado *Crimen Organizado*. http://www.informe.gob.mx/informe/pdf/1_4.pdf

EL CAMINO DE LA ESPERANZA Y LA MEMORIA CONTRA LA IMPUNIDAD

Actualización del caso de Néstor Alan Rodríguez Licea

Francisco Macías Medina

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

.....
"No esperamos que este caso se convierta en uno, que luego de 20 años, los deudos y los defensores de derechos humanos sigan reclamando públicamente por el mal trabajo de las instituciones del Estado; hoy abrimos un nuevo proceso, en el cual, la reivindicación del nombre de Néstor Alan será a través de acciones que busquen la no repetición de estos hechos". (Boletín de prensa del CEPAD del 26 de noviembre de 2008).

Muchos de los sucesos que presenciamos cotidianamente nos invitan a la fatalidad, y nos impiden visualizarlos de forma esperanzadora.

Siempre será importante para una sociedad contar con la memoria suficiente que permita entender y entendernos para abrir paso al futuro. Reconstruirnos hoy, significa caminar con rumbo.

Desde el 26 de noviembre de 2006, en que Néstor Alan Rodríguez Licea fallece a manos de la impunidad y parálisis del sistema de justicia, la signos fueron contundentes: el dolor de su familia se transformó en movilización de conciencias, en responsabilidad ética, en exigencia para las autoridades a las que se sumó el trabajo de la organización para hacer visibles las causas y consecuencias.

Desde noviembre de 2008, las estrategias del caso cambiaron debido a la inactividad e inoperancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para defender un caso de tanta trascendencia en la ciudad, ya que hasta la fecha de la elaboración de este artículo no se había resuelto el expediente de queja, lo que se suma al silencio permanente de las restantes autoridades involucradas como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) o las mismas direcciones de Seguridad Pública del Estado y de Guadalajara, quizás informadas del caso pero más conscientes del riesgo político por los actores involucrados.

Se tomó la decisión de elaborar un estudio que propusiera un análisis de aspectos estructurales ligados con el caso, el señalamiento de las obligaciones del Estado con relación a los derechos humanos que se violaron, así como la presentación de una serie de peticiones dirigidas a distintas instancias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que buscaban generar una reacción jurídica y de exigencia.

Aspectos estructurales

Una de las obligaciones principales de un Estado que se precie de respetar los derechos humanos, es primordialmente el de evitar que “el ciudadano se haga justicia por propia mano, ni se ejerza violencia para reclamar un derecho”, para ello existen las instituciones, dígame tribunales y autoridades, que deben mediante procedimientos efectivos resolver los conflictos, a eso le llamamos debido proceso. (De Pina, 1996:215)

Cuando sucede un delito independientemente de su nivel y gravedad, de inmediato tiene aplicación el reconocimiento a que se nos procure y administre justicia a través de autoridades que realizarán esa función de manera gratuita, pronta, completa e imparcial¹; este es el caso, entre otros, del agente Ministerio Público, el cual con el auxilio de la policía y de expertos en diversas ciencias (peritos) tiene la obligación de perseguir el delito y a los que lo cometen.

Sin embargo, cuando el sistema de justicia no es funcional, aumenta la pérdida de confianza entre población y autoridades; se fomenta la impunidad; se favorece la delincuencia creada en la propia sede de la autoridad y provoca que éstos cometan conductas que fomentan la corrupción o propician ellos mismos delitos, como en el presenta caso. (Sarre, 2008:17)

Algunos indicadores de las debilidades del sistema de justicia penal de Jalisco son preocupantes, como el hecho de que la cifra negra de delitos en Jalisco alcance el 92.5 % y de los que se denuncian no se inician investigaciones en un 80 % de los casos; es decir, de cada diez delitos que se hacen del conocimiento de las autoridades, sólo en dos se tramita una averiguación previa. (Moloesnik, 2006: 22 y 23)

Conforme a una reciente Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización, realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios contra la Inseguridad (Icesi) en el país, en el 63% de los casos los denunciantes se mostraron insatisfechos con la actuación del Ministerio Público porque las autoridades no hicieron lo suficiente o no se interesaron², datos que ofrecen un panorama desalentador para los que han sufrido las consecuencias de un delito.

El segundo rasgo estructural que encontramos, es el aspecto de la reiteración de incidentes de personas que bajo el influjo del alcohol conducen automotores y provocan accidentes. De acuerdo con información periodística, a nivel nacional mueren 55 personas al día por esa causa, por lo que comienza a llamársele la “epidemia silenciosa”³.

El Informe 2007 del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco (CEPAJ), relativo a la vigilancia epidemiológica de la mortalidad, elaborado con los reportes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la propia Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), indica de manera alarmante que el alcohol estuvo presente en el 26.9% de las defunciones por accidentes viales en 2006 y 2007, incrementándose dicha cifra en un 5.4% en comparación con el 2004.

Se reconoció que diariamente muere una persona en Jalisco por la combinación entre alcohol y volante, lo que coloca a la entidad en el décimo lugar nacional⁴.

En el aspecto preventivo, se informó de la existencia de la campaña “Si tomas pasa el volante”, cuyas acciones consisten en impartir conferencias en universidades, transmisiones de cápsulas informativas en radio, televisión y los mismos restaurantes, entrevistas en medios de comunicación, participación en stands informativos, así como la intensificación del operativo radar y alcoholímetro por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

Por otra parte, en el primer Informe de Gobierno del estado de Jalisco, al referirse al tema de seguridad vial, se informó del levantamiento de 77 mil 809 cédulas de notificación de infracción en contra de personas que conducían a exceso de velocidad.⁵

De acuerdo a información periodística, se impulsa en la Comisión de Vialidad del Congreso del Estado, una iniciativa que pretende aumentar las sanciones en contra de conductores ebrios, para que en caso de que produzcan accidentes, se considere el delito como grave dentro del Código Penal y se suprima la libertad “bajo fianza”, al mismo tiempo de aumentar en cinco veces las sanciones actuales; sin embargo dicha iniciativa se encuentra “detenida” en la Comisión de Puntos Constitucionales.⁶

Las obligaciones del Estado y las peticiones

Antes de adentrarnos en el tema, es importante señalar que la queja 2600/2006 que la familia Rodríguez Licea presentó ante la CEDHJ, se encuentra en investigación en la Segunda Visitaduría General desde ya hace más de dos años, sin que se tenga noticia de que se encuentre en vías de ser resuelta, aspecto que por sí sólo refleja inactividad y falta de compromiso de este organismo para cumplir con su misión de defender los derechos humanos.

En el caso del Poder Judicial del Estado, el 10 de julio de 2009, el Juez Octavo de lo Penal dentro del proceso 710/2006-B, dictó sentencia condenatoria en contra de Francisco Xavier Álvarez del Castillo Iñiguez y Christian Arias de la Torre por los delitos de homicidio y daños en las cosas, imponiéndoles tres años de prisión.

La sentencia comprueba de manera contundente que la falta de los exámenes de alcoholemia oportunos y la forma en que se desarrollaron los peritajes, impidieron al juez valorar con mayor

gravedad la conducta de los ahora sentenciados, los cuales por cierto presentaron recurso de apelación para que sean magistrados del Supremo Tribunal de Justicia quienes ahora revisan el caso.

Los hechos demuestran que los incumplimientos de agentes del ministerio público, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, policías investigadores, del estado y municipales, violaron derechos a la legalidad y al debido proceso legal,⁷ ya que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones de manera efectiva, dentro de un plazo razonable; obligación que no es exclusiva del Poder Judicial sino de cualquier autoridad incluyendo las administrativas.

Involucra también el derecho a la igual protección de la ley sin distinciones,⁸ que obliga a los funcionarios a garantizar la imparcialidad, lo cual supone que “no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden, y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes”,⁹ ambos aspectos se aprecian en las violaciones de derechos humanos cometidas por los servidores públicos, al actuar tomando en cuenta de manera arbitraria el parentesco de los inculcados y realizando actuaciones que evidentemente favorecieron a los detenidos para disminuir su responsabilidad penal en los hechos, con lo cual no se puede decir que el Agente del Ministerio Público y sus auxiliares hayan realizado una investigación imparcial.

Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, considera que desempeñarán su función con imparcialidad, firmeza, prontitud, evitarán la discriminación, y garantizarán la objetividad durante las investigaciones, en las cuales deberán de prescindir de situaciones ventajosas o desventajosas para el sospechoso, además de tomar en cuenta las opiniones e inquietudes de las víctimas.¹⁰

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley,¹¹ precisa: “Debe aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla contra sus propios agentes y en sus propios organismos”.¹²

Se añade la violación al derecho a la seguridad jurídica, por la ausencia de una verdadera procuración de justicia llevada de forma respetuosa a la ley, pronta, completa y debida, ya que al contrario existió negligencia y abandono en la función de perseguir el delito, además de abuso y desvío de poder.

También existe una violación al derecho a la verdad, basado en que es necesario conocer fehacientemente lo sucedido, por “ser esencial para evitar en lo futuro se repitan tales actos”,¹³ aspecto que tiene vinculación con la obligación del Estado de investigar hechos violatorios de derechos humanos.¹⁴

Por los anteriores razonamientos, el 26 de noviembre de 2008 se presentaron solicitudes a los siguientes servidores públicos:

- a) Al Gobernador del Estado de Jalisco, se le solicitó en resumen:
 - Que instruyera a la PGJE y al IJCF, la realización de investigaciones, exhaustivas, serias, prontas y eficaces, en contra de los servidores públicos involucrados, así como el deslinde de responsabilidades.
 - Investigar el retraso generalizado en las solicitudes de los agentes del Ministerio Público para la solicitud de estudios de alcoholemia; y a los peritos, en lo que se refiere a la atención de esas peticiones.
 - Se reconozca la participación de las víctimas de accidentes en el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.
- b) Al Congreso del Estado, se solicitó en resumen:
 - Revisar la legislación de vialidad y la penal, para incrementar las facultades de los funcionarios y la efectividad de las sanciones.
 - Establecer un mecanismo alternativo de reparación del daño para las víctimas.
 - Declarar el 26 de noviembre de cada año, como el Día Estatal en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
- a) Por último, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a la CEDHJ, se les solicitó al primero, la revisión y agilización del proceso penal, y al segundo, la conclusión del expediente de queja.

De los anteriores, sólo se recibió respuesta del Supremo Tribunal de Justicia y del Gobernador del Estado de Jalisco; éste último a través de la Dirección de Atención Ciudadana, con el que derivó las peticiones a la PGJE y al IJCF.¹⁵

La PGJE, contestó el 3 de marzo de 2009, a través de la Dirección de Supervisión de Derechos Humanos de la misma,¹⁶ la cual solicitó desde esa fecha a la Contraloría Interna el inicio y resolución de procedimientos administrativos. De ello, no se tuvo mayor información hasta que la familia Rodríguez Licea y el CEPAD, la solicitaran el 15 de septiembre de 2009. Recientemente el 19 de octubre de 2009, se ratificó la inconformidad en la Contraloría Interna.

En condiciones similares, el IJCF respondió la solicitud el 18 de diciembre de 2008, pero condiciona de manera injustificada su respuesta, a la resolución de la queja ante la CEDHJ, cuando se trata de solicitudes y procedimientos diversos. Sin embargo, producto de las gestiones realizadas en julio de 2009, somos recibidos por el Director de la coordinación de asesores y apoyo jurídico el 21 de agosto del año en curso, a quien se le reitera la solicitud para que se realizara el deslinde de responsabilidades, aspecto que finalmente es aceptado el 17 de septiembre de 2009.¹⁷

Por su parte, el Consejo de la Judicatura del Estado, manifestó ser incompetente de acuerdo a sus facultades para atender las peticiones, las cuales debían de dirigirse al propio juez, además de informar de la posibilidad de presentar alguna queja por faltas administrativas.¹⁸

De manera lamentable, el Presidente de la CEDHJ y el Congreso del Estado, no han dado contestación a las peticiones, lo que profundiza aún más las violaciones de derechos humanos ocasionadas a la familia Rodríguez Licea.

El CEPAD, como organización de la sociedad civil continuaremos en la gestión de las peticiones porque estamos convencidos de que es necesario fortalecer la memoria de la sociedad, como una forma de combate a la impunidad y de evitar la tolerancia a ese tipo de hechos, para que no vuelvan a ocurrir.

Notas aclaratorias

- 1 Artículo 17 de la CPEUM.
- 2 http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/encuesta_internacional_sobre_criminalidad_y_victimizacion.pdf
- 3 “Tolerancia en alcohol en conductores es fatal en Jalisco”. El Informador. <http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/130654/6/tolerancia-de-alcohol-en-conductores-es-fatal-en-jalisco.htm>
- 4 Nota periodística titulada: “Una persona muere a diario en percances viales” El Informador, del 12 de noviembre de 2007, sección local.
- 5 http://www.informe.jalisco.gob.mx/files/desarrollo_social.pdf
- 6 Nota publicada en la página de internet de El Occidental: www.oem.com.mx/eloccidental, titulada: “Será delito grave conducir borracho. Analizan Diputados suprimir beneficio de fianza para ebrios”, del 29 de abril de 2008, sección Guadalajara.
- 7 De acuerdo al artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- 8 Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- 9 Comité de Derechos Humanos, caso Karttunen c. Finlandia, párr. 7.2, citado en Ibidem. P. 378.
- 10 Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales, números 10-15.
- 11 Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979.
- 12 Números 1 y 7.
- 13 Conjunto de principios para la Protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, citado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, Jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Primera Edición, Bogotá, abril de 2004; pág. 500.
- 14 Ver CIDH, caso Parada Cea c. El salvador, párr. 147, caso Chafeau y otros, párr. 95. Caso Parada Cea, párr. 150. Caso Romero, párr. 148.
- 15 Oficio de canalización CASE/5306/08-C, del 1 de diciembre de 2008.
- 16 0347/2009, de la Dirección de Supervisión de Derechos Humanos de la PGJE.
- 17 Oficio IJCF/CI/315/2009, suscrito por el Contralor Interno del IJCF.
- 18 SO 41/2008A92P...S913, suscrito por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado.

Bibliografía

1. DE PINA Rafael, de Pina Vara Rafael. “Diccionario de Derecho”. Editorial Porrúa, vigésima tercera edición, 1996.
2. MOLOESNIK Marcos Pablo, Moloesnik Víctor Gustavo. “Reporte Jalisco. Estudios sobre reformas penales comparadas”. Universidad Nacional de Rosario, Cidac y Universidad de Guadalajara. 2006.
3. SARRE Miguel, Aguirre Santiago, Mesta Santiago, Serrano Sandra. “El investigador de la defensa pública. Manual para favorecer la equidad procesal: Caleidoscopio de la defensa pública”. Asociación Mexicana para las Naciones Unidas AC. 2008.

UN RECHAZO LEGÍTIMO, UNA CARRETERA ILEGAL

Nora Berenice Lorenzana Aguilar
Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas

Desde 2008 la Comunidad Wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, localizada en el Municipio de Mezquitic, en el norte del Estado de Jalisco, sostiene una lucha para detener la construcción de un proyecto carretero, el cual contempla atravesar y dividir su territorio ancestral por la mitad. Este proyecto violenta los derechos fundamentales que como pueblo originario tienen, menoscabando su vida y costumbres, agrediendo los tiempos sagrados de la Comunidad, además de alterar y desintegrar una cultura indígena milenaria. Por ello, para entender la lucha que están viviendo los wixaritari de Tuapurie, es necesario tomar en cuenta, la forma en que ven la vida y los elementos que en ella existen; cuando hablan de tierra, no sólo se trata de la tierra que cultivan, sino de *Takiekari*, legado que los antepasados transmitieron a sus primogénitos para que lo cuidaran y defendieran siendo ellos mismos los guardianes del mundo y del universo.

El proyecto carretero consiste en la modernización y ampliación del camino Bolaños – Tenzompa – Huejuquilla El Alto, en el estado de Jalisco, con una longitud aproximada de 137 kilómetros. El trazo que daña el territorio de Tuapurie, atraviesa de sur a norte a la Comunidad wixárika, afectando un aproximado de 19 kilómetros de longitud y una superficie de alrededor de 80 hectáreas. Este trabajo es parte del *PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS* (PIBAI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Este programa contemplaba obras a realizar en el transcurso del ejercicio fiscal de 2007. Así pues el 02 de agosto de 2007, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco y la CDI celebraron un Acuerdo de Coordinación para la operación del programa.

Es importante señalar que, este Programa es considerado por la CDI como un proyecto de importancia estratégica, el cual a través de sus reglas de operación establece como objetivo general, mediante la ejecución de obras de infraestructura básica, el contribuir al desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades, otorgando prioridad a las regiones indígenas, con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos.¹

Sin embargo, en los hechos nada de esto fue informado ni respetado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y la Delegación de la CDI en el Estado, pues jamás concedieron a la Comunidad la oportunidad de decidir sobre sus propias prioridades; lo anterior, evidenció la falta de oportunidad otorgada a la comunidad de Tuapurie para participar en la formulación, aplicación

y evaluación de dicho Programa; de igual manera, no fue respetado el derecho de la comunidad de ser consultada, para obtener el consentimiento libre, previo e informado mediante el cual fuera aprobado este proyecto, aún y cuando se trata de un proyecto que afecta su territorio sagrado.

Por el contrario, y contraviniendo normas internacionales y nacionales, las Autoridades señaladas engañaron, amedrentaron y presionaron a la Comunidad para imponer el proyecto, recurriendo hasta la falsificación de documentos comunitarios para dar inicio a los trabajos de construcción.

Antecedentes

La primera vez que la Comunidad de Tuapurie tuvo conocimiento sobre el proyecto, fue el 9 de septiembre del 2007, mientras se desarrollaba una reunión del Comité de Cultura en la localidad de “Las Latas”, en la que exclusivamente se tocarían puntos relativos a la cultura. Intempestivamente hicieron su aparición el Ingeniero Guadalupe Flores Flores, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el Estado de Jalisco y Colima, y el Ingeniero Andrés Quiroz Hermosillo de la CDI Mezquitic; asimismo se presentó el Lic. Miguel Ángel Medina López, presidente municipal de Huejuquilla el Alto, en el estado de Jalisco; el Dr. Miguel Ángel García Santana, director general de vinculación de la Secretaría de Planeación y la Arq. Suseth Herrera Jiménez, directora de convenios y regularización de la Secretaría de Desarrollo Urbano; su presencia tenía por objeto dar a conocer el proyecto carretero de referencia y obtener la anuencia para el derecho de vía del proyecto carretero Huejuquilla el Alto – Bolaños – Amatitán, dentro de las tierras de la Comunidad indígena; sin embargo, en ese momento no se otorgó ninguna autorización.

En La Asamblea del 10 de noviembre de 2007, la comunidad de Tuapurie analizó minuciosa y detalladamente el proyecto carretero. Concluyeron que era un proyecto que dividía el territorio comunal; que no existía manifestación de impacto ambiental; que existiría saqueo y/o tráfico de la flora y fauna; que habría afectación a los mantos acuíferos y contaminación; considerando que dicho proyecto era un atentado en contra de la “Autosuficiencia y Autonomía”, pues traería facilidades a comercios externos, programas de gobierno y proyectos a empresas nacionales y extranjeras para la explotación de recursos naturales. Consideraron asimismo que esto aumentaría los índices de alcoholismo y accidentes automovilísticos; el robo y pérdida de ganado, y finalmente que el proyecto atentaría gravemente a la cultura, lo anterior debido al desconocimiento a los usos, costumbres y centros ceremoniales de la comunidad, concluyendo que el único beneficio, era el medio de transporte.

La comunidad advirtió que no existió consulta ni planeación del proyecto y solicitó que las autoridades mostraran documentos mediante los cuales la Comunidad hubiera autorizado la pavimentación; asimismo consideró que la Comunidad tiene otras prioridades de comunicación (mantenimiento de caminos existentes, puentes colgantes). Lo narrado con antelación se presentó por escrito el 21 de noviembre de 2007 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Jalisco;

la Secretaría de Desarrollo Urbano dependiente del Gobierno del Estado; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Jalisco y al C. Emilio González Márquez, gobernador del Estado Jalisco. El 26 de noviembre del mismo año, se presentó también, presentándola también ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

A pesar de ello, en enero de 2008, mediante una ocupación ilegal al territorio comunitario, se introdujo maquinaria y trabajadores de diverso tipo, los cuales ingresaron por el lindero Norte de la comunidad, dando inicio, sin la autorización comunitaria, a los trabajos de la carretera Huejuquilla El Alto – Bolaños – Amatitán causando una gran cantidad de afectaciones, materiales, ambientales y culturales. Es importante señalar que la Comunidad, mediante acuerdo de asamblea del 10 de febrero de 2008, tomó la determinación de detener los trabajos de construcción, pues a pesar de la duración “breve” de los trabajos, ya habían ocasionado afectaciones invaluable tanto a su cultura como a su territorio.

El 16 de febrero de 2008, a través del periódico Público, se dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, en un intento de justificar su ilegal proceder presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), un Acta de Asamblea apócrifa fechada el 9 de septiembre del año 2007, mediante la cual supuestamente la Comunidad indígena autorizaba al Gobierno del Estado de Jalisco, la ocupación previa de una superficie de 76.72 hectáreas dentro de las tierras propiedad de la Comunidad wixárika, así como para que se instaurara ante la Secretaría de la Reforma Agraria el expediente de expropiación respectivo, estableciéndose en el documento de marras la supuesta autorización por el voto de 486 comuneros de un total de 518 que integran la Comunidad Indígena de Tuapurie.

La Comunidad de Tuapurie desconoció el documento de referencia dada la falsedad de lo asentado, así como por no reflejar la voluntad de la Asamblea Comunitaria de Tuapurie, y la ha calificado como una falta de respeto total por parte de la Autoridad a su derecho de libre determinación. La evidente falsedad del Acta de Asamblea, se advierte en el formato de convocatoria, así como en la estructura, desarrollo y redacción de la misma ya que no es acorde con la manera tradicional en que la comunidad realiza dichos actos.

Los Daños

El trazo carretero que afecta el territorio indígena es de una longitud de 19.966 kilómetros y una superficie de 80 – 59 – 14 hectáreas.² Dentro de los daños materiales y ambientales ocasionados se encuentra la destrucción y consecuente afectación de los caminos y brechas comunales, los cuales aún se encuentran intransitables; la ilegal extracción y posterior disposición de diversos materiales geológicos (tepetate, piedra de mampostería, etc.) esto sin anuencia alguna de la Comunidad; la tala inmoderada y clandestina de pinos, robles y encinos; la extracción también inmoderada de agua que

provocó la posterior desecación de varios bordos, pozas y manantiales, generando severos daños a la flora, fauna, suelo y agua de la Comunidad, situación que requiere de urgentes medidas de mitigación ambiental en los términos de la legislación aplicable.³

Aunado a lo anterior, existieron daños ocasionados a diversas posesiones individuales de varios de los comuneros de Tuapurie, en virtud de la destrucción de cercos de piedra, alambrados, mangueras que hacen las veces de tubería para transportar agua del manantial localizado en el paraje conocido como “Ciénega de los Caballos” a la localidad de “Los Órganos”; e inclusive la demolición injustificada de una casa habitación propiedad del comunero Rosendo Carrillo Hernández.

Es importante resaltar que estos daños no han cesado por la simple suspensión de los trabajos llevados a cabo sino que, debido a factores tales como el temporal de lluvias, la erosión, la pérdida de capa fértil, y asolvamientos de cuerpos de agua, han agravado los perjuicios causados a la comunidad.

Sin ser óbice de lo anterior, es de suma importancia tomar en cuenta que los wixaritari comparten una tradición asentada en su memoria colectiva por la cual reviven y reformulan la relación que tienen con sus antepasados (los transmisores autorizados de una compleja herencia cultural) y la naturaleza, existiendo representaciones personificadas de las fuerzas naturales, entre las que podemos encontrar la tía del crecimiento, el abuelo fuego, la tía de la lluvia, los antepasados que habitan los ojos de agua, los montes, las piedras, las cuevas, las lagunas, el mar y los animales, los que imprimen un orden moral y sagrado a su vida, cumplimentando la responsabilidad que *los primeros seres* les legaron sobre ciertos sitios sacralizados (*Wirikuta* en el desierto, *Xapawiyeme* en el lago de Chapala, *Hauxa manaká*, el cerro gordo en Durango y *Haramara* en la costa de San Blas).

La ruta a *Wirikuta* tiene una longitud de 500 kilómetros en dirección oeste-noroeste, desde el territorio wixárika, localizado en la Sierra Madre Occidental, al norte del estado de Jalisco cruzando transversalmente el estado de Zacatecas hasta llegar al norte del estado de San Luis Potosí donde se ubica al desierto de Real de Catorce. Esta ruta milenaria, tiene como función el aprovisionamiento del peyote ritual mientras que se siguen los pasos de los antepasados para pedir lluvia y bienestar.

A lo largo de esta ruta habitan las deidades y los espíritus de los ancestros, vida silvestre o salvaje. Los sitios sagrados, donde las deidades “expresan sus voces” están en islotes, humedales, ríos, lagunas, manantiales, bosques, montañas, cuevas o formaciones rocosas. En el camino se encuentran a los *kawíxi*, logrando que la experiencia sea igualmente educativa, pues los santuarios y *Kawíxi* contienen significados espirituales, los cuales forman parte de su legado ancestral indígena al que se rememora con el caminar.

Así, en la peregrinación anual a *Wirikuta* realizada por los tuapuritari en 2008, al llegar al sitio sagrado denominado “El Paso del Oso”, un *kawi* o monolito en forma de oso, se encontraba sepultado bajo

toneladas de tierra debido a los trabajos con motivo del proyecto a que hemos hecho referencia, viéndose imposibilitados para realizar las ceremonias y ritos acostumbrados, afectándose su tradición y por tanto su cultura milenaria.

Lo anterior resulta grave no sólo porque los derechos internacionalmente reconocidos han sido violentados, sino porque afecta la supervivencia y permanencia de un pueblo originario, como es el pueblo wixárika, quienes interrelacionan concepciones religiosas con el territorio pues en base a ello se conforman las raíces de su cultura e incluso se sustenta la existencia como pueblo diverso.

En la actualidad, la comunidad internacional ha reconocido esta relación sagrada indígena sobre el territorio; la Corte Interamericana de derechos Humanos ha determinado en diversos casos:⁴ “La estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana”⁵

Sin embargo, a pesar de estas obligaciones internacionales, los derechos de consulta, la decisión sobre un desarrollo propio, el derecho a la libre determinación y autogobierno, así como el derecho a seguir conservando y reforzando su propia cultura, además de la protección para conservar sus territorios tradicionales, fueron violentados y hasta la fecha no han sido reconocidos, ni resarcidos.

La construcción de cualquier obra dentro de territorios indígenas debe de tomar en cuenta por disposición expresa de la Ley, no solo el legítimo derecho de propiedad sino además, el derecho de conservar las formas propias de organización y prever sobre todo todas las posibles afectaciones que dicha obra pueda traer para la continuidad de las costumbres ancestrales.

El territorio según la concepción indígena integra los elementos de la vida en toda su diversidad natural y espiritual: la tierra con su diversidad de suelos, ecosistemas y bosques, la diversidad de los animales y las plantas, los ríos, lagunas y esteros. Los ecosistemas naturales son considerados por los pueblos indígenas como hábitat de los dioses protectores de la diversidad de la vida y gracias a ellos se mantiene la integridad y el equilibrio del bosque, de los ríos, de las lagunas y la fertilidad del suelo, lo que permite que las plantas y animales puedan vivir y reproducirse.

Por ello, el derecho a una consulta, a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, obliga a las autoridades participantes a informar, no sólo de la existencia del proyecto, sino todo aquello que asegure la participación en la planificación, elaboración y ejecución del referido Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar sus derechos fundamentales y otorgarles la posibilidad de decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural.

Notas Aclaratorias

- 1 Acuerdo de coordinación del programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBAI), DOF 21 de noviembre de 2007.
- 2 Peritaje Topográfico presentado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, dentro del expediente 596/2008 de juicio de amparo interpuesto por la Comunidad de Tuapurie vs diversas autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco y Autoridades Agrarias.
- 3 Resultados de valuación de daños realizada por Autoridades comunitarias y la AJAGI.
- 4 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya, 2006: párr. 118. Cfr. también Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, 2005, párr. 137.
- 5 Caso Suramaka vs. Suriname, 2007: párr. 89.

PRESA EL ZAPOTILLO

Irregularidades y contradicciones de un proyecto, dignidad y resistencia de las comunidades.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC)

El proyecto de presa El Zapotillo se localiza a 100 km. de Guadalajara, sobre el Río Verde, entre Yahualica y Cañadas de Obregón, Jalisco. Es impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los Gobiernos del Estado de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de agua potable a la ciudad de León, (Guanajuato), la región de los Altos de Jalisco y la ciudad de Guadalajara; surge de un convenio firmado en 1997 entre estas instancias.¹

El proyecto actualmente contempla una cortina de 105 metros de altura y almacenaría 911 millones de metros cúbicos de agua. El embalse afectaría un área de 4500 hectáreas y tendría un costo total estimado de \$8,010 millones de pesos.² La inversión privada en esta presa sería del 30% por parte de la empresa que gane la licitación y su forma de recuperación sería a través de la concesión del 100% de las ganancias para el uso, manejo y distribución del agua por 25 años³, privatizando de esta manera este bien común, que es a su vez, un derecho.

La presa implica el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago a la cuenca del río Lerma (aproximadamente 120 millones de metros cúbicos anuales), con impactos ambientales que no han sido considerados, tales como la afectación aguas abajo de la presa que implicaría el abatimiento de los mantos acuíferos de municipios como Tepatlán, Acatic y Zapotlanejo. Tampoco se han analizado de manera integral todas las opciones de abasto para León en su misma cuenca⁴.

En la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, la más grande del país, que atraviesa los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Aguas Calientes, Michoacán, Jalisco y Nayarit, están operando la presas hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón; está en construcción la presa hidroeléctrica La Yesca y en proyecto la presa Arcediano. La presa El Zapotillo sería una más que agravaría la situación de sobreexplotación, contaminación, conflictos y disputas por el agua presentes en la cuenca. No se han estudiado los impactos acumulativos de esta serie de presas en términos de calidad y cantidad del agua, la retención de sedimentos y sus consecuencias en conjunto para los ecosistemas costeros, que ya sufren de gran degradación.

La presa tendría una vida útil de tan sólo 25 años y destruiría el cauce natural del río Verde, inundando a las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, en donde viven aproximadamente unas

700 personas, pero que tienen una población migrante denominada “hijos ausentes”, que mantiene sus lazos comunitarios, la cual suma más de 3000 personas. Asimismo resultarían afectadas las localidades de Cofradía y El Zapotillo.

La afectación ambiental que provocaría este megaproyecto tampoco ha sido estudiada con profundidad, pero dañaría gravemente el corredor biológico del río Verde y zonas con gran riqueza de flora y fauna como la barranca de los Colomos, que es un ecosistema único en la región.⁵

La importancia cultural e histórica de estas comunidades es muy trascendente. Se calcula que los primeros asentamientos indígenas en Temacapulín datan del siglo VI y su relevancia proviene de ser geográficamente el único cruce natural del río Verde, que va desde Aguascalientes hasta la costa del pacífico en Nayarit, lugar en el que se unía Mesoamérica y Aridoamérica. Los mexicas en su peregrinación desde el norte, se asentaron en esta región antes de continuar su camino hacia el Valle de México. Estas comunidades formaron parte de la nación de los Tecuexe y la conquista los alcanzó en 1530. En 1541 participaron en la rebelión general indígena de la nueva Galicia llamada “La guerra del Mixtón”, en la que cuentan las crónicas que Pedro de Alvarado, conquistador español, fue herido de muerte.

En estas comunidades existen tres templos de gran relevancia histórica y religiosa: el del Niño de Flamacordis y la Virgen del Rosario en Acasico y la Basílica de los Remedios en Temacapulín. Esta última cumple 250 años de construida en este año 2009. A su vez en las peñas de Temacapulín está plasmada la imagen de un Cristo llamado “El Señor de la Peña” que es muy venerado en la región. La dirección de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco en abril del 2008, dictaminó que las construcciones antiguas de estos poblados son consideradas patrimonio cultural y solo pueden estar sujetas a conservación y restauración especializada.⁶

Hoy en día la comunidad de Temacapulín es un centro de atracción turística para toda la región de los Altos de Jalisco, tanto por sus históricas construcciones, su importancia religiosa, su riqueza geográfica y ambiental, y sus famosas fiestas, como por las aguas termales que lo han distinguido desde hace cientos de años, por lo que su desaparición sería una gran pérdida de oportunidades para el desarrollo local.

A partir de que las comunidades se enteraron del proyecto de la presa a través de los medios de comunicación y las organizaciones sociales, se han mantenido firmes en su oposición a la reubicación y en la exigencia del respeto a sus derechos humanos, pero han padecido hostigamiento, amenazas, burlas, una sistemática ausencia de información y la debida consulta. El reporte de la Comisión Mundial de Represas, instancia promovida por el Banco Mundial con el fin de marcar lineamientos para la construcción de estos proyectos señala: “No debe construirse una presa sin que las comunidades afectadas hayan sido debidamente consultadas”⁷

El 31 de mayo del 2005 el ex-Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, al declarar la cancelación definitiva de la presa de San Nicolás - proyecto aguas arriba que antecedió a la presa El Zapotillo- ante la presión de los pobladores de San Gaspar, se comprometió a que al buscar otro sitio para el proyecto de trasvase del Río Verde a la ciudad de León, se guiarían bajo los siguientes lineamientos: “que no se afecten núcleos de población y que no se afecten grandes superficies agrícolas de alta rentabilidad.”⁸ Temacapulín, Acasico y Palmarejo son núcleos de población y sus tierras son muy rentables y extensas, teniendo un gran potencial de desarrollo a nivel agrícola y turístico, además de su alto valor histórico y cultural para el país. Pero ese mismo año comenzaron a hacerse estudios para la construcción de la Presa el Zapotillo sin informar a la población.

En el proyecto original serían inundadas únicamente las poblaciones de Acasico y Palmarejo, contemplando la construcción de diques para impedir el paso del agua hacia el poblado de Temacapulín, lo que de por sí representaba una amenaza para sus pobladores. Pero el 2 de agosto del 2007 el Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció con su homólogo de Guanajuato, que la cortina de la presa El Zapotillo crecería de 80 a 105 metros, inundando también el poblado de Temacapulín.

El 24 de enero de 2008, Raúl Antonio Iglesias Benítez, Gerente Regional del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA en conferencia de prensa declaró:

Entrevistador: ¿Tienen planteado un escenario B en caso de que la oposición de los habitantes impida la construcción de la presa en El Zapotillo?

Raúl Antonio Iglesias: Yo tengo de escenario lo que es Arcediano y Zapotillo, nada más. El cañón del río Verde ha sido uno de los más estudiados en todo el país y hay estudios a lo largo de todo el cañón desde hace más de 50 años, desde el 52-54, los sitios técnicamente mejores para construir esta infraestructura, por eso se están tomando, son Arcediano o El Zapotillo. Es decir, o se salen o se ahogan. Les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen, contestó en tono de broma.⁹

El 23 de mayo del mismo año, el Gobernador de Jalisco, en reunión con representantes de la comunidad de Temacapulín se comprometió a que si más del 50% de la población no deseaba la presa, ésta no se iba a construir y que la expropiación no estaba contemplada. A su vez dio su palabra de que las comunidades no serían hostigadas por el aparato gubernamental y que él personalmente presidiría reuniones de seguimiento mensual. Asimismo, que a los tres meses acudiría a Temacapulín para hacer la propuesta de reubicación de la comunidad.¹⁰ Dichas reuniones nunca se llevaron a cabo, tampoco acudió a la comunidad y la presión para los pobladores se ha incrementado a partir del 15 de junio, la cual ha sido ejercida por parte del gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y por parte del gobierno federal, a través de la CONAGUA y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), los cuales han amedrentado, amenazado y violado sistemáticamente los derechos humanos de la población.

Del 19 al 21 de junio del 2008, se llevó a cabo en Temacapulín el V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el cual fortaleció el proceso organizativo y de defensa de la población. En esta ocasión se conformó el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, generando un plan de acción para la defensa de los derechos y territorio de los tres poblados. Después de este evento las comunidades afectadas han realizado múltiples acciones de exigibilidad y denuncia ante los diversos embates del gobierno, pero éste se ha empeñado en realizar el proyecto pese a las múltiples irregularidades del mismo y los compromisos adquiridos desde la firma del acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato antes mencionado, en el que se señala explícitamente que este proyecto hidráulico no debe afectar derechos de terceros.

Desde el mes de julio de 2008, maquinaria pesada está trabajando en el sitio en donde se pretende construir la cortina, haciendo túneles, derribando árboles, aplanando caminos y utilizando dinamita. Esto pese a que a través de la respuesta a una solicitud de información a las autoridades, el 12 de agosto del 2008, la CONAGUA declaró que no se había concluido el proyecto ejecutivo de la Presa el Zapotillo, negando la información complementaria solicitada con el argumento de que su difusión puede “poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de alguna persona”¹¹. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a través de un pronunciamiento efectuado el 13 de agosto del 2008, solicitó a las autoridades abstenerse de realizar actos de hostigamiento en contra de la población y la suspensión inmediata de las obras, hasta que ésta sea informada y consultada de manera adecuada. El 7 de enero del 2009 el presidente de dicha Comisión visitó Temacapulín, recibiendo 180 quejas más y en conferencia de prensa, dos semanas después, reiteró las medidas cautelares. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso a dichas medidas. En este mismo sentido, el 11 de marzo del 2009, se realizó una reunión con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), con el fin de dar continuidad al acercamiento que han tenido al caso.

La licitación para la obra fue publicada en el 20 de noviembre de 2008¹² sin contar con viabilidad social, un Manifiesto de Impacto Ambiental, el cambio de uso de suelo para los 105 mts. de altura de la cortina de la presa, ni tampoco el permiso por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la reubicación del templo, y de los otros edificios. En diciembre del 2008 iniciaron las acciones de defensa jurídica; se interpusieron 7 amparos ante la licitación, en los que las autoridades de la CONAGUA niegan que este proyecto exista. Sin embargo sus declaraciones en los medios son que la presa “va porque va”, apresurando a la población para que acuda a entregar su patrimonio, amenazando con la expropiación.¹³ En enero del 2009 se promovieron 62 juicios de nulidad administrativa ante la licitación. Dicho procedimiento así como el de los amparos siguen en proceso.

El 28 de agosto del 2009, ante la inminente adjudicación de la licitación, se realizó una manifestación afuera de las oficinas de la CONAGUA. La decisión se pospuso hasta el 14 de septiembre del

2009, cuando finalmente, la CONAGUA dio a conocer los ganadores: La Peninsular Compañía Constructora, en asociación con FFC Construcción y Grupo Hermes. Ante esto, se llevó a cabo una campaña de cartas de diversas organizaciones civiles y movimientos sociales dirigidas a las empresas ganadoras, con el objeto de informales sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido y para advertirles que se agravarían en caso de llevarse a cabo el proyecto.

El 25 de septiembre de 2009, el Cabildo del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, rechazó el cambio de uso de suelo para los 105 metros de la cortina de la presa El Zapotillo; es decir, la CONAGUA solamente cuenta con la anuencia para la construcción de una cortina de 80 metros de altura, más no para aumentarla otros 25 metros.

Las acciones de resistencia que han realizado las comunidades han sido siempre de carácter pacífico y dentro del marco de la ley, aunque las autoridades se han empeñado en criminalizar el movimiento y menospreciarlo. El 10 de febrero del 2009, ante las múltiples manifestaciones de protesta y los pronunciamientos de personalidades y grupos a nivel regional, nacional e internacional, el Presidente Municipal de León, (ciudad que sería beneficiada por la presa), declaró que la Presa el Zapotillo ya no era una obra urgente, porque ya se estaba dando mantenimiento a las redes de distribución de agua,¹⁴ aunque los industriales de la región exigen que la obra se construya.

El 21 de mayo de 2009, se dan a conocer los resultados de la campaña de adhesiones al manifiesto “En Defensa de Nuestras Tierras, el Territorio y el Agua”. Organizaciones de 28 países y adhesiones en lo individual se unieron a la demanda por la cancelación definitiva de los proyectos de las presas de La Parota, Paso de la Reyna, Arcediano, El Zapotillo, así como el resarcimiento a los desplazados por la presa de El Cajón.

Ante la relevancia internacional que ha adquirido esta lucha, Temacapulín ha sido elegido como sede del Tercer Encuentro Internacional de afectados por represas, que se llevará a cabo en octubre del 2010 y reunirá a representantes de movimientos de más de 60 países. Esta reunión será un espacio para compartir experiencias y definir estrategias de cooperación y solidaridad entre movimientos de todo el mundo.

El proyecto del Zapotillo desde sus orígenes ha sido impulsado a través de diversas irregularidades a nivel normativo, y ha estado enmarcado por la falta de información suficiente, adecuada y oportuna; la carencia de mecanismos de consulta y el hostigamiento del que son objeto los pobladores. A su vez se ven vulnerados el derecho a la propiedad, a la participación, al desarrollo, a la vivienda, a la salud, a una vida digna, al medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la alimentación, y soberanía alimentaria, a la libertad de culto, así como a la cultura y patrimonio cultural.

Los habitantes de las poblaciones afectadas saben que ellos son parte del territorio en el que nacieron y que ese territorio es parte de ellos. Pese a la necesidad gubernamental por imponer la presa se mantienen

defendiendo su tierra, su historia, sus hogares, su identidad y sus sueños. Están siendo agraviados por las autoridades que no han cumplido sus compromisos y en declaraciones públicas desestiman el movimiento de resistencia, insistiendo que la comunidad está de acuerdo con el proyecto. A pesar de esto, las y los ciudadanos permanecen alzando la voz y resistiendo, sumando gente de la región y de todo el globo que se solidarizan con la defensa de las comunidades, sus derechos humanos y su dignidad.

Notas Aclaratorias

1. Acuerdo de coordinación para el aprovechamiento del agua del río Verde, entre el ejecutivo Federal a través de la CONAGUA y los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Mayo 1997.
2. Alrededor de 523 millones de dólares.
3. Licitación No. 16101037-063-08 CONAGUA para la construcción de la Presa el Zapotillo. 20 nov. 2008
4. En el 2006 la UNESCO emitió su segundo reporte sobre el agua, titulado: Agua: Una responsabilidad compartida. Para los trasvases de una cuenca a otra, aunque sean técnica y hidráulicamente viables, el reporte indica que: “antes de proceder con tales cambios potenciales, se tienen que tomar en cuenta consideraciones sociales y ambientales amplias”. UNESCO, *Water: a shared responsibility, The United Nations World Water Development Report 2*, (Paris: UNESCO, 2006) 148.
5. Al respecto, el comité técnico de apoyo al caso está elaborando un catálogo de especies de la zona afectada.
6. Oficio: Opinión técnica DPAH-09-2008 de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco. 14 abril 2008.
7. Reporte de la Comisión Mundial de Represas www.dams.org
8. Oficio No. CJ/13/2005 Carta que dirige el Gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña a la CONAGUA
9. Periódico La jornada, “Continúan los estudios para cimentar la cortina de la presa EL Zapotillo: Coll”, Juan Carlos Partida. 24 de enero del 2008.
10. Grabación de audio de reunión de representantes de las comunidades con el Gobernador Emilio González Márquez en Casa Jalisco. 23 de mayo del 2008.
11. Oficio: Comisión Nacional del Agua. No. CI-CONAGUA-0190/08 del 14 de agosto del 2008, resolución de la solicitud de acceso a la información folio 1610100090308
12. Licitación No. 16101037-063-08 CONAGUA para la construcción de la Presa el Zapotillo. 20 nov. 2008
13. Periódico Jornada, Jal. “En febrero se procedería a expropiar los predios para El Zapotillo: CNA” por Juan Carlos G. Partida. 29 de enero del 2009
14. Periódico Milenio, León, Gto. “El Zapotillo ya no es obra urgente” de Alfonso Machuca. 10 de febrero del 2009.

COMITÉ SALVABOSQUE, EN DEFENSA DEL BOSQUE EL NIXTICUIL

Adrián Guillermo Hipólito Hernández y Laura Sofía Herrera Rivera
Comité Salvabosque Tigre II

La etapa actual del capitalismo se manifiesta como una nueva guerra de conquista y colonización. En Jalisco esta fase del capitalismo neoliberal tiene como una de sus expresiones la contaminación, la destrucción de bosques, ríos, plantas medicinales, etc., a través del despojo y la privatización, lo que está alcanzando dimensiones que no solo repercuten en la marginación, exclusión, explotación y desprecio de los pueblos, comunidades indígenas y campesinas, sino también en las ciudades en donde amplias zonas están siendo deforestadas y contaminadas sus aguas y aires.

La estrategia de colonización ha sido disfrazada con toda clase de discursos (“desarrollo sustentable”, “ecoturismo”, “progreso y modernización”). Las grandes transnacionales junto con capitalistas locales, han decidido acabar con la riqueza natural a costa de millones de personas. En la aplicación de esta estrategia están los empresarios, los falsos ambientalistas, algunos académicos, los dueños de los medios de comunicación y los políticos de todos los partidos que utilizan el gobierno y las instituciones del estado para operar esta guerra de conquista.

Ejemplo claro de esto, es la situación actual que prevalece en el Bosque El Nixticuil, el cuál es uno de los últimos bosques no inducidos que existen todavía en la zona metropolitana de Guadalajara.

El bosque El Nixticuil se localiza en la parte norte del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, se extiende por 1,860 hectáreas, de las cuales por la presión ejercida, 1,591 han sido establecidas como área natural protegida (ANP) bajo la categoría de manejo de área de protección hidrológica. Las zonas comprendidas en este decreto de protección abarcan parte del bosque El Nixticuil y la Sierra de San Esteban, las cuales forman parte de la cuenca del Río Blanco. En este bosque de encino y pino se encuentran acuíferos que proveen volúmenes importantes de agua para los habitantes de la zona conurbada de Guadalajara, el pueblo de Río Blanco y la Comunidad de San Esteban.

En El Nixticuil viven 81 especies de aves, 15 de mamíferos, 7 de anfibios y 9 de reptiles, de las cuales al menos 11 se hallan dentro de la lista de especies con alguna categoría de *protección* de la Norma mexicana. En cuanto a la flora, el bosque el Nixticuil reúne el 9%, es decir 548 de las especies totales de Jalisco, de las cuales cuatro especies se hallan en la lista roja de especies amenazadas. ¹

Con todo esto, el área del Nixticuil es una de las zonas de la ciudad de Guadalajara en las que existe mayor presión inmobiliaria la cual está afectando los ecosistemas del bosque y a nuestra comunidad.

Existen al menos nueve proyectos que permanecen activos y amenazan a El Nixticuil, mismos que nuestra organización ha denunciado en diferentes momentos: seis son proyectos inmobiliarios cuyos nombres son La Cima, Verde I Serena, San Lorenzo, Jardín del Bosque, Bosque Encantado, y Mirasierra de Zapopan; uno más es un *Parque de Investigación Científica y Tecnológica* promovido por el Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara; los dos proyectos restantes son del gobierno del Estado y el municipal respectivamente: la construcción del tanque elevado “Los Robles” del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SIAPA) y la ampliación de la Avenida Dr. Ángel Leño.

En medio de este panorama de muerte y destrucción, en 2005, un grupo de familias vecinas de la colonia El Tigre II, en Zapopan Jalisco, nos organizamos como Comité Salvabosque para resistir y luchar por la defensa del bosque El Nixticuil aledaño a nuestra comunidad, pues hemos sido testigos de cómo el modelo económico neoliberal y su teoría del desarrollo sustentable (ecologismo burgués, liberal y conservacionista) funciona como brazo ideológico y político permisivo de la destrucción, privatización, despojo y mercantilización de los recursos naturales a favor de los intereses de la sociedad en el poder.

La defensa del bosque El Nixticuil se ha dado a través las vías legales-institucionales, pero también por la vía de los hechos, mediante acciones autónomas que van de la autodefensa, al cuidado y restauración del propio bosque implementando la agroecología, realizando reforestaciones, campañas comunitarias de combate a incendios forestales y la denuncia pública de los proyectos que violentan el derecho de nuestra comunidad a un medio ambiente sano, digno, y ecológicamente equilibrado.

El seguimiento de las acciones de defensa por las vías institucionales ha ido agotándose en cuanto que han sido presentadas en dos distintos periodos de gobierno las denuncias correspondientes ante las instancias municipales, estatales y federales competentes. En distintos momentos hemos acudido y utilizado como instrumento de defensa institucional a las Direcciones municipales de Inspección y Reglamentos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES), la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR), e interpuesto el recurso de denuncia popular en la Dirección municipal de Ecología; en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); sin embargo en la mayoría de los casos no se ha dado seguimiento, y cuando se han iniciado procedimientos se nos excluye como parte denunciante.

La situación de constante amenaza a la que ha estado sometido el bosque El Nixticuil, y la prácticamente nula respuesta por parte del Estado Mexicano para garantizar el respeto del derecho

a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a los recursos naturales, contraviene al artículo 27 constitucional en el que se expone el derecho de imponer a la propiedad privada, el interés público para conservar los elementos naturales, restaurar el equilibrio ecológico y evitar su destrucción y sus consecuencias en nuestras sociedades. Lo mismo sucede con la legislación internacional en materia ambiental con los protocolos, tratados, convenios, declaraciones y acuerdos internacionales signados por el Estado Mexicano, y que aunque son ley en México, en los hechos aparecen como letra muerta.

Desde el inicio de la defensa del bosque El Nixticuil, el Estado ha intentado coartar nuestro derecho a la seguridad y a la libertad de expresión a través de diversas formas de represión tales como: campañas de desinformación, acoso, amenazas, y la movilización de elementos de seguridad pública para garantizar la imposición de sus acciones que un primer momento causaron la tala de casi medio millar de árboles. La amenaza de cárcel si se intervenía en la defensa del bosque puede leerse aún en algunos letreros que quedan en pie en nuestra colonia.

En el periodo 2005-2006 en que el gobierno municipal fue ocupado por Arturo Zamora, la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan estuvo a cargo del Teniente Coronel Rodolfo Ramírez Vargas, señalado como operario de la guerra sucia en Guadalajara en los 70's y 80's (Suárez, 2007:4).

Con Ramírez Vargas a la cabeza, se empleó a elementos de seguridad pública municipal en contra de la defensa del bosque, pues en dos distintas ocasiones en nuestra colonia se trataron de montar espacios de provocación por un grupo numeroso de policías vestidos de civil, entre los que estuvo presente el Teniente Coronel; en una de ellas, varios vehículos distribuidos por nuestra colonia, se encargaron de vigilar e impedir nuestro ingreso a una supuesta asamblea vecinal "extraordinaria" que a manera de consulta pública decidiría los destinos del bosque; en otra ocasión harían su aparición como guardias del cardenal Sandoval Iñiguez, infiltrando una multitud junto a por lo menos otros cien policías uniformados que coparon nuestra colonia.

Tiempo después se hizo público que este grupo de policías adscritos a la Procuraduría General de la República formaban parte del "Grupo M" a cargo de Ramírez Vargas, el cual actuaba como una especie de policía secreta. Su existencia fue exhibida junto con los nexos de Ramírez Vargas con el crimen organizado, situación que lo hizo dejar el cargo (Vargas, 2007).

Este acoso de la policía de Zapopan también se ha presentado durante los trabajos de restauración y cuidado del bosque, con la amenaza de inculparnos de delitos por la portación de nuestras herramientas de trabajo (machetes, azadones).

Sin embargo, estas acciones no solo han venido del Estado y sus cuerpos represivos, sino de los grupos de vigilancia contratados por particulares como la familia Leaño; los Gómez Vásquez Aldana, o los Gómez Flores, quienes han amenazado e impedido el libre paso por el bosque.

De esta forma, en los dos últimos periodos de gobierno (PRI y PAN), en distintos momentos se ha utilizado a elementos de Seguridad Pública en trabajos de vigilancia y protección de los intereses inmobiliarios capitalistas como los de Francisco Ibarra García de Quevedo (ex presidente del club Atlas y especulador inmobiliario) o de proyectos del clero que junto con la inversión privada (LG, Julio Briseño), intentaron construir dentro del bosque (Villa de los Niños).

El discurso desarrollista del Estado, ha sido otra maniobra que han tratado de imponer a través de campañas mediáticas, de sus operadores políticos, académicos y colonos gobiernistas, con la que se busca dar una explicación maniquea y simplista de los sujetos y su contexto en función clara de los intereses partidistas que persigue y de los intereses económicos que se presenten; así, con el argumento de que los servicios públicos con los que no cuenta nuestra colonia, no son compatibles con la conservación del bosque, el gobierno de Zapopan ha tratado de deslegitimar nuestra lucha por defenderlo.

De esta forma, la política de simulación del gobierno de Zapopan ha intentado determinar las relaciones sociales, trastocando y violentando los tejidos comunitarios; es decir, creando, comprando o facilitando los medios para imponer la versión oficial, que en la lucha por El Nixticuil ha consistido en la criminalización de las acciones del Comité Salvabosque al interior de la propia comunidad. Lo anterior, con el discurso de que se impide el progreso, creando división y confrontaciones que se han traducido en agresiones físicas y afectaciones a la salud para algunos miembros. Esta forma de represión ha sido constante por parte del gobierno municipal de Zapopan; así, el rechazo del Comité hacia sus proyectos sobre el bosque ha tenido un *costo político* traducido en la marginación total de nuestra colonia, condicionando los servicios básicos a cambio de la destrucción del bosque.

Una práctica reciente que particulares y Estado han implementado en la estrategia de miedo que pretenden imponer, y que desde hace un par de años se accionó de forma paralela en el bosque La Primavera y en el Nixticuil, es la de provocar y encubrir incendios forestales.

Los incendios en el bosque como una forma de represión política y ambiental han tenido repercusiones en el deterioro y desequilibrio ecológico causado y los alcances destructivos que esto trae sobre los trabajos de restauración que realizamos en el bosque.

Frente a este escenario de represión, como Comité Salvabosque también hemos presentado diversas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), tanto por la violación de nuestros derechos derivada de las acciones represivas de que hemos sido objeto, como por la violación flagrante al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por la presencia de los diversos proyectos que atentan contra el bosque, sin que a la fecha, ésta haya emitido recomendación alguna al respecto, sino en el mejor de los casos solicitando medidas cautelares tardías o supuestas resoluciones conciliatorias que en ningún momento han sido consultadas con nosotros como víctimas de dichas violaciones.

Mirasierra un proyecto de destrucción para la zona metropolitana de Guadalajara

Uno de los proyectos inmobiliarios que amenazan al bosque El Nixticuil, y el de mayor magnitud no solo en sus dimensiones sino en cuanto a los alcances destructivos que tendría ambiental y socialmente, es Mirasierra de Zapopan. Dedicamos este espacio a Mirasierra porque pensamos que este desarrollo inmobiliario refleja el modelo de ciudad que empresarios y políticos plantean para la Zona Metropolitana de Guadalajara; es decir, una ciudad caótica que privilegia la ganancia económica sobre los recursos naturales, con todos los costos que esto implica.

Mirasierra es promovido por un Fideicomiso en el que tienen participación mayoritaria una serie de corporativos de la industria inmobiliaria conocidos como Grupo Guadalajara, el cual está integrado por Gómez Vásquez Aldana Casas, Amadeus, Mendelssohn, Río Hondo y Consorcio G.

El desarrollo inmobiliario pretende ser construido en una zona de 700 hectáreas sobre parte del Valle de Tesistán, el bosque El Nixticuil y la Sierra de San Esteban, para lo cual, se solicitó a la SEMARNAT el cambio de Uso de Suelo de forestal, a habitacional en 72 hectáreas, lo que ocasionaría el derribo de al menos 25 mil árboles.

El proyecto Mirasierra implica la destrucción y privatización, de una buena parte de la formación geológica más antigua de la Zona Metropolitana de Guadalajara: la Sierra de San Esteban (Rosas, 2008: 5), es decir, destruir en un periodo de siete años lo que la naturaleza creó en 40 millones de años. Un comparativo sería trasladar una población de 100 mil habitantes (equivalente a Ciudad Guzmán) a los valles de Tesistán, el bosque del Nixticuil y la Sierra de San Esteban.

La zona del Valle de Tesistán se encuentra impactada desde hace décadas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, situación que en los últimos años ha generado la apertura de agrietamientos geológicos (Martínez, 2006: 33). Actualmente, del acuífero del Valle de Tesistán se extrae más agua de la que es infiltrada anualmente, por lo que se encuentra abatido y cuenta con dos Decretos de Veda, uno de Febrero de 1951 y otro más de Abril de 1976. No obstante, Mirasierra pretende extraer más de 9 millones de metros cúbicos cada año para abastecer a una sexta parte del desarrollo y depositar después las aguas residuales de por lo menos 22 mil viviendas y un número no cuantificado de empresas en el Río Blanco.

El grave problema que generaría Mirasierra en la desaparición del acuífero de Tesistán y el desabasto de agua, no termina aquí, pues la impermeabilización de estas grandes superficies de suelo por la urbanización, provocaría a corto y mediano plazo inundaciones en las comunidades aguas abajo.²

La realización de este proyecto que en gran parte estaría constituido por vivienda de interés social (alta densidad), generaría además impactos severos al municipio y a toda la zona conurbada de

Guadalajara en términos del incremento del tránsito vehicular (en al menos 15 mil automóviles más) y de contaminación del aire, ya que no existe infraestructura vial que lo soporte.³

No obstante que Mirasierra ha sido públicamente reprobado por un sector de investigadores y la propia SEMADES, por pretender al desarrollo en una zona de protección de suelos altamente fértiles (agrícolas) y de conservación de recursos naturales descritos dentro del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco (OETJ), el alcalde del municipio de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, se ha empeñado en avalar el desarrollo inmobiliario, pues como parte de los promoventes, se encuentran los Sánchez Aldana Velasco y los Paniagua Sánchez Aldana (Corres, 2009: VII-4-33), tíos y primos respectivamente del Alcalde; de tal forma, que los planes parciales de desarrollo urbano están hechos a modo según los requerimientos del proyecto Mirasierra.

A esta lista de agravios se suma la agresión que sufrió la familia Orozco Romo del pueblo de Río Blanco por parte de estos corporativos capitalistas, ya que después de negarse a vender su predio conocido como Agua Blanca, a punta de golpes y amenazas se les intentó despojar de su tierra y su casa. Tal situación ha llevado a que éstos empresarios montaran un campamento en los casi mil metros que han invadido del Predio Agua Blanca, razón por la que enfrentan un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario Número 15.

El pueblo de Río Blanco es muestra de cómo la ciudad devora al campo, pues ésta población que hasta hace unos años se conocía como comunidad agrícola, fue comprada casi en su totalidad por el Grupo Guadalajara, y su perfil como núcleo ejidal (Los Belenes) ha sido desmembrado por la especulación inmobiliaria.

De irregularidades y corrupción está plagado este proyecto que asoma un ecocidio, por lo que la SEMARNAT está obligada a emitir una resolución negativa para Mirasierra, si lo que se quiere es garantizar el bien colectivo y construir una ciudad que privilegie los criterios humanos y ambientales sobre los intereses de este grupo de especuladores conocidos como Grupo Guadalajara, y las arbitrariedades cometidas por la clase política.

Por todo esto, y a cuatro años de emprendidas las acciones de defensa y resistencia, participamos en este *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2009*, con la perspectiva de documentar la situación de despojo, privatización y destrucción de la que ha sido objeto el Bosque El Nixticuil y nuestra comunidad, y difundir la lucha cotidiana que hemos llevado por defender el respeto a los recursos naturales como derecho humano colectivo.

Comité Salvabosque Tigre II

Notas aclaratorias

1. Datos y cifras presentados dentro del “Estudio Técnico Justificativo para Propuesta de Área Natural Protegida del Bosque El Nixticuil – San Esteban – El Diente (BENSEDI)”.
2. Entrevista con el investigador de la Universidad de Guadalajara Armando Chávez Hernández. 28 de Septiembre de 2009.
3. Las únicas vialidades existentes son las Avenidas Río Blanco y Prolongación Ángel Leño.

Bibliografía

- ACEVEDO ROSAS, Raúl *et al*; “Especies de Plantas Vasculares Descritas de las Barrancas Aledañas a la Ciudad de Guadalajara y de Río Blanco, Jalisco, México”, en *Polibotánica*, octubre, número 026, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal, México, 2008.
- ARENAS, Elsa. “Interés público e interés particular, proyecto Mirasierra”; en *El Occidental*, Guadalajara, 26/09/09. Guadalajara.
- CORRES ZEPEDA, Blanca Estela *et al*; “Manifestación de Impacto Ambiental– Fraccionamiento Mirasierra”, Zapopan, Jalisco, 2009.
- DEL CASTILLO, Agustín. “Defienden un rancho de invasión para Mirasierra”; en *Público*, Guadalajara, 24/09/09; Ciudad y Región.
- DEL CASTILLO, Agustín. “Ilegal, edificar Mirasierra, advierte investigador”; en *Público*, Guadalajara, 17/09/09; Ciudad y Región.
- GUILLEN, Alejandra. “Asentamientos humanos están prohibidos en el Bosque El Nixticuil”; en *El Informador*, Guadalajara, 17/09/09; Ambiente.
- GUILLEN, Alejandra. “Semades exhorta a no cambiar uso de suelo en El Nixticuil”; en *El Informador*, Guadalajara, 23/09/09; Ambiente.
- HERREJÓN, Rebeca. “Pelea por terreno”; en *Mural*, Guadalajara, 24/09/09; Comunidad.
- LOZA LLAMAS, América *et al*. “Estudio Técnico Justificativo para Propuesta de Área Natural Protegida del Bosque El Nixticuil – San Esteban – El Diente (BENSEDI)”; Guadalajara, Jalisco, 2006.
- MARTÍNEZ BARRAGÁN. Hirineo *et al*; “Proyecto Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan, Jalisco”; Guadalajara, Jalisco, 2006.
- SORIANO, Stefanny. “Integrantes de proyecto Mirasierra sí son familiares de alcalde de Zapopan”; 29/09/09 en <http://www.dk1250.com/local/12296-Integrantes-proyecto-Mirasierra-son-familiares-alcalde-Zapopan.html>, (29 de Septiembre de 2009).
- SUÁREZ DE GARAY, María Eugenia. “Notas para un diagnóstico policial, el caso de las policías preventivas de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, *ponencia en el marco de la Conferencia de la RED de especialistas en seguridad pública*. Distrito Federal, México 2007.
- TORRES, Raúl. “Es inviable el proyecto MiraSierra: Semades”; en *La Jornada Jalisco*, Guadalajara, 24/09/09; Política.

TORRES, Raúl. “Río Blanco, ejemplo de cómo el bosque y el campo son *tragados* por la ciudad”; en La Jornada Jalisco, Guadalajara, 17/09/09; Política.

VARGAS, Eugenia. “La infiltración y espionaje a grupos sociales en Jalisco, práctica común”; en *La Jornada Jalisco*, Guadalajara, 29/01/07; Política.

PROTAGONISMO, AUTORITARISMO Y MISOGÍNIA: UN OMBUDSMAN CARENTE DE AUTORIDAD MORAL

Paola Lazo Corvera
Consejo Ciudadano de la CEDHJ

Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en nuestro país (OPDs), fueron definidos en esencia como organismos autónomos y nacen con la tarea de ser un contrapeso importante ante el actuar de la autoridad.

Desde su conformación contemplan la participación de la sociedad civil a través de un Consejo Ciudadano integrado de manera plural y diversificada, con la intención de tener una mayor representatividad social. El papel de estos Consejos en el funcionamiento de las Comisiones de derechos humanos es central para garantizar una verdadera participación ciudadana, no sólo como un consejo consultivo, sino como un órgano superior de dirección, con verdaderas facultades para ello.

La idea que subyace al contar con ciudadanos en una institución pública y autónoma, tiene que ver con la intención de apuntalar la legitimidad de sus acciones, de sus pronunciamientos, de sus recomendaciones; de dotar de transparencia el ejercicio de su presupuesto, unido a un proceso claro de rendición de cuentas, pues es bien sabido que una práctica estatal que no es abierta, corre el riesgo de que sus decisiones no sean sometidas a una crítica a tiempo. Cuando no hay cumplimiento del mandato, de la autonomía, corresponde a la sociedad civil señalarlo, hacerlo visible.

Desde un debate ético, nos toca velar porque no se privilegie el aspecto legal de la defensa de los derechos humanos.

Otro aspecto menos conocido y poco practicado por estos Consejos, pero que debiera ser parte fundamental de nuestra participación, es el de dar a la figura del Ombudsman fortaleza cuando los enfrentamientos con gobernantes, policías, militares y autoridades, arrecian: el origen del Consejo Ciudadano debería contribuir a quitar toda sospecha de cálculo político en las decisiones del organismo.

Al mismo tiempo, nos corresponde desde el ideal ciudadano, monitorear la “burocracia” que puede afectar el tránsito de la quejas, es decir: ser vocero interno y “gestor” de quienes acuden a la Comisión.

Otro de nuestros compromisos es el dotar de amplitud de miras y ampliar el alcance de las Comisiones; en términos de comunicación, educación, enfoques... para mantener un contacto horizontal con los ciudadanos.

Desafortunadamente en el caso de Jalisco (¿será exclusivo de Jalisco?), las posibilidades de conformar un Consejo Ciudadano que de verdad coadyuve y fortalezca la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está lejos de convertirse en una realidad:

El Congreso del Estado permitió que las designaciones, tanto del Presidente como de los y las Consejeras, se convirtieran en moneda de cambio entre los partidos, ya que la nómina de la Comisión se convirtió en botín para políticos que pueden colocar a sus cuadros. Así, el actual titular “le debe” el puesto a alguien, lo que implica que ese a “alguien” le tenga que responder por sus actos. Esta situación de complicidad con las autoridades locales, da por resultado un proceso de simulación muy riesgoso.

De este modo, no le interesa ningún tipo de interlocución; para él, el Consejo es parte del enemigo a combatir y los ciudadanos son sustantivo que de repente aparece en la Constitución y en las leyes secundarias, como la de la Comisión.

Una actitud que prevalece en la actual CEDHJ, por la que considero ha caído en el nivel más bajo, tiene que ver con la argumentación del Ombudsman respecto de la “interpretación estricta de la ley”, actitud que entraña una exclusión: sólo los abogados están capacitados para entenderla, los demás... allá ellos con sus afanes románticos de querer estar “a la altura”.

A lo largo de casi cuatro años de formar parte del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, me ha tocado descubrir y enfrentar a una institución en la que la representación social es mínima, y tremendamente desvalorada. En un principio pensé que nuestro actuar como consejeros y consejeras nos permitiría influir sobre la gestión pública e instaurar un cierto equilibrio de poder, que fortaleciera la defensa de los Derechos Humanos e hiciera más eficiente el actuar de la CEDHJ, más democrático.

Al interior del consejo, me he topado con un muro sólido hecho de arreglos, protagonismos, intolerancia y autoritarismo disfrazado de legalidad, que se refleja en un rechazo permanente, una discriminación y descalificación constante hacia aquellos que no están de acuerdo con el proceder del titular de la institución. Es sin duda preocupante que exista un Ombudsman sin contrapesos internos.

Es evidente que la Comisión se conduce bajo esquemas de machismo que perpetúan las maneras inequitativas de participación, de distribución del poder y de autonomía.

Desde el habla cotidiana, el lenguaje utilizado por el Presidente, por ciertos elementos del personal de la institución e incluso por algunos de los consejeros, contribuye a mantener y ver con naturalidad ciertas relaciones de dominación y marginación existentes en la estructura interna de la Comisión.

La forma en cómo empleamos el lenguaje puede, constituir y reflejar, percepciones sesgadas que lesionan a otras personas. El lenguaje sexista es también un reflejo de las condiciones de inequidad en las que viven las mujeres, así como del reparto desproporcionado del poder en la sociedad.

Al seno del Consejo, se abusa también del principio democrático para la toma de decisiones colectivas, en donde la regla de la mayoría, ha permitido y hasta justificado formas de exclusión y discriminación.

Como ejemplo de esta situación podemos recordar la suplencia irregular de la consejera propietaria Maite Cortés, hecho por el que obtuve la resolución favorable de un Tribunal Federal por un juicio de amparo que interpusé con motivo de la violación de mis garantías individuales.

Como mujer y como consejera ciudadana, así como en defensa de la institución del Consejo como órgano ciudadano, este amparo lo que viene a proteger es la pluralidad que represento, y por lo mismo lo considero un derecho y una obligación moral. Me parece lamentable que haya tenido que recurrir a una instancia judicial para resguardar mis derechos, frente a actos del propio Consejo y su presidente.

Resulta paradójico que la institución de Estado que defiende y protege los derechos humanos en Jalisco, sea precisamente quien haya violentado los mismos en mi perjuicio, al impedirme suplir a la consejera Maite en el cargo de consejera propietaria, en virtud del nombramiento de suplente que me fue otorgado por la quincuagésima legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, el 29 de noviembre del 2005; incluso se me impidió ejercer el derecho a voz en la sesión en que se realizó la elección, negándome el derecho establecido en el artículo 16 de la ley de la CEDHJ. A su vez, la elección violó la garantía de igualdad y no discriminación, segregándome por el hecho de ser mujer; ya que por el número de consejeros varones propietarios existentes en el consejo, se debió haber elegido a una mujer, intentando respetar los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales, así como los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de México, que promueven erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer.

Los acuerdos relacionados con los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional, no fueron respetados por el Ombudsman jalisciense, ya que violó el principio fundamental de promover e impulsar la equidad de género, haciendo uso de sus facultades legales para resolver la situación de empate que se dio en la elección, ejerciendo su voto de calidad a favor de un consejero varón.

El presidente, debiera desde la ética que orienta su función, fortalecer al Consejo desde una visión de equidad de género, en la búsqueda de una cultura de respeto a los derechos humanos, y en especial de los derechos de las mujeres. Cómo consolidar la igualdad y la equidad de género, si no se hace en principio desde el seno de la propia institución y desde el interior de su propio Consejo.

Es evidente que no se tiene una visión de género ni en el Consejo ciudadano, ni en la Comisión. Al menos, no una que refleje un paradigma de igualdad que defienda la autonomía, reconociendo el complejo contexto donde debe darse.

Se pudo haber reflexionado en la resolución del dilema respetando la ley de la CEDHJ, en la que se establece que el Consejo Ciudadano debe estar integrado en forma diversificada, de manera que se logre la mayor representatividad social, y que debiera estar conformado por el mismo número de varones y mujeres.

Se podría también haber considerado el establecimiento de cuotas de género para favorecer el acceso equilibrado y equitativo a posiciones con poder de decisión, ya que éstas ofrecen la posibilidad a quienes nunca han tenido referentes de personas en semejantes puestos, con el objeto de ir cambiando sus propios parámetros de identidad. Las cuotas nunca se han planteado como medidas permanentes; antes bien, son disposiciones que se adoptan con miras a generar las condiciones de su propia desaparición. Sin embargo, como pocas, pueden darnos la pauta de un nuevo concepto de igualdad: el que destine a cada quien lo que le corresponde según sus capacidades, sí, pero también según la oportunidad real que haya tenido hasta el momento para desarrollarlas.

Las personas consideran los asuntos públicos bajo la influencia de su experiencia y percepción de las relaciones sociales. Por ello, es imprescindible dar cabida a diversas perspectivas en la toma de decisiones que competen al ámbito público. De este modo, aquellas personas a quienes se ha discriminado históricamente, tendrían la oportunidad de hacer oír una voz y plantear un punto de vista que de otra manera permanecería silenciado y subordinado a la perspectiva de los grupos dominantes. Las mujeres se cuentan, sin duda, entre tales grupos en desventaja. (Serret, 2007)

Esta situación se enmarca dentro de un escenario que no garantiza que las instituciones que cuentan con instancias ciudadanas, funcionen de forma transparente y alejadas de intereses políticos. La partidocracia mexicana ha lesionado terriblemente a las instituciones del Estado, hasta convertirlas en monedas de cambio, en cuotas de poder que inhiben la participación ciudadana. (Serret, 2007)

En el caso específico de Jalisco, los organismos autónomos están en déficit porque se perdieron los espacios para la intervención de la sociedad civil, como es el caso del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estrado (ITEI) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). En ese sentido, el Consejo Ciudadano de la CEDHJ representa un espacio de resistencia ciudadana en este tipo de consejos, desde un espíritu de oposición permanente y constructiva. Se

trata de llevar la discusión al terreno ciudadano y dotarlo de contenido ético al llamar a las cosas por su nombre y decirle la verdad al poder.

Con desánimo observo como la CEDHJ está lejos de constituirse en el organismo público transparente, democrático y participativo que debiera ser. Una verdadera defensoría del pueblo, de la gente; que actúe firmemente condenando y tomando todas las medidas apropiadas para eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer en la vida política, pública y de la sociedad civil, asegurando así el pleno disfrute de igualdad de condiciones. Medidas que en nuestro Estado han sido y son, una asignatura pendiente.

La opacidad con la que actualmente opera la Comisión, refleja una enorme falta de transparencia, en la que deja de lado aspectos fundamentales como la rendición de cuentas, la claridad en los criterios con los que se toman las decisiones importantes en materia de recursos humanos y materiales; el tratamiento que se les da a las quejas presentadas por la ciudadanía; los procedimientos que se siguen al investigar las denuncias de una posible violación de derechos humanos, y los criterios que se siguen para colaborar con algunas organizaciones de la sociedad civil y no con otras, ha contribuido a que exista una percepción ciudadana de que la institución no está a la altura de las expectativas y necesidades del pueblo de Jalisco.

La actual CEDHJ no ha sido capaz de consolidar su autonomía, y defender, promover, garantizar y respetar los derechos humanos de quienes vivimos y transitamos en el estado de Jalisco, desde un referente de justicia, libertad y dignidad, que obligue a quienes nos gobiernan a respetar y defender ante todo la dignidad humana.

Agradezco finalmente a mis amigos y compañeros de lucha, abogados del CEPAD: César Octavio Pérez Verónica, Francisco Macías Medina y Gerardo Moya García, por generar este espacio para compartir mi visión particular sobre las posibilidades reales de participación ciudadana en los Organismos Públicos de Derechos Humanos; en específico del caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con la intención de hacer visible mi experiencia como consejera ciudadana, y aportar quizás un referente del estado actual de los organismos autónomos en relación a la democracia, la equidad de género y la generación de espacios de participación para las y los ciudadanos involucrados en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Bibliografía

1. SERRET BRAVO, Estela. "Discriminación de Género. Las inconsecuencias de la democracia", en *Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género*, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2007.

UN OMBUDSMAN QUE VIOLENTA DERECHOS FUNDAMENTALES

La visión jurídica de una elección ilegal

César Octavio Pérez Verónica

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Sin lugar a dudas, una de las tantas aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil es contar con organismos públicos de derechos humanos eficaces en su promoción y defensa, así como realmente comprometidos con las personas cuyos derechos han sido vulnerados por las acciones y omisiones de las autoridades de nuestro país. Desde luego que las organizaciones no gubernamentales de Jalisco no son la excepción respecto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) quien se considera a sí misma “una magistratura de conciencia basada en el prestigio y la calidad moral del ombudsman o defensor del pueblo, definido como un equipo de trabajo encabezado por su Consejo Ciudadano y su presidente” ¹

Y en efecto, el Consejo Ciudadano es el máximo órgano de la institución y está integrado por un Presidente y 16 Consejeros y Consejeras ciudadanas electas por el Congreso del Estado; ² la mitad tienen la calidad de propietarias con sus respectivos suplentes por un periodo de 5 años, aunque en el caso del presidente -quien lo es además de la CEDHJ- cuenta con la posibilidad de una reelección.

Además, el Congreso del Estado tiene la facultad no solo de conocer de las renunciias de los y las integrantes del consejo, sino también, de resolver su procedencia o no, de conformidad con la Constitución Política del Estado de Jalisco³, que bien vale la pena mencionar, protestaron formalmente cumplir y vigilar su cumplimiento. ⁴

El nombramiento de consejeros propietarios y sus suplentes (2005)

El pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en sesión solemne del 28 de noviembre de 2005, celebró la elección y designación de cuatro de los y las nuevas consejeras propietarias y sus suplentes respectivamente de la CEDHJ. Realizada la designación, el entonces secretario general del Congreso del Estado, Gabriel Gallo Álvarez, la hizo del conocimiento mediante oficio OF-DPL-2357-LVII, al también entonces presidente de la CEDHJ, Carlos Manuel Barba García:

[...] para ocupar los cargos de cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes respectivamente que integren el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside, habiendo resultado electos como Consejeros Propietarios los C.C. Julio Cesar Aldana Maciel, Ma. Esther Cortéz García, Alejandro Sánchez y Norma Edith Martínez Guzmán, y como Consejeros Suplentes respectivamente los C.C. Luis Cisneros Ruvalcaba, Paola Lazo Cordero, Arturo Feuchter Díaz e Imelda Orozco Mares, para un periodo de cinco años contados a partir del 28 de noviembre de 2005, previa protesta de ley que se les tome en términos previstos por el artículo 108 de la Constitución local.

Igualmente le fue notificado a Paola Lazo Corvera el oficio OF-DPL-2358-LVII, suscrito por dicho funcionario que había resultado electa como Consejera Ciudadana suplente de la Consejera Propietaria María Esther Cortés García Lozano, por un periodo de cinco años a partir del día 28 de noviembre de 2005. (Anexo único)

El inicio del proceso de una elección ilegal

El 21 de abril de 2008, el Consejo Ciudadano celebró la sesión ordinaria 232/2008, aprobando entre los puntos del orden del día, el 8 relativo a “Propuestas de temas a tratar”. Entre ellos resultó el propuesto por la consejera propietaria María Esther Cortés García Lozano, quien explicó que por diversas razones decidía “renunciar al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual informaba en este momento al Pleno del Consejo”.⁵

Al efecto, el presidente del Consejo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló entre otras cosas que:

[...] consideraba necesario establecer primero la postura del Consejo ante el aviso de renuncia que acababa de hacer del conocimiento la consejera propietaria María Esther Cortés García Lozano, y luego entonces abordar el tema de la elección, por lo que solicitaba para cumplir con la formalidad, se sometiera a votación la aceptación o no de la renuncia de la consejera Maite.⁶

Con el objeto de cumplir con lo ordenado por el Presidente, el secretario técnico del consejo ciudadano, Néstor Aarón Orellana Téllez: “sometió a votación la renuncia de María Esther Cortés García Lozano al cargo que venía desempeñando de Consejera Propietaria del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Por lo anterior, se aceptó y aprobó por unanimidad la renuncia”.⁷

Como se advierte del acta de la sesión de referencia, el presidente del Consejo Ciudadano Felipe de Jesús Álvarez Cibrián le trasladó a éste atribuciones constitucionales exclusivas del Congreso local como son conocer y resolver las renunciaciones de sus integrantes.

Acto seguido y acatando las ordenes del Presidente, el Secretario Técnico sometió nuevamente a votación del Consejo la celebración de una sesión extraordinaria para elegir al nuevo o nueva Consejera Propietaria para el 29 de 2008, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, al poner como punto de votación la celebración de dicha sesión extraordinaria, ambos funcionarios públicos desconocieron el nombramiento que la LVII legislatura del Estado de Jalisco le otorgó a Paola Lazo Corvera como consejera ciudadana suplente de María Esther Cortés García Lozano.

El desconocimiento por parte del Presidente y del Secretario Técnico de la CEDHJ, del nombramiento otorgado por la Soberanía, constituyó una violación de derechos fundamentales y por tanto, humanos de la consejera Paola Lazo consagrados en la Constitución General de la República. ⁸

La consumación de la ilegalidad

En la sesión extraordinaria 233 del 29 de abril de 2008, una vez tomada la lista de asistencia, el Secretario Técnico hizo del conocimiento de los y las asistentes, que tanto Consejeras como Consejeros Suplentes no tenían derecho a voz ni a voto, violando de manera flagrante sus derechos establecidos en el cuarto párrafo del artículo 16 de la ley de la CEDHJ. ⁹

El segundo acto violatorio a la Constitución Política de Jalisco, fue la votación para aprobar el orden del día en cuyo punto 3 estaba la “Votación para la elección de Consejera o Consejero Suplente que ocupará el cargo de Propietario”, pues el Presidente del Consejo debió advertir a los Consejeros y Consejeras que había sido omiso en enviar al Congreso local la renuncia de Cortés García Lozano al cargo de consejera propietaria de la CEDHJ, y por ende, habría que esperar a que el Congreso resolviera al respecto, previo a llevar a cabo en su caso, cualquier sesión relacionada con la suplencia de la consejera renunciante.

Finalmente, la elección se consumó con un empate de cuatro votos a favor de Paola Lazo Corvera y de Arturo Feuchter Díaz. En razón de ello, el Presidente del Consejo hizo uso de su voto de calidad y se inclinó por Arturo Feuchter Díaz. Suponiendo sin conceder que el proceso de elección se hubiese realizado de forma legal, el Presidente consejero debió proponer que la elección se hubiese llevado a cabo entre las consejeras suplentes, como medida compensatoria ante la salida de una mujer del Consejo, así como con la intención de buscar el equilibrio entre hombres y mujeres en el Consejo, según lo refiere el artículo 11 de Ley de la CEDHJ.¹⁰ El hecho de que Álvarez Cibrián con su voto de calidad eligiera a un hombre en lugar de una mujer en circunstancias de inequidad de género, está catalogado como un acto de discriminación contra las mujeres; por tal motivo, no sólo se afectó a la consejera Paola Lazo sino a las demás mujeres integrantes del Consejo.

La defensa jurídica ante la ilegalidad del proceso de elección

Ante el cúmulo de violaciones cometidas por el máximo órgano de la institución pública defensora de derechos humanos en Jalisco, la consejera Paola Lazo Corvera decidió acudir acompañada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD) a los tribunales constitucionales del país a efecto de defender sus derechos y enderezar las actuaciones del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, en particular las realizadas por su Presidente y titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

El 23 de mayo de 2008, la consejera Paola Lazo presentó una demanda de garantías en contra del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, a través de su presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y del Congreso del Estado de Jalisco, a través del presidente de la mesa directiva Iván Eduardo Arguelles Sánchez. Algunos de los reclamos fueron los siguientes:

- A) La omisión del titular del Consejo ciudadano en enviar el acta de la sesión 232/2008 del 21 de abril de 2008, al los diputados y diputadas del Congreso local para conocer y resolver sobre la renuncia María Esther Cortés García Lozano como consejera ciudadana propietaria de la CEDHJ.
- B) El proceso de elección de consejera o consejero ciudadano suplente para ocupar el cargo de propietario del Consejo Ciudadano de la CEDHJ celebrado el 29 de abril del año, el cual consta de la propia orden del día y su aprobación, la restricción de participar en el proceso a los y las ciudadanas consejeras suplentes, votación para la elección y la toma de protesta para ocupar el cargo de consejero ciudadano propietario al licenciado Arturo Feuchter Díaz por parte del presidente de la CEDHJ.
- C) La falta de acuerdo o resolución respecto de la renuncia de María Esther Cortés García Lozano como consejera ciudadana propietaria de la CEDHJ, esto de conformidad a las facultades constitucionales concedidas al Congreso local.

Además, se tomó la decisión de llamar a juicio en calidad de terceras perjudicadas a las demás consejeras suplentes; esto para el caso de que se sintiesen agraviadas tanto por haberseles impedido ejercer su derecho a voz, como a ser electas propietarias en el supuesto de que no se le reconociera por cualquier circunstancia el nombramiento de suplente de la renunciante, a Paola Lazo Corvera.

Tanto la consejera Paola Lazo Corvera, como el CEPAD, enfrentamos un proceso jurídico que duró 17 meses; la tardanza se debió a la pésima interpretación dada inicialmente a la demanda de amparo por parte del Juez cuarto de distrito en materia administrativa, Juan Manuel Villanueva Gómez, a tal grado, que en el acuerdo del 27 de mayo de 2008, decidió desecharla de plano. Lo anterior motivó la interposición del recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, quien el 9 de julio de 2008, revocó el acuerdo del Juez para que éste realizara un nuevo análisis del

contenido de la demanda de amparo. Fue hasta 4 de agosto de 2008, que el Juez admitió la demanda de garantías bajo número de expediente 1195/2008, solicitándole al Consejo de la CEDHJ y al Congreso local sus informes justificados.

Argumentos indefendibles de actos ilegales

Con fecha 15 de agosto de 2008, el Presidente del Consejo de la CEDHJ presentó su informe justificado en el que sobresalen una serie de argumentos difíciles de defender jurídica, ética y políticamente. Tal es el caso del Punto I, en el que solicita se cite como terceros perjudicados a los Consejeros suplentes:

[...] A QUIENES NO SEÑALA COMO TALES LA QUEJOSA, **lo que denota una clara discriminación de su parte contra ellos por su condición de varones**, y ello se demuestra fácilmente con su propio escrito de demanda, **ya que únicamente señaló como terceros perjudicados a mujeres**, a sabiendas de que también como ella: a) son consejeros suplentes los varones antes mencionados y, b) participaron para ser votados en dicha elección. 11

Su clara ignorancia en materia de género se evidencia en el siguiente razonamiento:

Ahora bien, de la lectura de la presente demanda de amparo, se advierte que lo que la consejera pretende es institucionalizar vía amparo –so pretexto de equidad de género-, una discriminación en contra de los varones, en este caso del consejero varón que obtuvo los mismos votos que ella; pues según su razonamiento, los y las consejeros (*sic*) ciudadanos (*sic*) tenían la obligación de votar por una mujer (por ella),... 12

En el punto II de dicho informe relativo a los actos reclamados atribuidos al Consejo, Álvarez Cibrián, señaló que debido a que la Consejera asistió en las sesiones del consejo del 21 y 29 de abril de 2008, *conoció y consintió* las violaciones constitucionales.

[...] **por tanto, al haber participado para que fuese votada en los términos aprobados, demuestra sin lugar a dudas que estamos frente a un acto legalmente consentido y por lo mismo también el presente amparo es improcedente;** 13

Este criterio es, sin lugar a dudas, contrario al de un defensor del pueblo; señalar que una persona cuyos derechos han sido violados, consintió la violación, con el argumento de que no opuso resistencia, es tanto como decir que estuvo de acuerdo con su perpetrador. Lo anterior pone en peligro inminente a quien sea o haya sido víctima de una violación de derechos humanos en Jalisco durante la presente administración.

Por otra parte, vale la pena indicar, que pese a que la consejera García Lozano renunció el 21 de abril de 2008, el Presidente del Consejo remitió al Congreso local dicha información hasta el 9 de junio de 2008, mediante oficio P/CEDHJ/128/08, lo que significa un retardo de 35 días hábiles. En dicho oficio, informa que en la sesión extraordinaria 233 resultó electo Arturo Feuchter Díaz como consejero propietario.

De la misma manera, el Congreso del Estado de Jalisco remitió al Juez federal su informe respectivo, en el que destacan los siguientes argumentos para desvirtuar los actos reclamados:

[...] le informamos que no es cierto el acto reclamado, puesto que el pasado 9 de junio de 2008, fue recibido en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Jalisco, el oficio firmado por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en donde hace del conocimiento la renuncia de la consejera ciudadana propietaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María Esther Cortés García Lozano.¹⁴

El Congreso local allegó al juicio el oficio 2317-LVIII del 23 de junio de 2008, suscrito por el secretario general del Congreso, Alfredo Arguelles Basave, y dirigido al Presidente de la CEDHJ para informarle que: "... el Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, fue enterado de su oficio número P/CEDHJ/128/08, de fecha 6 de junio del año en curso, mediante el cual comunica la renuncia de la consejera propietaria María Esther Cortés García Lozano, designando en su lugar al ciudadano Arturo Feuchter Díaz".

Según se observa, el propio Secretario General, pasó por alto las facultades que la Constitución Política de Jalisco le otorga al Congreso local, al indicar que el Legislativo "fue enterado" de la renuncia, cuando la obligación del Congreso era no solo haber "conocido" de la misma, sino "resolverla". Al parecer, ninguno de los y las Diputadas del Congreso local, se percataron de las violaciones constitucionales cometidas por el Consejo Ciudadano de la CEDHJ y alentadas por su Presidente.

El resultado

Analizados los injustificados argumentos vertidos por las autoridades en sus informes, así como los conceptos de violación, probanzas y alegaciones por parte de la consejera Paola Lazo, el 6 de octubre de 2008, el Juez de distrito determinó concederle la razón jurídica y por ende, el amparo y la protección de la justicia federal en contra los actos y las autoridades antes señaladas. En el considerando quinto de la sentencia se advierte:

[...] sin necesidad de analizar los restantes manifestaciones de inconformidad que se hacen valer en el apartado de conceptos de violación de su escrito de demanda (porque éstos tienden a combatir cuestiones de fondo), resulta procedente concederle a la quejosa la protección constitucional solicitada, para efecto de que la responsable Presidente del Consejo Ciudadano de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, deje insubsistente el acta de sesión extraordinaria 233, de fecha veintinueve de abril de dos mil ocho, en que se designó a Arturo Feuchter Díaz, como Consejero Propietario Ciudadano, para ocupar el cargo al que renunció la consejera María Esther Cortés García Lozano, así como las consecuencias derivadas de tal designación.

Asimismo, toda vez que, como se precisó, no se ha conocido y resuelto sobre la renuncia de la mencionada Consejera Propietaria, el efecto de la concesión de amparo también lo es para que el Congreso del Estado de Jalisco, en términos de lo establecido en el artículo 35, fracción XV, de la Constitución Política del estado de Jalisco y 88, punto 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, conozca y resuelva sobre la renuncia formulada por la Consejera Propietaria....

Inconformes con el resultado, tanto el consejero Arturo Feuchter como el Congreso local interpusieron recursos de revisión para revertir la decisión del Juez, sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa resolvió el 10 de septiembre de 2009, es decir, 9 meses después de interpuestos, modificar relativamente la sentencia, pero declarando inconstitucional el acto reclamado consiste en la elección.

Este caso nos ha permitido experimentar lo inimaginable: a) tener como contraparte en una demanda de amparo al Consejo Ciudadano de la CEDHJ y su Presidente, lo que implica la comisión de presuntas violaciones a la constitución y a los derechos humanos de una de sus integrantes; b) leer argumentos de un ombudsman, contrarios a los principios del cargo que representa; c) observar la irresponsabilidad del Congreso local, al no reconocer sus facultades constitucionales y permitir que otro órgano usurpe sus funciones; por último, d) lograr una sentencia de un Juez de Distrito, confirmada por un Tribunal de revisión en la que decreta que el máximo órgano de la CEDHJ, violó derechos fundamentales y humanos de una Consejera Ciudadana.

Bien vale la pena señalar, que el Tribunal le enmendó la sentencia al Juez de distrito, al señalar que la autoridad responsable era el consejo ciudadano de la CEDHJ, y no únicamente el Presidente de dicho organismo, lo cual deja en el aire los siguientes cuestionamientos:

- 1.- ¿Informó y cuándo el Presidente al pleno del Consejo Ciudadano el contenido de la demanda?
- 2.- ¿Consultó el Presidente al Consejo Ciudadano sobre las alternativas legales para resolver la controversia presentada por la consejera Paola Lazo?
- 3.- ¿Quién tomó la decisión de contestar la demanda?
- 4.- ¿En cuáles sesiones ordinarias y extraordinarias informó el presidente al Consejo Ciudadano sobre el estado procesal de la demanda? En caso negativo, ¿por qué no informó al Consejo Ciudadano sobre el rumbo de la demanda siendo que el demandado era el propio Consejo?

- 5.- ¿Se utilizaron recursos económicos de la CEDHJ para contratar abogados externos que atendieran el proceso legal?
- 6.- ¿Se puso a disposición de los consejeros Luis Cisneros Ruvalcaba, Miguel Ángel Sánchez Ortega y Arturo Feuchter Díaz, la asesoría de abogados externos pagados por la CEDHJ?

Notas Aclaratorias

1. www.cedhj.org.mx
2. Artículo 35, fracción XII de la Constitución Política del estado de Jalisco señala: son facultades del Congreso: [...] XII. Elegir al Presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, en los términos que establezca la ley de la materia.
3. Artículo 35, fracción XV de la Constitución Política del estado de Jalisco señala: son facultades del Congreso: [...] XV. Conocer y resolver sobre las renunciaciones de los Diputados, del Gobernador del Estado, de los Magistrados del Poder Judicial; de los consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial; del Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de los Consejeros Electorales, del Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
4. Artículo 108 de la Constitución Política del estado de Jalisco señala que: Todos los servidores públicos del Estado y de los municipios, antes de asumir el desempeño de sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y todas las leyes que de ellas emanen.
5. Segundo párrafo, hoja 19 del acta de la sesión ordinaria 232 del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, celebrada el 21 de abril de 2008.
6. Cuarto párrafo, hoja 21 del acta 232.
7. Quinto párrafo.
8. Artículo 14 de la Constitución General de la República señala que: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
9. Artículo 16 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dice: El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos. [...] Los suplentes podrán asistir a las sesiones del Consejo únicamente con voz, pero sin derecho a voto, salvo que se encuentren en funciones de titulares.
10. Artículo 11 de la ley de la CEDHJ, segundo párrafo: [...] El Consejo Ciudadano de la Comisión deberá integrarse en forma diversificada de manera que se logre la mayor representatividad social, y se procurará que se conforme con el mismo número de varones y mujeres.
11. Las mayúsculas, negritas y subrayado son copia fiel del texto original.
12. Párrafo tercero, de la hoja 9 del informe justificado del Presidente del Consejo de la CEDHJ.
13. Séptimo párrafo, hoja cinco del informe del Presidente del Consejo son del texto.
14. Primero párrafo, hoja dos del informe rendido por la mesa directiva de la LVIII legislatura del Estado de Jalisco al Juez Cuarto de Distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco.



GOBIERNO
DE JALISCO

P O D E R
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

OF-DPL- 2358 LVI
NUMERO

DEPENDENCIA
DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS

2009

C. PAOLA LOZA CORDERO,
BONIFACIO ANDRADE No. 2928
COL PROVIDENCIA
CIUDAD.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo número 1307/05, en el que se aprueba llevar a cabo la elección de cuatro Consejeros Propietarios y Suplentes que integren el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, habiendo Usted resultado electa como Consejera Ciudadana Suplente de la C. **MARÍA ESTHER CORTÉS GARCÍA LOZANO**, por un periodo de cinco años a partir del día 28 de Noviembre de 2005.

Por instrucciones de la Directiva de esta Soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

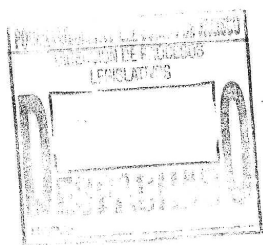
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.



ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal. 28 de Noviembre del 2005

MTRO. GABRIEL GALLO ALVAREZ
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO



C.c.p. Dip. Alberto Maldonado Chavarín.- Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

AVM/cmap

César Octavio Pérez Verónica

67

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

El seguimiento de un caso paradigmático de violencia institucional de género en Jalisco

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC

Han transcurrido dos años desde que llegaron a las oficinas del CEPAD la señora Arellano Enciso y su hija. Su presencia y constancia en su exigencia de justicia no sólo cambió la forma de pensarnos como organización, sino que nos llevó a la reflexión respecto de los límites reales de lo que ahora se llama transición a la democracia.

A través del caso, se han planteado debates de tipo jurídico, político y social, que creemos posibilitan vislumbrar cambios que hoy se requieren, sobre todo en este momento en que existe una tendencia de adelgazamiento hacia la vigencia de los derechos humanos.

Por eso es importante recuperar en un claro ejercicio de insistencia, la propia voz de las que han sido afectadas que hoy se encuentran en un papel de exigencia para ellas, y para las demás. Es un mensaje que rompe el silencio y busca expandir nuestras muy discretas conciencias desde la comodidad.

El presente, pretende complementar el contexto del caso ya considerado en el informe pasado del CEPAD, en el que se privilegió la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos, no exento de mensajes claros desde la experiencia de las afectadas.

Retomar la historia, permite fortalecer nuestra memoria social, nuestra exigencia e intolerancia hacia esos actos. Lo haremos con base en el relato proporcionado por ellas mismas a partir de su experiencia ocurrida a finales de 2007.

Sobresalen en la misiva, sentimientos de confusión, incomodidad, privación y molestia ante los contextos vividos o la intervención de las autoridades, que muy probablemente incrementaron su victimización, lo que a la postre se ha convertido en la fuerza para mantener su denuncia.

Los hechos se retoman a partir de que madre e hija tienen que realizar un viaje forzoso para su protección. Les impresiona el número de elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que las esperan, que las custodian. Se percibe su inseguridad sobre el futuro, sobre lo que vendrá, mencionan que se sentían “raras”, cuando en realidad lo inhabitual era la experiencia que estaban viviendo.

Mencionan algo paradójico: que “toda la gente se nos quedaba viendo”, cuando la pregunta es: ¿Dónde estaba puesta nuestra mirada cuando ocurrieron las fiestas, cuando acudían funcionarios, entre ellos el actual Procurador de Justicia? Queda claro que entre menos miradas es mayor la impunidad.

Fueron llevadas ante personal del Ministerio Público de la Federación: “me empezaron a explicar a qué se dedicaban y que nos iban a ayudar en nuestro problema, nos sentíamos confundidas e incómodas, luego nos dijeron que estábamos en peligro y que nos llevarían a un albergue”.

El lugar estaba dedicado a la atención de madres solteras: “no estábamos a gusto, tampoco asustadas, pero sacadas de onda de lo que pudiera pasar o qué nos iban a hacer”, posteriormente les propusieron viajar a otra ciudad del norte del país en donde se continuaría la protección, pero no aceptaron debido al cambio radical de sus condiciones de vida¹.

Respecto al trámite que se iniciaba, comentaron: “estaba agobiada de tantas preguntas y declaraciones, ya no quería hablar”, pero ante la posibilidad de regresar a la ciudad, accedió al acompañamiento psicológico y a continuar con las investigaciones.

Al regreso a esta ciudad, se permitió recomenzar su vida familiar con el acompañamiento y seguimiento psicológico de la autoridad.

En febrero de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado Mexicano la protección de la señora Arellano y sus hijas, lo que significaba vivir en lo cotidiano con personal de custodia. La sensación la califican de “prisión”, que poco a poco se modificó hasta llegar a un estándar profesional como el que desde hace tiempo y afortunadamente se proporciona.

En el primer trimestre de 2008, la niña A inicia un proceso de rehabilitación en una clínica especializada; eso implicó una separación de su entorno familiar: “Me llevaron a la clínica donde me dieron tratamiento, ahí fue donde superé todos los problemas, sobre todo lo que pasó, hasta la fecha sigo acudiendo”.

Durante ese tiempo, la autoridad del Ministerio Público Federal le proporcionó apoyo para vivienda y alimentación: “ya no era igual el seguimiento, a veces no tenía que comer, porque no me daban lo de la despensa, ya después estaban medias apáticas”.

El seguimiento era distante, pero se incrementaba “cuando se requerían hacer reportes”, o hablar con las especialistas de sus problemas.

Finalizan diciendo: “Agradecemos lo mucho o poco que nos ofrecieron, pero no se por qué bajaron la guardia en nuestro caso ¿Por las personas que son o por política?”.

Pregunta difícil de responder, pero que nos invita a la reflexión.

Notas Aclaratorias

- 1 La señora Arellano es madre de dos hijas más, las cuales dependen económicamente de ella, además de que su actividad laboral la realiza en Guadalajara.

Análisis de escenario y prospectivas

EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL Y EL ESTADO DE JALISCO

2009

Gerardo Moya García

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC

El Examen Periódico Universal, mejor conocido como EPU, es un mecanismo de evaluación de los Estados Parte de la Organización Naciones Unidas (ONU), en materia de Derechos Humanos. Nace como resultado de la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU que crea el Consejo de Derechos Humanos (CDH). En dicha Asamblea, se decidió que el Consejo “realizara un examen periódico universal, respecto del cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos” de una forma que garantizara la igualdad de trato respecto de todos los Estados y que más que duplicar la labor de los órganos creados en virtud de tratados, complementara los mismos.¹

Las bases y objetivos del EPU

En la resolución, 5/1 del Consejo de Derechos Humanos (junio de 2007), se advierten como objetivos del examen entre otros, el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno; el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta; el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados, así como el apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos.

La resolución antes mencionada, refiere que para evaluar al Estado correspondiente, se tomará en cuenta la información preparada por el mismo, alentando a que ésta sea formulada mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores pertinentes que estén interesados; además, una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que contenga información sobre dicho Estado, de los órganos de tratados, los procedimientos especiales (incluidas las observaciones y comentarios del Estado examinado), y otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas.

Finalmente, será tomada en cuenta, la información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores pertinentes al examen periódico universal, entre los que se encuentran las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

Es por lo anterior, que como organización de la sociedad civil, el CEPAD participó en la construcción de insumos en temas como tortura, violencia de género, medio ambiente y discriminación, que finalmente fueron presentados a la OACNUDH en septiembre del 2008, como parte de un informe de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDTT)” que aglutina a 68 organizaciones civiles, de entre las que se encuentra el CEPAD.

En dicho informe, afirmamos que aunque a nivel federal ha habido algunos avances en la promulgación de leyes y homologación de alguna legislación federal con estándares internacionales, así también ha habido reformas que constituyen un verdadero retroceso en la protección de los derechos humanos. Se dice también, que siendo México una federación de estados, las acciones a nivel federal no han podido reflejarse a nivel estatal y/o municipal, en donde sigue habiendo un gran atraso en cuanto a la armonización legislativa.

En un balance general, manifiesta el informe que un factor hasta ahora inamovible es la impunidad que aparece como elemento común en las violaciones de derechos humanos. Las deficiencias del sistema de administración y procuración de justicia siguen siendo visibles tanto en las violaciones de derechos humanos civiles y políticos, como en las denuncias de violaciones de derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Los temas de preocupación nacional tratados en el informe de referencia fueron entre otros: la criminalización de la protesta social; la represión policial, la descalificación de defensores y defensoras de derechos humanos, la militarización de la vida civil, las detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, la equiparación de luchadores sociales con delincuentes, la seguridad pública, la reforma al sistema de justicia penal, el acceso de las mujeres a la justicia, los feminicidios, la violencia sexual e interrupción legal del embarazo por violación y la trata de personas.

Una vez con los insumos, la resolución, 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, refiere que el examen se efectuará en un grupo de trabajo integrado por los 47 Estados miembros del Consejo, cuyo resultado se presentará en un informe que contenga un resumen de las actuaciones del proceso de examen, las conclusiones y/o recomendaciones, y los compromisos voluntarios del Estado examinado.

De acuerdo con la resolución antes mencionada, el resultado del examen deberá ser asumido por el Estado examinado y, según corresponda, por otros actores interesados pertinentes. En todo caso, el Estado tiene la responsabilidad de trabajar en conjunto con las Organizaciones de su país para poder ocuparse de las recomendaciones hechas por el Consejo.

El examen al Estado Mexicano

El Examen Periódico Universal a México se llevó a cabo en febrero del 2009. Como resultado del mismo, el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conformado por Sudáfrica, Nicaragua y Pakistán formuló al Estado Mexicano 91 recomendaciones, de las cuales, 83 fueron aceptadas por el Gobierno de México y ocho fueron reservadas para ser analizadas en junio del mismo año.

El 11 de junio del presente año, el Estado Mexicano adoptó el Informe Final del Grupo de Trabajo y presentó una “respuesta complementaria a las recomendaciones formuladas”. Asimismo, dejó de lado las ocho recomendaciones reservadas desde febrero. Lo anterior, causó serias preocupaciones a las organizaciones que trabajamos el tema, ya que las recomendaciones de referencia versan en torno a la abolición del arraigo, y a la no utilización de la jurisdicción militar en casos en los que miembros de las fuerzas armadas cometan violaciones de derechos humanos a civiles.²

En agosto de 2009, y en virtud de la respuesta complementaria del Estado Mexicano a las recomendaciones, se decidió al interior de la Red TDTT, formular de nueva cuenta, un documento de observaciones a dicha respuesta, mismo que fue enviado a las Delegaciones de los Estados involucrados en el examen, así como a la Secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE).

Para ello, el CEPAD participó con insumos relativos a temáticas que se desprenden de las propias recomendaciones. Con relación a la tortura, (recomendaciones 28, 40, 44 y 46), se advirtió que la respuesta otorgada por el Estado Mexicano respecto al tema (punto 30), se refiere únicamente a la obligación que existe en la nueva *Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública* de “abstenerse” de infligir o tolerar actos de tortura.

Se dejó de lado, que si bien se establece la prohibición en la legislación en comento, al respecto ya existe la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y su réplica en el Estado de Jalisco, misma que no ha sido aplicada desde su creación en 1993. Se advirtió que el combate a la impunidad en la comisión de esta grave violación de Derechos Humanos, escapa a su prohibición en la legislación. En Jalisco, no existe hasta agosto de 2008, consignación alguna por dicho delito, no obstante que en los últimos 8 años (hasta el 2008) se habían interpuesto 943 quejas por dicha práctica ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). En estos ocho años sólo se han emitido 14 recomendaciones al respecto, en las cuales la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) es la más señalada. El dato más grave es que se ignora cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones y que de todos estos casos y recomendaciones, el organismo solo ha presentado 7 denuncias por tortura, de las cuales ninguna ha sido consignada ante un organismo judicial.

Se aclaró que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no cuenta ni aplica ningún protocolo de investigación de la tortura, por lo que resulta contraproducente entonces, que de 2000 a 2007 se hayan solicitado 377 dictámenes para determinar la existencia de actos de tortura física y 531 solicitudes para detectar tortura psicológica (síndrome de estrés postraumático); de estas últimas peticiones de información 52 casos fueron dictaminados como positivos.

En cuanto al trabajo del Poder Judicial del Estado, se encontró que el concepto de tortura no existe en sus registros de información, luego entonces, resulta imposible hacer un diagnóstico del tema desde la perspectiva de este Poder.

El actual presidente de la CEDHJ, ha manifestado que durante su gestión (agosto de 2007 a agosto de 2008), habían disminuido las quejas por tortura, pues “el hecho del conocimiento de los derechos humanos inhibe en cierta medida la práctica de la tortura” (La Jornada Jalisco, 28/07/08). De acuerdo con la información recabada por el CEPAD, se puede observar que del mes de diciembre de 2007 a agosto de 2008, no se había proporcionado ningún taller sobre Derechos Humanos a personal alguno de la PGJE; del IJCF ni del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Con relación al tema de la discriminación y la violencia contra la mujer (recomendaciones 8, 11-18, 22, 23 y 48), inicialmente se advirtió la “carencia” en el estado de Jalisco, de una legislación que prevenga y elimine la discriminación, lo que crea una laguna jurídica que deja en estado de indefensión a cualquier persona que haya sufrido algún acto discriminatorio cometido por autoridades estatales o municipales.

Específicamente en el ámbito de la violencia contra la mujer, en específico la de tipo institucional cometida por agentes del estado, se informó que no se encuentra tipificada como delito, por lo que en la práctica no es sancionable. Si bien existe la “**Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia**” (del estado de Jalisco) la reciente reforma al artículo 4to de la Constitución Política del Estado que da vida jurídica y derechos al feto, muestra una clara regresión en materia de la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y representa una violación expresa a los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha firmado al respecto, así como de la vigente NOM-046-SSA2-2005.

Finalmente, el caso paradigmático en el estado de Jalisco, que auspician las Medidas Cautelares MC-265-07 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos demuestra que es el propio estado, el que violenta y maltrata a la mujer, lejos de continuar con los esfuerzos para erradicar y atender los casos de violencia contra la misma. Es precisamente la falta de atribuciones de la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (FEVIMTRA) lo que entre otras cosas, limita su competencia y fomenta la impunidad en la investigación de los presuntos casos de violencia institucional contra la mujer, pese a que han existido recomendaciones al respecto, de diversos organismos internacionales.

Participación e injerencia de los poderes y organismos autónomos del estado de Jalisco

Como ya lo hemos señalado, el EPU pretende el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. En este sentido, los poderes constitucionales y organismos autónomos del estado de Jalisco, no son ajenos a esta obligación internacional. Más aún, son el centro de ella. Cuando hablamos del compromiso que adquiere el Estado Mexicano, no nos referimos únicamente al gobierno federal, nos referimos también a los gobiernos de los estados y de los municipios, claro, en sus respectivas competencias y con sus atribuciones propias. En este entendido, quienes formamos parte de la Red TDTT, concluimos en hacer aquello que las instancias respectivas del gobierno federal debieron hacer pero no hicieron; es decir, poner en conocimiento de los gobiernos estatales y municipales los alcances y obligaciones contraídas por el Estado Mexicano frente a la comunidad internacional a través del EPU.

En tal virtud, las recomendaciones del EPU al Estado Mexicano, fueron puestas en conocimiento mediante oficio, de los tres poderes del estado de Jalisco, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Lo anterior, junto con un documento que contextualiza el propio examen y sus alcances.

La intención, es tender un puente de diálogo constructivo y de trabajo con aquellos que tienen la obligación de acatar las recomendaciones emitidas y llevar a cabo los mecanismos necesarios para su efectivo cumplimiento.

De la CEDHJ, no se ha tenido información alguna, lo que de por sí dice mucho de quien debiera estar promoviendo el propio cumplimiento de las recomendaciones.

El Poder Ejecutivo, parece estar preocupado frente a la estrategia de interlocución que tendrá con el partido de oposición que llega al poder en los municipios, ya que tampoco ha contestado. El Legislativo, en el aletargamiento del cambio de Legislatura, asumiendo que con independencia de ello pudieran mostrar un interés genuino por los derechos humanos.

Quién sí mostró interés, fue el Poder Judicial, con quien se ha tenido acercamiento al menos en términos de tener conocimiento de aquellas acciones o estrategias con que cuentan para dar seguimiento a aquellas recomendaciones del EPU que tienen relación, directa o indirectamente, con su función (16, 17, 18, 26, 27, 34, 35, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 78 y 82).

Creemos que trabajando de la mano, autoridad y sociedad civil, podremos lograr una mejor evaluación fruto de una verdadera mejora en los estándares de Derechos Humanos, ya que el tiempo corre y la siguiente revisión de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tendrá lugar en el 2013, año en el que el Estado mexicano deberá rendir cuentas sobre las acciones realizadas.

Notas aclaratorias:

1. Artículo 5, inciso e, de la resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU que crea el Consejo de Derechos Humanos (CDH). 2006.
2. Todos los documentos elaborados pueden ser consultados en el sitio web de CENCOS quienes han hecho una compilación en versión electrónica de todos los informes de las organizaciones, así como de las recomendaciones. www.cencos.org

NUESTRO PEOR DELITO¹

Apreciaciones respecto al programa "La Calle No es Vida"

Rogelio Padilla Díaz

Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados AC

Título difícil, pero necesario, pues la tragedia que viven millones de pequeños seres humanos, es "nuestro peor delito", lo anterior, a pesar de que en la última década del siglo XX en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se haya aprobado la Convención de los Derechos del Niño, instrumento internacional con carácter vinculante para los estados miembros y firmantes de la misma.

¿Declaración pesimista la mía cuando estamos en el marco de reflexión y festejos precisamente del cumplimiento de 20 años de la Convención de los Derechos del Niño? No, defendiendo mi derecho a radicalizar mi esperanza y la creencia firme que como ciudad, país y planeta, podemos y debemos avanzar más rápido y con eficiencia y eficacia en materia de atención a los derechos de niños y niñas.

En la mayor parte de los pueblos que conforman nuestro mundo, la vida pequeña y joven continúa siendo maltratada de muchas formas. Demasiados países no han podido o no han querido cuidar a sus niños. México es parte de un mundo que no ha sabido preservar la vida digna y con el goce pleno de los derechos de su infancia, y que por el contrario, ha tomado decisiones que han destruido posibilidades de desarrollo y futuro bueno a millones y millones de pequeños seres humanos.

Cada nación tiene su inventario de respuestas que ha tratado de organizar para afrontar la problemática diversa de sus niños y jóvenes. También es cierto que dichas respuestas representan avances, pero todavía son insuficientes.

Para llegar a esta conclusión, no es necesario recurrir a un exhaustivo estudio, basta con leer dos o tres estadísticas actuales o caminar por las calles de las principales ciudades de América Latina y nos toparemos, aunque tratemos de evitarlos, con niños y niñas viviendo o trabajando en la calle. Sus figuras llenas de andrajos, de pobreza y desesperanza "echada encima" son inconfundibles.

La zona metropolitana de Guadalajara no es una isla en donde están ocurriendo cosas distintas a lo que hemos planteado. Las poblaciones callejeras infantiles por mencionar a algunas, son la prueba viva de que la injusticia existe, y la evidencia también, del incumplimiento y violación de Derechos

Humanos cometidos contra menores de edad. A ellos frecuentemente se les culpabiliza cuando sólo se ven los efectos y no las causas de su situación, y en su estado de indefensión quedan como víctimas inermes ante el rechazo de la sociedad y expuestos a la buena o mala voluntad de acciones gubernamentales o privadas. Para muestra basta un botón de cómo fácilmente entre “el dicho del derecho y el hecho, existe no sólo trecho, sino graves contradicciones”.

Tal es el caso de Guadalajara y la manera en que las autoridades “entienden y atienden” a las llamadas poblaciones callejeras, cuyo componente son, en buen número, menores de edad; niños y niñas.

El gobierno municipal en lugar de diseñar su política pública dirigida a éstas poblaciones, le confiere la tarea a la esposa del presidente que preside el organismo conocido como DIF (Desarrollo Integral de la Familia), que es un sistema nacional que no sólo debe ser modernizado, sino transformado por su origen asistencialista y anacrónico, a un contexto de sociedades y poblaciones poseedoras de derechos.

El DIF Guadalajara lanzó en octubre de 2008, su programa y campaña denominada *La Calle No es Vida*. Por declaraciones de funcionarios en prensa, se advierten “prisas institucionales, contradicciones y mezclas riesgosas de asistencialismo y limpieza social”. En un exceso inspirado en la ingenuidad y el triunfalismo, hay declaraciones en el sentido de que a finales de la presente administración municipal, en Guadalajara habría “calles sin niños y adultos pidiendo dinero”.

El programa de referencia, ni siquiera inició con la aplicación rigurosa de un censo de la población “objeto” del mismo. Ahora ya en el último trimestre del 2009 y por finalizar también la administración municipal, son evidentes las señales de crecimiento de las poblaciones callejeras, sobreviviendo de muchas formas y actividades en las calles de Guadalajara.

Se podrá argumentar que la “crisis económica que nos vino de fuera” afectó sus excelentes planes y así nuevamente ser omisos en evaluar con rigor y aceptar en qué, en cuánto y cómo se equivocaron. En realidad, el programa partió de una premisa ingenua y falsa que permeó una agresiva campaña de medios: “tu moneda los arraiga a la calle”, ciudadano organízales el No (a las monedas). Sin embargo, es el Estado y su incapacidad para promover políticas públicas inteligentes que realmente combatan la pobreza, el que los ha excluido, y en la calle han defendido su derecho a la sobrevivencia... En este contexto, sí, son las monedas de los ciudadanos las que han garantizado esa sobrevivencia marginal en que los ha colocado la exclusión social.

Desde luego que este programa del sistema DIF “otorgó beneficios a grupos específicos”, pero no generó procesos educativos participativos y de organización de la población, por lo que fue acción efímera hasta que el presupuesto les resultó insuficiente y las contradicciones afloraron.

En lugar de ser una acción consensada por parte del sistema DIF con las organizaciones, se trató de una acción unilateral que por su concepción y operación fue motivo “no de encuentro, comunicación y coordinación, sino de desencuentro y polarización, incluso entre grupos ciudadanos”.

No se puede ocultar en el análisis del discurso de la propia campaña y sus materiales, que existe un interés de “sacar de la calle”; de “limpiar las calles”. Dicho propósito puede ser exitoso sólo con la intervención de la policía y la violación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras. Hay evidencias de esta intervención y de detenciones en contra de los llamados “limpiaparabrisas”, que forma parte de uno de los grupos de poblaciones callejeras consideradas como de “mayor problemática, de imagen incomoda y mugrosa (no es una actividad limpia) y altamente estigmatizados”.

Existen testimonios de poblaciones callejeras que refieren que “policías buena onda” que no los han levantado, le han advertido que ya no les “darán chance de andar de vagos o trabajando en el primer cuadro de la ciudad, porque va a ver transporte nuevo y van a venir muchos visitantes”; otros refieren: “pos sí mairo, no nos levantan, pero sí nos echan del lugar”.

Lo que aquí se advierte, es que el Ayuntamiento de Guadalajara, con una mano impulsa el asistencialismo en las calles, y con la otra viola los derechos humanos. ¡Cuidado! La advertencia a tiempo, es que perderán las poblaciones callejeras, pero la ganancia de las autoridades será efímera y el costo puede ser muy alto. Con el programa *La Calle No es Vida*, al público se le invitaba a “un acto de fe” cuando se le decía en un folleto “no te preocupes el sistema DIF les ofrecerá...”. Lo mismo que se ha hecho en años anteriores, entonces: ¿Para qué han servido tantos millones de presupuesto?

La transparencia y la rendición de cuentas, son asignaturas pendientes de este programa y de muchos de esta administración. ¿Cuál fue su presupuesto; la metodología, de la cuál partieron; sus indicadores; sus procedimientos de evaluación, etc.? Desde luego que no contempló ningún mecanismo de participación y vigilancia ciudadana.

Si realmente les preocuparan las poblaciones callejeras, no iniciarían con una campaña mediática cuyo propósito es generar una corriente de opinión que les organizara el No a las monedas.

La hipótesis que se asoma es “ablandar y asfixiar” a esas poblaciones callejeras, con el objeto de que no les quede más remedio que correr y “aceptar el manto protector del DIF”, cuando en realidad, dichas entidades públicas, no están preparadas ni con presupuestos, ni con programas para atender esa “demanda forzada”.

¿Por qué no iniciar acercándose a las poblaciones callejeras para desarrollar un trabajo educativo liberador que combata la pobreza y la exclusión? ¿Será acaso ello un proyecto de demasiado largo aliento para las “prisas institucionales” de cada administración? Quizá la preocupación y el amor por los desheredados, los aceleró...

Documentando el “sospechosismo”

Este tipo de programas y sus campañas no son nuevas y más bien parecieran una “directriz del centro, del DIF nacional”, ya que en otros estados se ha estado haciendo exactamente lo mismo. Lo anterior, lo demuestran los “slogans” en las cabezas de algunos diarios:

Quiere DIF para niños Menos dinero, más amor. El Portal de Sinaloa
 Retiran a casi 100 menores de las calles. El Diario (Cd Juárez)
 Retira DIF estatal a menores que trabajan en las calles. Más Noticias Chihuahua.
 Por seguridad, retiran a niños que limpian parabrisas de cruceros. El Sol de Parral.
 Niños de la calle, a la comuna. Milenio Puebla.
 Realiza DIF Morelia diagnóstico sobre niños de la calle. Agencia de Noticias de Michoacán.
 Se duplicó el número de niños de la calle en Xalapa. Diario Xalapa.
 Detendrán a menores noctámbulos; los llevarán a casa. El Sol de Tijuana.
 Campaña en la entidad para rescatar a niños explotados. El Sol de San Luis.
 Inconforma combate a ambulante infantil. Cuarto Poder Chiapas.
 Proponen controlar ingreso de niños pepenadores a basureros. El Sol de Zacatecas.
 Niega detengan a Menores. El Imparcial de Sonora.

Estas acciones “mediáticas” inspiradas por una mezcla riesgosa de: “preocupación sincera, pero ingenua y desesperación por tantos pobres invadiendo y afeando las calles de nuestras progresistas ciudades”, ponen el tache a nuestros exitosos gobiernos municipales, y están lejos de ser verdaderas políticas públicas.

Las acciones del gobierno municipal parece que siempre parten de cero y se presentan “como si descubrieran el hilo negro”. Son lanzadas unilateralmente, desconociendo a los demás actores, a quienes sólo nos dejan el papel de agradecidos receptores.

Al asomarse a la geografía nacional, se descubre una tendencia: la criminalización de la pobreza, en la que esta campaña del DIF Guadalajara se enmarca. Reiteramos que su discurso sobre el fenómeno de la calle y las poblaciones callejeras es “ingenuo y reduccionista”; pone énfasis en sólo algunas características negativas; no profundiza en las causas y coloca a los protagonistas como “objetos de ayuda y de rechazo”, y no como sujetos de derechos.

Notas Aclaratorias

- 1 Título de un poema de Gabriela Mistral, que habla duro y claro, sobre la situación de la infancia.

HACER TRANSPARENTE A LA CEDHJ: LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO DE LA RECOMENDACIÓN 2/2009.

Alberto Bayardo Pérez Arce
Consejero Ciudadano de la CEDHJ

Antecedentes

El objeto de este análisis, tiene su origen en dos situaciones distintas, pero profundamente relacionadas entre sí:

1. La presunta participación del Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos en fiestas en las que se abusaba sexualmente de menores de edad.
2. El clima de opacidad existente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en su presente administración.

En septiembre de 2007 fue denunciada por una mujer, la violación de su hija menor de edad a manos de Martín Aguirre Aguirre, entonces director jurídico de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara (Grupo Reforma 2007). La violación se da en el contexto de fiestas, a las que acudían particulares y servidores públicos y en las que participaban menores de edad en la realización de juegos sexuales. Es en dichas fiestas en las que la víctima de violación antes mencionada refirió la participación del actual procurador general de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, quien desde el primer momento fue exculpado públicamente por parte del recién nombrado Presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián (García 2007) (Rodríguez 2007) (Partida 2007). Lo anterior, suscitó la molestia del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, que por mayoría de votos, con la abstención del Presidente, decidió hacer pública su postura el 7 de enero de 2008. (Consejo Ciudadano 2008) (Barajas 2008). El Consejo estuvo presionando para que se llevara a cabo una investigación seria y profunda en la propia Comisión, pues no se observaban avances significativos en torno al caso, al grado de que el 18 de febrero de 2008 el Consejo acordó nombrar un Comité Temporal que coadyuvaría con la Segunda Visitaduría de la Comisión, encargada de llevar a cabo las investigaciones en torno a este caso que resultaba paradigmático.

Dicho Comité temporal dio seguimiento a las investigaciones en curso, y trató de allegar información al expediente, sin embargo ante la imposibilidad de hacerlo dejó de funcionar en los hechos y finalmente se disolvió cuando la CEDHJ emitió la Recomendación 2/2009 en la que se destacaba la “exculpación” del Procurador Coronado Olmos (Ferrer 2009).

Paralelamente a lo narrado se fueron suscitando otros hechos que motivaron la intervención del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI).

Aunque por ley las sesiones del Consejo Ciudadano de la CEDHJ son de naturaleza pública, ningún ciudadano había querido hacer valer su derecho a estar presente en las mismas, hasta el 20 de octubre de 2008 en que varios ciudadanos hicieron saber a la CEDHJ que asistirían a la Sesión 243 del Consejo, pues en la misma se discutiría un tema que les atañía directamente. Lo anterior fue impedido por el propio Presidente de la CEDHJ (quien a su vez lo es del Consejo Ciudadano), hecho que motivó que los aludidos solicitaran la intervención del ITEI, quien a la postre, les dio la razón (Partida 2008). A raíz de esta situación, el Comité de Clasificación de Información de la CEDHJ, se ha abocado a revisar los temas que se abordarán en las sesiones del Consejo a fin de clasificarlas de acuerdo con su naturaleza, pública o de carácter restringido o confidencial.

Con base en ello, se clasificó como reservada la totalidad de la Sesión 244, a celebrarse el 24 de noviembre de 2008, debido a que se abordarían dos temas *confidenciales*, clasificación que fue revertida por el ITEI quien determinó que no podía restringirse el acceso al público a la totalidad de la sesión, sino solamente durante el tiempo en el que se estuvieran abordando los dos puntos en comento (Rentería Godínez 2008). Lo anterior creó un antecedente que impide que la CEDHJ vuelva a hacer una clasificación así, lo que en la práctica se traduciría en el uso de la ley de transparencia para hacer opaco el funcionamiento del Consejo Ciudadano. Detrás de esta situación es posible entrever una actitud de rechazo al escrutinio público, percepción que se refuerza al sumarle el hecho de que a propuesta del Presidente, y con el respaldo de solo 4 de los 8 miembros del Consejo con derecho a voto se aprobó el punto de acuerdo 6/237/2008, que impide que en los pronunciamientos públicos del Consejo Ciudadano se publicite cuáles de sus miembros están a favor o en contra del mismo, con lo que se genera una falsa imagen de unanimidad.

Hasta aquí podemos ver que el ITEI ha venido enseñándole a la CEDHJ la manera en que debe actuar para respetar el derecho humano de acceso a la información pública.

Emisión de la Recomendación 2/2009

El 30 de enero de 2009, en medio de una gran cobertura mediática, se dio a conocer la Recomendación 2/2009, culminando por parte de la CEDHJ el proceso de investigación respecto de los hechos de pederastia en los que presuntamente había participado el Procurador Coronado Olmos, y en la que principalmente se destacaba el hecho de que dicho funcionario no había cometido ninguna violación

de derechos humanos; lo anterior, de acuerdo con el boletín de prensa en el que se dio a conocer la Recomendación (Ferrer 2009) (Barajas 2009) (Ramírez Y. 2009).

Dado que esta conclusión suscitó numerosas críticas de parte de la opinión pública, el propio Segundo Visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca, quien había tenido a su cargo las investigaciones y la elaboración de la Recomendación, invitó en el curso de una entrevista radiofónica a que la ciudadanía la leyera para que se convenciera por su propia cuenta de que tenía fundamentos legales (Perlasca Cháves 2009).

La Solicitud de la versión pública de la Recomendación 2/2009

Atendiendo a la invitación pública llevada a cabo por el Segundo Visitador, las Consejeras Emma Valadez, Imelda Orozco y Paola Lazo, así como los Consejeros Ciudadanos Alberto Bayardo (quien esto escribe), Alejandro Sánchez y Francisco Javier Pérez Chagollán, solicitamos el 6 de febrero de 2009 mediante oficio, que se nos hiciera entrega de la versión pública de la Recomendación, en el entendido de que sería aquella en la que se suprimiera cualquier información que pudiera permitir la identificación de las víctimas de abuso sexual. Dicha solicitud fue negada por parte de la CEDHJ, y se nos remitió al boletín de prensa arriba mencionado, al considerarse como lo único que podía hacerse público de la Recomendación, de acuerdo con la particular interpretación de lo dispuesto en la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco por parte de la unidad de transparencia de la propia CEDHJ. Lo anterior resultaba absurdo, pues de acuerdo con el segundo Visitador de la CEDHJ, el documento original constaba de 107 páginas, mientras que el boletín de prensa contaba tan solo con 10.

Esta situación, aunada al hecho de que no se informó con anticipación al Comité Temporal que se creó para darle seguimiento a las investigaciones que motivaron la recomendación, provocó que varios de quienes lo integrábamos nos deslindáramos públicamente de la Recomendación (Pérez Chagollán, y otros 2009).

Intervención del ITEI

Ante la negativa de que se nos entregara la versión pública de la Recomendación 2/2009 de la CEDHJ quien esto escribe decidió recurrir al ITEI para solicitar su intervención a través del Recurso de Revisión 082/2009, mismo que fue aceptado y tramitado por él, dándonos la razón a quienes en un primer momento lo habíamos solicitado.

En el propio Recurso se lee que uno de los argumentos de la CEDHJ para no entregar la versión pública de la Recomendación era que en el acta de clasificación de la Unidad de Transparencia CEDHJ del 27 de febrero de 2008 se habían declarado confidenciales todos los documentos existentes relativos al caso en el que se involucraba al Procurador Coronado Olmos, presuntos actos de abuso sexual, así

como los que se generaran, lo que fue refutado por el ITEI al considerar que al menos por parte de la CEDHJ ya se había cerrado el caso con la emisión de la Recomendación, documento cuya naturaleza es pública, por lo que ya no era procedente la clasificación de la información relativa al caso, además de que la misma se había llevado a cabo en un momento histórico distinto, y no era posible reservar “a futuro” información que todavía no existe, ni se sabe si llegará a existir.

Por otro lado, en cuanto al argumento de la CEDHJ referente a que no quería hacer pública la Recomendación en atención al “interés superior del niño”, señaló que nada le impedía a la CEDHJ cumplir con su obligación de respetar mi derecho de acceso a la información pública generada por ella misma, junto con el respeto a los intereses de los menores de edad mencionados en la Recomendación, pues por ley sus datos son confidenciales, con lo que al proteger dichos datos se evitarían injerencias indebidas en su vida.

De este modo, el 3 de marzo de 2009, el ITEI ordenó a la CEDHJ que me entregara copia en formato digital de la Recomendación 2/2009 emitida por la propia CEDHJ el 30 de enero de 2009, en un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación.

Es de mencionarse que quien esto escribe decidió hacer pública la Resolución del ITEI a fin de evitar que la CEDHJ simplemente se negara a acatarla en la impunidad del desconocimiento público, y si bien no es posible determinar hasta qué punto esta situación favoreció el que se presionara al *ombudsman* para que acatara la Resolución, es claro que como estrategia rindió buenos frutos.

Reacciones de la CEDHJ

El Presidente de la CEDHJ reaccionó criticando la Resolución del ITEI, amagando con impugnarla (Rello 2009), e invitando públicamente a los padres de las demás menores de edad involucradas en las investigaciones que culminaron en la emisión de la Recomendación 2/2009 a ampararse en contra de la misma. Fue tal la molestia del *ombudsman* ante esta situación que llegó al grado de afirmar que quien esto escribe tenía “intenciones perversas” (Torres Zambrano 2009) (Rello 2009) al llevar a cabo la citada solicitud de información. Lo anterior es un contrasentido, ya que por ejercer mi derecho a la información reconocido por la Constitución de Jalisco, refrendado por el propio ITEI, se lesionaron mis derechos por parte del *ombudsman*, al llamarme perverso en el contexto de una investigación por pederastia, que pudo haber suscitado la sospecha de que estuviera movido a hacerlo por alguna perversión psicológico-sexual, lo que si bien no permite afirmar la mala intención de quien expresó dicha opinión, sí habla por lo menos de su imprudencia, misma que no ha sido corregida públicamente.

De cualquier manera, en la víspera de que se venciera el plazo establecido por el ITEI, conforme a la ley respectiva, se me entregó la información solicitada (Ávila Trujillo 2009), situación que más tarde aproveché para solicitar que se hiciera pública también a través del portal en Internet de

la CEDHJ (Orellana Téllez 2009), lo que se hizo, y hasta la fecha la multicitada Recomendación 2/2009 está a disposición de la ciudadanía por ese medio.

Conclusiones: una CEDHJ no comprometida con la transparencia y los derechos humanos

De todo lo anterior se puede concluir que no es claro que en la CEDHJ se considerara el acceso a la información como un derecho humano, como de hecho lo es, de ahí que quien esto escribe haya decidido dar la batalla legal por hacerlo valer como tal, aunque ello implicara que una instancia ajena a la institución que tiene a su cargo velar por los derechos humanos de los jaliscienses le ordenara respetar uno de ellos. En otras palabras, a quien esto escribe le resultaba indignante el hecho de que se pretendiera escamotear a la ciudadanía el derecho a revisar una Recomendación tan importante por lo paradigmático del asunto que motivó su emisión, como lo es el dar seguimiento a la acusación de un delito en contra de quien tiene la autoridad para castigar los mismos.

Bibliografía

- ÁVILA TRUJILLO, Irving Israel. «Oficio SE/UT/71/2009.» Guadalajara, Jalisco: CEDHJ, 1 de Abril de 2009.
- «Acusa ombudsman de fines perversos a ciudadano consejero.» *Público Milenio*, 26 de Marzo de 2009: 10.
- BARAJAS, Eugenia. «Deslinda la CEDHJ al procurador de Justicia de la violación de una menor.» *La Jornada Jalisco*, 31 de Enero de 2009.
- Consejo Ciudadano. «Sesión 225/2008 Extraordinaria.» *Minuta de reunión*. CEDHJ, 7 de Enero de 2008.
- Covarrubias, Jorge. «No hay delito acreditado, insiste la CEDHJ.» *La Jornada Jalisco*, 27 de Enero de 2008.
- DK 1250AM. «CEDHJ no encontró culpable a Coronado Olmos por violación de menor.» *DK 1250AM*, 30 de Enero de 2009.
- «El Itei emplaza a la CEDHJ a entregar información.» *Público Milenio*, 24 de Marzo de 2009: 10.
- «Exhorta el Consejo Ciudadano de la CEDHJ a Emilio ordenar investigación sobre pederastia.» *La Jornada Jalisco*, 9 de Enero de 2008.
- «Exhorta el ITEI a la CEDHJ que haga públicas las sesiones del Consejo Ciudadano.» *La Jornada Jalisco*, 24 de Octubre de 2008.
- Ferrer, Mauricio. «Exculpa la CEDHJ a Tomás Coronado de abuso a menores.» *La Jornada*, 31 de Enero de 2009.
- García, Emigdio. «No habrá queja contra Procurador.- CEDHJ.» *Mural*, 21 de Septiembre de 2007.
- Grupo Reforma. «‘Congelan’ caso de abuso.» *Mural*, 13 de Septiembre de 2007.
- «La CEDHJ inició averiguación.» *La Jornada Jalisco*, 14 de Septiembre de 2007.

- «Ligan a Procurador en abuso de menor.» *Mural*, 13 de Septiembre de 2007.
- López Álvaro, Víctor M. «Difunde la CEDHJ recomendación que exonera a procurador de abuso de menores.» *Proceso Jalisco*, n° 225 (Mayo 2009).
- «No hay elementos para separar del cargo a Tomás Coronado Olmos, afirma la CEDHJ.» *La Jornada Jalisco*, 22 de Septiembre de 2007.
- «Ordenó ITEI a Derechos Humanos abrir a la ciudadanía sesión con carácter reservado.» *La Jornada Jalisco*, 25 de Noviembre de 2008.
- Orellana Téllez, Néstor Aarón. *Oficio ST/86/2009*. CEDHJ, 13 de Mayo de 2009.
- Padilla, Héctor, y Paulina Martínez. «Prevén fiscalía especial para procurador.» *Mural*, 17 de Septiembre de 2007.
- Partida, Juan Carlos G. «Defiende González Márquez a su procurador, implicado en violación.» *La Jornada*, 17 de Septiembre de 2007.
- Pérez Chagollán, Francisco Javier, Imelda Orozco Mares, Paola Lazo Corvera, Alberto Bayardo Pérez Arce, y María Emma Valadez Cruz. «Se deslindan de recomendación a Tomás Coronado.» *La Jornada Jalisco*, 4 de Marzo de 2009: 2.
- Pérez, R. «Derechos Humanos debe entregar información de recomendación a Tomás Coronado: Itei.» *El Informador*, 4 de Marzo de 2009: 6.
- Perlasca Cháves, Javier, entrevista de Agustín del Castillo y Rubén Martín. «Recomendación Tomás Coronado.» *Cosa Pública*. Guadalajara, Jalisco, (3 de Febrero de 2009).
- Ramírez Y., Jaime. «CEDHJ: nada contra procurador.» *Público Milenio*, 31 de Enero de 2009.
- Ramírez Yáñez, Jaime. «Satisfecho Coronado Olmos con el dictamen de la CEDHJ.» *Público Milenio*, 31 de Enero de 2009.
- «Recomendaciones no son datos reservados.» *Público Milenio*, 4 de Marzo de 2009.
- Rello, Maricarmen. «“Gravísimo error”, la resolución del Instituto.» *Público Milenio*, 25 de marzo de 2009: 11.
- Rentería Godínez, Agustín de Jesús. «Oficio SEC.EJ. 1239/2008.» Guadalajara, Jalisco: ITEI, 24 de Noviembre de 2008.
- Rodríguez, Laura. «Aplaude Gobernador opinión de CEDHJ.» *Mural*, 21 de Septiembre de 2007.
- Saavedra Ponce, Viridiana. «Dictamina ITEI que CEDHJ debe entregar información que le fue negada a un particular.» *La Jornada Jalisco*, 4 de Marzo de 2009: 10.
- «Sesión 228/2008 Ordinaria.» *Minuta de reunión*. CEDHJ, 18 de Febrero de 2008.
- Toledo, Alfredo. «Piden conclusiones de recomendación de la CEDHJ a Tomás Coronado Olmos.» *El Occidental*, 4 de Marzo de 2009: 15.
- Torres Zambrano, Gricelda. «Impugnarán solicitud de hacer público expediente completo del caso del Procurador.» *Notisistema*. 25 de Marzo de 2009. <http://www.notisistema.com/noticias/?p=167119> (último acceso: 25 de Marzo de 2009).

LA SIMULACIÓN ACTIVA DEL OMBUDSMAN

Análisis sobre la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco durante 2008.

Carlos A. Peralta Varela y Francisco Macías Medina
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC

En el lapso de un año, hemos presenciado cambios políticos, luchas electorales y el recrudecimiento de la violencia en el país por políticas de combate a la inseguridad del gobierno federal, pero también el adelgazamiento preocupante de libertades fundamentales sobre todo de las mujeres, un ejemplo de ello, son las iniciativas para proteger la vida desde la concepción.

Desafortunadamente somos testigos también de una preocupante debilidad del sistema público de protección de derechos humanos, creado precisamente para buscar remedio a algunos de los principales vicios del Poder Judicial, como el exacerbamiento jurídico, la falta de acceso y de publicidad de los procedimientos, así como la cercanía con la población, entre otros.

Pareciera que dichas instituciones se encuentra probadas al límite, en su autonomía, legitimidad y eficacia, al mismo tiempo que arrastran vicios propios de otras estructuras administrativas del país: una marcada opacidad en la información y obesidad presupuestal sin una rendición de cuentas clara.

El escenario se recrudece ante el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual propicia un incremento del manoseo político y no de un ejercicio de evaluación de las funciones del *Ombudsman* nacional, aspecto que se repite cada vez que se discute ese tipo de sucesiones.

La situación del organismo público de defensa de derechos humanos en Jalisco, comprueba la importancia de que en los relevos se lleven a cabo ejercicios en los que se anteponga un perfil de quien debe aspirar al cargo. La reciente designación del Procurador General de la República por el Senado, marca aunque se trata de un ejemplo paralelo, un precedente indigno y reprobable, que a toda costa tiene que evitarse en el caso de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), los cuales la experiencia nos demuestra, son dependientes totalmente del impulso y “voluntad” de sus titulares.

En Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha decidido adoptar un modelo que sin despegarse de una interpretación ortodoxa de los derechos humanos, casi surgida de una agencia del ministerio público, defiende agendas que son posicionadas a través de los medios de comunicación para buscar el oportunismo efímero, pero que en el fondo no garantiza ni protege a los reclamantes.

Con ese enfoque, las vinculaciones con su estructura interna como el Consejo Ciudadano rayan en el viejo corporativismo al rechazar a consejeros y consejeras afines con la perspectiva de la sociedad civil, al grado de influir de forma claramente violatoria de la constitución local y de los derechos humanos de una de ellas, en el proceso de elección de una nueva consejera titular, aspecto que afortunadamente ha sido remediado por una muy reciente sentencia de Amparo.

Imaginemos: un *Ombudsman* que viola libertades fundamentales y que obliga a personas a buscar la garantía de esos mismos derechos ante una autoridad judicial, para que finalmente sea ésta quien le corrija la plana; entonces, ¿para qué existe si no es capaz de garantizar derechos humanos básicos en su propia actuación interna?

Con la sociedad civil, ha buscado vinculaciones sin fines conocidos con aquellos que lo postularon y bajo la usanza de la CNDH crea sus propias redes, aunque se trate de organismos, algunos de ellos valiosos, pero que nunca han realizado tareas de exigencia de derechos humanos o de rendición de cuentas.

En cambio, a las organizaciones con este perfil, las desdeña, ataca y las emplaza a “comprobar” sus afirmaciones, como si la defensa de derechos humanos fuera un monopolio del Estado.

El titular de la CEDHJ, emite recomendaciones que se basan en un alto porcentaje, en el impulso y las pruebas ofrecidas por las víctimas, colocándose en el papel de juzgador totalmente incompatible con su labor, al grado de privilegiar la presunción de inocencia de servidores públicos. Por ende, las consecuencias de su actuación es literalmente la exoneración de éstos, como en el caso de la Recomendación 2/09 referente a la prostitución y pornografía infantil, así como corrupción de menores en el que se señala al actual Procurador de Justicia de Jalisco.

Respecto a la efectividad de su función, la presente semblanza muestra un análisis de los indicadores más conocidos por la sociedad: recepción de quejas, conclusión de las mismas, recomendaciones y su grado de cumplimiento, así como las orientaciones, con la intención de continuar y someter a estas organizaciones a la rendición de cuentas.

Observaciones sobre las quejas

Debe tenerse presente que si bien en el informe correspondiente al ejercicio anual 2008 de la CEDHJ, se anuncia un aumento histórico de 300% en relación con las quejas recibidas, la gran mayoría de éstas, fueron específicamente en contra de un solo actor público: el Gobernador de Jalisco. De las 10,415 quejas recibidas durante el 2008, 6,954 (66.76%) fueron interpuestas por los ciudadanos en contra de Emilio González Márquez, por dos motivos: a) el donativo efectuado por el gobernador para la construcción del santuario de los Mártires Cristeros (6,549 quejas), b) las injurias (mentada de madre) que profirió en contra de los ciudadanos que no pensaban como él (405 quejas).

La CEDHJ recibió 3,461 quejas (33.23%) por el resto de las posibles violaciones a derechos humanos realizadas por todas las demás autoridades del estado de Jalisco. Este dato es importante porque da cuenta más objetivamente del referido aumento en el número de quejas recibidas. En el Cuadro 1, se puede apreciar que las quejas en Jalisco durante el 2008, no fueron a la baja, por el contrario, aumentaron.

El aumento inusitado y específico de quejas en contra del Gobernador, y la falta de información pública cuya divulgación es deber de la CEDHJ, dificultó en este período realizar un análisis más profundo sobre la capacidad de atención y solución real de las quejas por parte de la Comisión. En este sentido es relevante mencionar que en el apartado relativo a las quejas correspondiente a su informe anual 2008 (página 8), no se da cuenta del número total de quejas resueltas por la Comisión y por otra parte, si bien ese dato se puede obtener en la revista periódica de la CEDHJ (Gaceta 6 de diciembre), en este período y hasta la fecha en que fue elaborado el presente escrito (septiembre del 2009), no se habían publicado los números 53 y 54 de la Gaceta, correspondientes al segundo semestre del 2008.

Así entonces sólo se pudo obtener el dato de quejas resueltas, el cual asciende a 853, mismo que aparece en el capítulo final del informe 2008. Para acompañar el dato se menciona que “1,021 quejas aun permanecen en trámite, incluidas 7,842 que fueron acumuladas a otras quejas”¹. Con esta información tendríamos que el 2008 fue el año con menos quejas resueltas en la historia reciente de la Comisión (por lo menos del 2003 a la fecha), y de igual manera, también fue el año en el que más quejas se han recibido y procesado. El porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas recibidas sería de tan sólo un 8.2 %. Podría surgir entonces la pregunta ¿fue un año de mucha actividad pero poca efectividad?

Cuadro 1: Relación de quejas, conciliaciones, recomendaciones y quejas archivadas.

Año	Quejas	Quejas resueltas	Suma de Conciliaciones y Recomendaciones	Quejas resueltas en rubro diversos motivos 2	% de quejas resueltas en rubro diversos motivos.
2003	2,899	3,014	643 (633+10)	2,030	67.35 %
2004	3,064	2,949	707 (696+11)	2,087	70.76 %
2005	3,129	2,932	572 (558+13)	2,002	68.28 %
2006	2,793	3,155	565 (557+8)	2,025 (3)	64.18 %
2007	3,058	3,211	471 (455+16) (4)	1,881	58.58%
2008	10,415	853 (5)	476 (442+34)	No se ha difundido	No se sabe

Nota: no concuerdan algunas cifras proporcionadas en el Informe 2008, con cifras aparecidas en las Gacetas trimestrales 2007 y dos gacetas del 2008.

De las 6,954 quejas interpuestas específicamente en contra del Gobernador del Estado durante 2008, las relativas al llamado “macro limosnazo”, 6,549 quejas (94.17%), se encontraba en trámite para febrero del 2009. Sólo se habían resuelto las relativas a las injurias proferidas por el gobernador hacia la sociedad jalisciense (405 quejas), que merecieron la recomendación 14/2008 y que además, como si se complementara la burla, “fue una recomendación rechazada” Cabe mencionar que para el 10 de abril del 2008, el Presidente de la CEDHJ mencionó que habían recibido para ese entonces 1191 quejas en contra del donativo del gobierno al Santuario de los Mártires, razón por la cual, emitió medidas cautelares solicitando al ejecutivo la suspensión del donativo. En la Gaceta 52⁽⁶⁾, se menciona que para Junio del mismo año, ya habían recibido 6,687 quejas en contra del Gobernador. Sin embargo, y a pesar del importante e histórico número de quejas vinculadas y acumuladas, en el segundo semestre del año no se resolvió o emitió una recomendación al respecto. Por ello, del total de quejas específicas en contra del ejecutivo solo se resolvieron en el 2008, el 5.82 % de las mismas. ¿Qué tratamiento se mereció y qué destino tendrán las quejas relativas a la macro limosna? Por lo pronto se puede considerar que se encuentran en el limbo de las quejas.

Debe tomarse en cuenta que formalmente, el total de recomendaciones sumado al de conciliaciones, fue en el 2007 de 471, y para el 2008 el total fue de 476. Es decir, de un año a otro prácticamente no existió variación en cuanto al número de quejas resueltas en forma acumulada, por estas dos relevantes vías.

Cuadro 2: Quejas dadas de baja en el 2008 7

	Gaceta 51 / Enero-Marzo	Gaceta 52 / Abril- Junio
Recibidas	884	7718
Recomendaciones	4	11
Archivadas por diversos motivos	391	8 225
Enviadas a la CNDH y Estatales	69	No informa
Improcedentes	37	No informa
Acumuladas	63	7793 (en contra del Gobernador)
Total de quejas resueltas	968	

En el informe 2007 el Ombudsman afirmó que “los procedimientos de queja no siempre terminan con una declaratoria de violación de derechos humanos de los quejosos, puesto que en muchos casos los expedientes se concluyen por otras causas que establece el Reglamento Interior de la Comisión, o por el cese del acto u omisión que le dio origen. Concluyen de igual manera por no haberse acreditado las violaciones reclamadas”⁸. Sin embargo, en el caso de las quejas interpuestas en contra del Gobernador, si bien pudo haber cesado el procedimiento en la medida en que la agrupación que recibió en donativo del gobernador lo regresó al verse exhibida y socialmente exigida, no se elimina la existencia de un acto de donación ilegítimo que además generó indignación entre la sociedad tapatía. ¿Qué tan válido es pues que el ombudsman permita que un caso tan relevante (el mayor acumulado de quejas en la historia de la CEDHJ) concluya simplemente por el cese del acto que le dio origen?

Nuevamente consideramos conveniente solicitar al Ombudsman que sea más claro y objetivo en cuanto a explicar el tratamiento que se les brida a las quejas. Fundamentalmente que se describan y fundamenten los criterios para archivar las quejas en el rubro de motivos diversos.

En relación al tipo de quejas frecuentes, debe destacarse acorde al “Cuadro 3”, que por lo menos durante el 2008, perdieron los primeros lugares tanto la prestación indebida del servicio público (que aumentó con relación al año pasado), como la detención arbitraria, que disminuyó en forma relevante en relación con el año anterior. Obviamente y por volumen significativo, se elevaron a los primeros lugares el ejercicio indebido de la función pública, la violación a la legalidad y seguridad jurídica, la discriminación, así como la falta de fundamento y motivo legal. Lo anterior, debido a los presuntos tipos de violaciones cometidos por el Gobernador.

Cuadro 3: Quejas más frecuentes en los últimos seis años.

Quejas más frecuentes	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (9)
Ejercicio indebido de la función pública						8280
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica						7013
Discriminación						6981
Falta de fundamentación o motivación legal						6881
Detención arbitraria ¹⁰	951	958	997	976	929	588
Prestación indebida del servicio público	819	737	1001	945	1021	1061
Lesiones	608	824	798	691	714	400
Incumplimiento de la función pública en la Procuraduría	255	294	355	303	390	

* Una queja puede contener más de un tipo de violación

* Una queja puede abarcar uno o más agraviados

En cuanto a las autoridades más señaladas por presuntas violaciones durante el 2008, tenemos en primer lugar al Gobernador, seguido por la Secretaría General de Gobierno (Cuadro 4). Inmediatamente después se encuentra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dependencia que año con año encabezó la lista de las autoridades más señaladas como presuntas violadoras de derechos humanos en Jalisco. Debe reconocerse que numéricamente bajó el número de quejas en relación a la Procuraduría, sin embargo es aun muy superior al número de quejas en torno a otras dependencias.

Hacemos un nuevo llamado a que el Ombudsman defina una estrategia de acción distinta y más significativa, en relación a las violaciones cometidas por la PGJE, para lograr que disminuyan aun más y en forma permanente.

Cuadro 4: Autoridades frecuentemente señaladas por presuntas violaciones.

Autoridad	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Gobernador de Jalisco						6459
Secretaría General de Gobierno						669
Procuraduría General de Justicia del Estado	725	792	764	700	718	651
DSP de Guadalajara	351	311	266	270	236	231
SSP Prevención y Readaptación Social	263	329	264	262	231	241
Secretaría de Educación del Estado	204	182	182	182	234	194
DSP de Zapopan	151	151	156	192	129	108

Orientaciones y conciliaciones

Durante el 2008, se dieron 9,915 orientaciones. Un número muy similar a las 9,882 orientaciones brindadas en el 2007, y menor a las orientaciones brindadas del 2003 al 2005 (Cuadro 5).

En relación al “mecanismo de conciliación” que debiera ser empleado en asuntos que no implicaran violaciones graves a los derechos humanos y que pudieran derivar en el resarcimiento del agravio, fue usado en mucha menor proporción que en años anteriores. De acuerdo al Informe 2008 de las quejas recibidas, 442¹¹ se resolvieron mediante conciliación.

Teniendo en cuenta esta información podemos observar (**Cuadro 5**) que el número de propuestas de conciliación emitidas en el 2008, ha sido el menor desde el 2003. Lo anterior a pesar de que durante 2008 el número de quejas 3, 461 sin contar aquellas interpuestas en contra del gobernador, ha sido el mayor en la historia de la Comisión.

Cuadro 5: Orientaciones, conciliaciones y recomendaciones

Año	Orientaciones	Quejas recibidas	Conciliaciones	Recomendaciones
2003	12,326	2,899	633	10
2004	11,029	3,064	696	11
2005	10,173	3,129	558	13
2006	8,298	2,602	557	7
2007	9,882 (12)	3,058	455	16
2008	9,915	10,415	442	34

Las Recomendaciones

Cabe recordar que las recomendaciones son un mecanismo de gran importancia para la labor de la Comisión en la medida que resulta su recurso extremo ante casos graves de violación. Se usan para resarcir el daño o para impedir que continúe perpetrándose la impunidad. En este sentido y entendiéndola como un mecanismo usado ante una grave y demostrada violación, no se esperaría que fuera simplemente aceptada, o aceptada en forma parcial dado que ello puede derivar en una simulación que sostiene la impunidad. De las autoridades se requiere el cabal y efectivo cumplimiento de las solicitudes hechas por la Comisión en cada una de las recomendaciones. Debe tenerse en cuenta que las recomendaciones emitidas a la PGJE, fueron en años anteriores normalmente rechazadas o aceptadas parcialmente, lo cual evidenciaba su falta de voluntad política y una estrategia de simulación que posibilitaba seguir violando derechos.

Para el 2008 se emitió un histórico (al igual que las quejas recibidas), número de recomendaciones. En total se emitieron 34.

Cuadro 6: Relación entre la aceptación total o parcial de las recomendaciones

Año	Quejas recibidas	Recomendaciones	Aceptadas	Aceptación parcial	No aceptadas	En proceso aceptación
2003	2,899	10	1	2	7	
2004	3,064	11	2	5	4	
2005	3,129	13	7	6	0	
2006	2,602	8	4	2	2	
2007	3,058	16	9	7	0	
2008	10,415	34	15 (13)	16	1	2

En el 2007 nueve de las 16 recomendaciones emitidas (56.25 %) fueron aceptadas en su totalidad. Para el 2008, 15 de las 34 recomendaciones emitidas (44.1%) fueron aceptadas en su totalidad. 16 fueron aceptadas en forma parcial y una de estas recomendaciones, la que se emitió al Gobernador de Jalisco por lanzar improperios en contra de la sociedad, fue “abiertamente rechazada”. Falta esperar si se aceptan las dos que están en proceso, sin embargo, con estos datos podemos afirmar que continúa siendo mediocre el porcentaje que recomendaciones que son totalmente aceptadas (Cuadro 6).

De las 34 recomendaciones en 20 ocasiones fue destinataria la Procuraduría General de Justicia del Estado, un número por demás relevante dado que implica ser referente en el 58.8 % del total de las recomendaciones. En 3 ocasiones fue destinatario el Presidente Municipal de Puerto Vallarta y en 3 más, lo fue el Alcalde de Guadalajara. Con una o dos menciones fueron recomendadas otras 25 autoridades (Cuadro 7).

Como puede observarse en el **Cuadro 7**, en relación a las nueve recomendaciones expedidas exclusivamente al Procurador General de Justicia, solamente una fue aceptada totalmente; seis lo fueron parcialmente y dos más se encuentran en trámite. Es decir, al igual que en el año 2007, durante el período en estudio, esta dependencia continúa con la práctica de aceptar parcial y condicionadamente las recomendaciones.

Cuadro 7: Relación de las recomendaciones emitidas en el 2008

Num.	Autoridad	Causa	Estado
1/08	Presidente municipal de Guadalajara y procurador general de Justicia del Estado	violación de la libertad, la legalidad y la seguridad personal.	Aceptada total
2/08	Presidente municipal de Guadalajara y procurador general de Justicia del Estado.	violación del derecho a la vida, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica.	Aceptada total
3/08	Presidenta del Sistema DIF Jalisco; integrantes del Consejo Estatal de Familia y procurador general de Justicia del Estado	violación de los derechos de los niños	Aceptada total
4/08	Presidente municipal de Zapopan	violación del derecho a la vida, integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica.	Aceptada total

5/08	Presidente municipal de Ocotlán, Jalisco.	violación de los derechos a la igualdad y trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad y a la privacidad.	Aceptada total
6/08	Pleno del ayuntamiento y presidente municipal, ambos de Ayotlán, y procurador General de Justicia del Estado.	violación del derecho a la vida, a la protección de la salud, homicidio, legalidad y seguridad jurídica	Aceptada parcial
7/08	Presidente municipal de Zapopan.	violación del derecho a la vivienda y a la legalidad.	Aceptada total
8/08	Presidente municipal de Tequila, Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tequila y procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violación de los derechos del niño, de la libertad personal, de la legalidad, seguridad jurídica y ejercicio indebido de la función pública.	Aceptada total
9/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violaciones de los derechos a la libertad, integridad física (tortura), incomunicación y garantías de legalidad y seguridad jurídica	Aceptada total
10/08	Presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	violación de los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, a la legalidad y seguridad jurídica por prestación indebida del servicio público.	Aceptada total
11/08	Congreso del Estado de Jalisco; gobernador constitucional del estado de Jalisco; secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable; secretario de Salud y presidente municipal de Puerto Vallarta	prestación indebida del servicio público y violaciones de los derechos ambientales, de la niñez, la salud y vivienda digna.	Aceptada parcial
12/08	Director de Seguridad Pública de Guadalajara y director de Asuntos Internos del municipio de Guadalajara	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica.	Aceptada total
13/08	Presidente municipal de Puerto Vallarta y procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la libertad	Aceptada parcial
14/08	Gobernador constitucional del estado de Jalisco.	ejercicio indebido de la función pública y discriminación.	No fue aceptada
15/08	Presidente municipal de Guadalajara y director de Seguridad Pública de Guadalajara	violación a la integridad física y a la legalidad	Aceptada total
16/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco y la titular de la Contraloría del Estado.	violación del derecho a la vida	Aceptada parcial
17/08	Procurador general de Justicia del Estado.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), y a la legalidad y seguridad jurídica	Aceptada parcial
18/08	Procurador general de Justicia del Estado.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), a la legalidad y seguridad jurídica	Aceptada parcial
19/08	Secretario de Salud y director del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco.	violación del derecho a la protección de la salud (negligencia médica).	Aceptada parcial
20/08	Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado.	violación de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal, a la propiedad, así como a la legalidad y seguridad jurídica	Aceptada total
21/08	Director general del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.	violación del derecho a la vida y negativa de atención médica.	Aceptada parcial
22/08	Procurador general de Justicia del Estado y director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.	violación del derecho a la vida y a la protección de la salud.	Aceptada parcial
23/08	Director de Servicios Médicos de Guadalajara.	violación de los derechos a la protección de la salud, a la igualdad y al trato digno	Aceptada parcial
24/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), así como a la legalidad y seguridad jurídica.	Aceptada parcial

25/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco y director del Reclusorio Preventivo de Guadalajara.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, a la libertad, legalidad y seguridad jurídica	Aceptada parcial
26/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, a la libertad, legalidad y seguridad jurídica.	Aceptada parcial
27/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), a la legalidad y seguridad jurídica.	Aceptada parcial
28/08	Presidente municipal de Tonalá y director del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar.	violación del derecho a la integridad y seguridad personal.	Aceptada total
29/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, a la libertad, legalidad y seguridad jurídica.	Aceptada parcial
30/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco.	violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, a la libertad, legalidad y seguridad jurídica.	Trámite
31/08	Presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y procurador general de Justicia del Estado.	violación del derecho de los reclusos o internos.	Aceptada parcial
32/08	Gobernador constitucional del estado (presidente de la Junta de Gobierno del Hospital Civil de Guadalajara), y director general del Hospital Civil de Guadalajara	violación del derecho a la protección de la salud (negligencia médica) y a la vida	Aceptada total
33/08	Presidente municipal de Zapopan, en su carácter de titular de la Junta de Gobierno del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, y procurador general de Justicia del Estado	violación del derecho a la protección de la salud y a la vida	Aceptada total
34/08	Procurador general de Justicia del Estado de Jalisco	violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, y negativa de asistencia a víctimas de delito.	Trámite

Dentro de las violaciones de derechos humanos más señaladas en las recomendaciones, se contempla: la falta de legalidad en 22 señalamientos; la falta a la seguridad jurídica con 19 señalamientos; el derecho a la integridad y seguridad personal en 12 señalamientos; el derecho a la vida en 9 señalamientos, al igual que con el derecho a la libertad; la protección a la salud con 8 señalamientos, y la tortura en 6 señalamientos. Otras violaciones perpetuadas y contempladas en las recomendaciones tendría de 1 a 3 señalamientos.

Si bien el Ombudsman destaca que gracias a las recomendaciones, en el Ayuntamiento de Guadalajara se abrió la puerta a la reparación del daño, al igual que en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado (SSPPRS), y en otra violación ocurrida en el Hospital Civil, se aprecia también que algunas recomendaciones aceptadas, no fueron atendidas o se condicionó su cumplimiento. Además y como mención aparte, la CEDHJ afirma que en relación a la Procuraduría y particularmente en las recomendaciones por tortura existe una “constante negativa a reparar el daño así como a investigar la probable existencia del delito”; “se niega sistemáticamente a iniciar averiguaciones previas con el argumento de que resultan insuficientes las pruebas”. Lo anterior por desgracia, no es novedad, más bien ha sido la constante en Jalisco y muestra la ausencia de fuerza moral del Ombudsman para evitar que este círculo de impunidad continúe.

Comentarios Finales

“Simular”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española significa: *representar algo, fingiendo lo que no es*.

Lo que sí es el trabajo del Ombudsman de Jalisco, es su subejercicio presupuestal, su inactividad en la protección de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su falta de eficacia en el trámite y resolución de las inconformidades, su incremento en las recomendaciones que carecen de una aceptación total, la utilización de los derechos humanos como una agenda mediática, sin rostro y sin personas a quien proteger, sin compromiso y dejando la carga para comprobar las violaciones de derechos humanos, a las víctimas de los mismos.

Lo que representa, significa la existencia de una institución que proporcione una mínima protección a los más necesitados de la sociedad, a los que no tienen voz o a los que teniéndola, cada vez son menos escuchados.

Notas Aclaratorias

- 1 Discurso del Presidente de la CEDHJ, durante la presentación del segundo informe anual de actividades, el 26 de febrero del 2009. También en el 2do Informe anual CEDHJ 2008, página 205.
- 2 Las cifras son resultado de la sumatoria de los datos aparecidos como “Quejas archivadas por diversos motivos” que aparecen en las tablas llamadas “Quejas dadas de baja”, en todos los números de las Gacetas de la CEDHJ (2003 – 2007).
- 3 Estos datos fueron fielmente tomados de las Gacetas de 2006, sin embargo debe mencionarse que puede existir un error en ellos puesto que repiten las mismas cifras en las Gacetas 45 y 46.
- 4 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Informe Anual 2007. (Guadalajara, CEDHJ. 2007). P. 105.
- 5 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Segundo Informe Anual 2008. (Guadalajara, CEDHJ. 2008). P. 205.
- 6 Gaceta 6 de diciembre, CEDHJ. Núm. 52, año XV, abril-junio de 2008. Página 130.
7. El Cuadro 2, está incompleto dado que en la Gaceta 52 no se proporciona toda la información sobre los rubros referentes a las quejas que fueron dadas de baja, asimismo porque a la fecha no han publicado las gacetas 53 y 54.
- 8 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Informe Anual 2007. (Guadalajara, CEDHJ. 2007). P. 12.
- 9 Datos tomados en Julio del 2009 de las estadísticas que presenta la CEDHJ, en su página electrónica: <http://www.cedhj.org.mx/estadisticas/2008/quejas2008.pdf>
- 10 Conductas violatorias principalmente protagonizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara.
- 11 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Segundo Informe Anual 2008. (Guadalajara, CEDHJ. 2008). P. 205.
- 12 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Informe Anual 2007. (Guadalajara, CEDHJ. 2007). P. 60.
- 13 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Segundo Informe Anual 2008. (Guadalajara, CEDHJ. 2008). P. 135.

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO

María del Mar Estrada Rebull y Margarita Sierra
Plataforma 39

Antecedentes

En la Constitución de este país, se declara su condición democrática: “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”¹. Todas las riquezas que puedan brotar de México son para enriquecer a los mexicanos. La determinación de nuestro destino como sociedad mexicana nos pertenece a todos. México es un lugar en donde, si bien hay gobierno, es sólo para administrar el poder público; del poder que lleva consigo cualquier persona que lo habite. Por lo mismo, “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”².

Muchos ciudadanos jaliscienses han levantado la vista de la vida privada para constatar que aquello que dibuja el paisaje de lo público – la gestión de la riqueza, la infraestructura, el manejo ambiental, la configuración del espacio, las políticas administrativas, la vida educativa y cultural - no es resultado del azar, sino de *decisiones*. Han recordado que esas decisiones deben tomarse *para beneficio* del pueblo, según su voluntad, puesto que en él *reside* la soberanía y de él *dimana* el poder público. Los ciudadanos que han tomado esto en serio, han pasado a la acción.

En Jalisco, esta acción que se refiere a asuntos esenciales para la vida pública o el interés social del Estado, está regulada en una Ley de Participación Ciudadana, de 1998. En ella, se considera que son “reglamentos, decretos o decisiones administrativas trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, aquellos que afecten directamente cuando menos a la mitad más uno de los municipios o bien a las dos terceras partes de la población del Estado o del Municipio según sea el caso” (Art. 1), y que se refieren a la siguientes materias: “I. Medio ambiente, ecología y agua; II. Salud, asistencia social y beneficencia privada; III. Derechos humanos, seguridad pública, comunicaciones y vialidad y transporte; IV. Educación, cultura, turismo y deportes; V. Electoral; VI. Responsabilidades de los servidores públicos; VII. Civil; y VIII. Penal.” (Art. 2).

Dicha Ley de Participación Ciudadana contempla los instrumentos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular. El **Referéndum** puede ser solicitado por autoridades y ciudadanos para derogar reglamentos y decretos emanados del Gobernador, así como leyes expedidas, reformadas o adicionadas por el Congreso del Estado, que sean trascendentales para el orden público o interés social de Jalisco.

El **Plebiscito** puede ser solicitado por el Gobernador para someter a consulta los actos del Congreso, y viceversa. En cuanto a los ciudadanos, pueden solicitar plebiscitos referentes a actos o disposiciones administrativas municipales trascendentales para el orden público y el interés social. Por último, la **Iniciativa Popular** otorga a los ciudadanos la facultad de presentar ante el Congreso “los proyectos de ley o código, o de reforma a éstos, para que sea estudiada, analizada, modificada y en su caso aprobada.” (Art. 44). Entonces, la Iniciativa Popular puede servir para “reformular, modificar, derogar, abrogar o crear una Ley o Código” (art. 53).

Para que los ciudadanos puedan solicitar que se sometan a *referendum* derogatorio los reglamentos y decretos emanados del Gobernador, o las leyes expedidas por el Congreso, se necesita a 2.5% de los electores de la entidad. Para que puedan solicitar que se sometan a referéndum derogatorio las reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado, se necesita “que radiquen en cuando menos la mitad más uno de los municipios del Estado, de manera proporcional a su número de electores” (art. 6).

En el caso del plebiscito, podrán solicitarlo: “Los ciudadanos, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acuerdo de cabildo o antes de la realización del acto, que residan en el municipio y representen cuando menos a un cinco por ciento de los electores en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; y en los que excedan de esa cifra, bastará que lo solicite un tres por ciento de los electores.” (Art. 12, fracción. II).

Tanto para el plebiscito como para el referéndum, se requiere que los ciudadanos solicitantes entreguen cuando menos los siguientes datos, por columnas: a) Nombre completo; b) Número de folio de la credencial para votar con fotografía; c) Clave de elector; d) Sección electoral a la que pertenecen, y e). Firma (art. 14).

Para la iniciativa popular, se requiere que los solicitantes sean: al menos el 0.5% del total de los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado de Jalisco (art. 55, fracción I).

Estos tres instrumentos de participación ciudadana suponen un grado muy elevado de organización, consenso, asesoría técnica, y acompañamiento legal. La aplicabilidad de estos mecanismos previstos por la ley es muy baja debido a su complejidad y al enorme número de firmas requeridas para cada instrumento; hasta hoy solo conocemos los siguientes casos en que estos mecanismos han sido usados:

El grupo promotor de Voces Unidas, inaugura la ley de Participación Ciudadana, al generar un proceso participativo que diera legitimidad a la Iniciativa de Ley contra la Violencia intrafamiliar. Esta expresión ciudadana organizada presentó ante el Congreso del Estado, una iniciativa de Ley (la primera en México en su tipo), que recabó más de 40 mil firmas en 114 municipios. Se logró que el

Congreso del Estado adicionara un apartado en el Código de Asistencia Social que hizo posible el nacimiento del *Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI)*, como órgano rector de las políticas públicas en la materia.

Finalmente la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, lanzó una iniciativa de ley aprobada el 22 de noviembre del 2003 por el pleno del Congreso y publicada el 18 de diciembre en el Diario Oficial. El reglamento de la ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el estado de Jalisco se expidió el 6 de diciembre de 2004.

La segunda iniciativa popular en Jalisco, la lleva a cabo el grupo Mexicanos por la Vida. Esta iniciativa contra el aborto, logra recabar 54 000 firmas. El grupo impulsa una reforma constitucional que protege la vida *desde la concepción y hasta la muerte natural*, misma que entra en vigor a partir del 4 de julio 2009. Esta reforma criminaliza a las mujeres y viola su derecho a la salud.

El primer Referéndum en el estado fue promovido por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en contra del incremento a la tarifa del transporte público urbano. Los estudiantes lograron que 147 mil 573 ciudadanos firmaran el pliego petitorio.

Por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del entonces Instituto Electoral del Estado (IEEJ) fue rechazada la solicitud de referéndum derogatorio de la tarifa del transporte que interpuso la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), al declararla improcedente en la revisión de firmas que hiciera el Instituto Federal Electoral (IFE).

Cabe resaltar que las autoridades también tienen la posibilidad de solicitar referéndums y plebiscitos al Consejo Electoral. ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Alguna vez han aprovechado estos mecanismos que les ofrece la ley para conocer la voluntad de la gente, para orientarse en su trabajo, para poder cumplir su obligación de administrar lo público según los designios de la ciudadanía? Nunca.

Un poder público que obedece a intereses privados y no dimana del pueblo en general

Para los ciudadanos conscientes de que la soberanía reside en ellos, sería totalmente inaceptable pensar que los recursos previstos por la Ley de Participación Ciudadana fueran las únicas vías posibles, además de las elecciones, para ejercer el poder. A cada momento, y sobre las materias trascendentales más diversas, somos testigos de la generación de políticas públicas con las que disintimos; sabemos que en la mayoría de los casos benefician a intereses particulares y no a la sociedad en general; disintimos porque en nuestra experiencia, son políticas públicas sin fundamento legal y que en ocasiones violan la legalidad.

Muchas veces, quienes reaccionan contra esto, son los ciudadanos que no están aglutinados en organizaciones masivas, ni tienen alianzas con grupos de poder. No tienen acceso a redes de militancia

como las de los partidos que pudieran ayudar a conseguir adhesión masiva. No se caracterizan tampoco por tener contacto con sindicatos, funcionarios ni otros poderosos que pudieran convencer o presionar a las autoridades (como a los diputados, que supuestamente nos representan) a realizar las solicitudes correspondientes. Quienes han cobrado conciencia de la contradicción entre lo enunciado por el artículo 39 y la realidad vivida en el Estado, y han decidido hacer algo al respecto, no son todavía una mayoría, ni han engendrado un poder masivo. Estos ciudadanos recurren entonces a la protesta. Salir a las calles, reunirse, demandar... todo esto también es parte de un derecho constitucional, consagrado en el artículo 9:

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Los ciudadanos y las ciudadanas hemos recurrido a la movilización pacífica tomando las calles con el fin de hacer visibles nuestras demandas: el problema de salud, el aumento de la pobreza, el desempleo creciente, la baja calidad de la educación, las violaciones al estado laico, el dispendio irracional del Ejecutivo, la elección ilegal del Presidente del ITEI, los opacos manejos de la Villa Panamericana, el Puente Atirantado, la libertad del Alcalde de Tonalá, la intervención en el parque de los Colomos y el Bosque del Nixticuil, las pensiones del Hospital Civil, el Código urbano, la violación de los usos de suelo, el rechazo al Macrobús, etcétera.

Éstas son algunas de las legítimas demandas de los y las jaliscienses. Teóricamente, el gobierno, en su afán de representarnos, debería estar ávido de estas manifestaciones, que son signos de los temas que preocupan a la ciudadanía. El gobierno debería estar atento a qué decisiones públicas afectan y molestan a quiénes; por qué el público encuentra motivos para disentir con los proyectos; en dónde existen situaciones conflictivas; en dónde vale la pena someter las cosas a debate, a consulta, a la opinión de los expertos; cuándo es necesario aclarar y publicar cuáles son los intereses que están en juego en determinado proyecto o decisión. Sin las manifestaciones sociales, un gobierno bien intencionado está condenado a administrar el poder a tientas, y está frustrado porque la esencia de la democracia queda sin realizarse. Un gobierno con pretensiones de trabajar para el pueblo, no podría suponer que sólo porque una pequeña parte del padrón lo favoreció con el voto y lo llevó al poder, habría dado indicación suficiente de su voluntad para todo el periodo de administración. Sin embargo, en nuestro país y nuestro estado, la política dista de funcionar así. El poder público tiene su propia agenda, obedece a intereses privados, intereses de grupos y de clases, y no dimana del pueblo en general. Por eso las autoridades no solicitan al Consejo Electoral plebiscitos ni referéndums. Esto, por sí mismo, debe provocarnos la certeza y la indignación de que estamos en un mundo al revés.

Una autoridad que criminaliza la protesta

Pero la cosa no se detiene ahí; no sólo no se consulta a la ciudadanía, no sólo se la ignora, sino que se le reprime; se usa la fuerza pública contra sus movilizaciones, se criminaliza la protesta. Este año fuimos testigos, por la vía de los hechos, que la lógica del poder democrático está revertida. La autoridad hizo explícita su visión, a través de la editorial y del reportaje que pidió al diario El Informador, y que se publicó bajo la apariencia de periodismo. Esto dice en síntesis el editorial de El Informador el 4 de septiembre de 2009:

Resulta especialmente grave que en la mayoría de protestas de este tipo siempre hay gente “profesional” de las manifestaciones, agitadores que lideran a grupos y que hacen de esta actividad su *modus vivendi*. Se cobijan bajo banderas partidistas u organizaciones de diverso tipo, a cambio de favores que van atesorando. Incluso los hay que de ahí saltan a candidaturas.

Si la autoridad conoce el perfil de estos “líderes”, a quienes se les ve en todo tipo de manifestación; si incluso cuenta con un padrón de ellos, es inexplicable que no proceda, haciendo uso de sus facultades legales, para ponerles un freno y evitar así que continúen dañando a la sociedad. Simplemente, la aplicación estricta de la ley³.

En el reportaje se ficha a ciudadanos que protestan, y se incita a que, si la autoridad ya sabe quiénes son, procedan contra ellos. Esto, es un atentado contra la libertad, contra el derecho expresado en el artículo 9; es una incitación a la represión y a la violencia; se apela a un Estado represor de estilo dictatorial.

El gobierno del Estado, hizo explícito entonces, lo que casi todos sabemos por la experiencia: la soberanía no reside en el pueblo, el poder público no dimana de él ni se instituye para beneficio de éste. Se le mandó a la ciudadanía, por escrito, el mensaje que se le manda en cada ámbito de lo público: la autoridad no quiere que los ciudadanos interfieran con sus acciones ni con sus intereses. Es una amenaza.

Es claro entonces, que la situación que enfrentan los activistas, defensores y manifestantes jaliscienses, difiere perversamente de la ideal, ya que lo primero que enfrentan, es la dificultad para incidir como sociedad civil organizada en los temas trascendentales, a través de los mecanismos de la Ley de Participación. Que estos mecanismos sean inoperantes, constituye en sí mismo una transgresión al derecho a la participación. En un régimen “democrático” en el que no está previsto que los ciudadanos efectivamente tomen parte en las decisiones públicas, ¿en realidad hay voluntad para que se verifique este derecho? Confirmamos que no, puesto que, cuando los jaliscienses han ido más allá de los mecanismos formales, cuando han invertido su tiempo libre y su trabajo para idear métodos alternativos para transmitir sus mensajes, haciendo uso del artículo 9°; las autoridades, lejos

de interesarse en recuperar la visión de la ciudadanía organizada, han ignorado, engañado, reprimido, difamado y amenazado.

Este estado de cosas puede continuar indefinidamente mientras el gobierno tenga la prerrogativa de legislar y gestionar a discreción, sin que nadie – salvo los mismos activistas y manifestantes – lo reclame. Más allá de las pequeñas victorias que los movimientos jaliscienses puedan obtener cuando las condiciones legales y políticas los favorezcan, no habrá reestructuraciones importantes en el poder mientras la mayoría de los ciudadanos no las asumamos como impostergables. Para que el derecho a participar se evidencie, quienes se activan requieren, en primer lugar, de la simpatía de más ciudadanos. Necesitan que más personas compartan la convicción de ser derechohabientes en la determinación de lo público. Necesitan, por lo tanto, que no se los perciba como “revoltosos”, sino como ciudadanos en el pleno ejercicio de su derecho; no sólo legítimos sino necesarios – en el mejor de los casos, que el activismo se generalice entre la población. Para que se ejerza el derecho a la participación, debe haber una ciudadanía suficiente que lo reclame.

Una propuesta de participación ciudadana

Con esto en mente, algunos de los grupos ciudadanos jaliscienses – Plataforma 39, el Parlamento de Colonias, el Congreso Ciudadano de Jalisco, el Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y del Estado Laico, el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo y otras organizaciones, – pensamos en la necesidad de organizar un acto público, para explicar que, lejos de ser agitadores profesionales, revoltosos sin causa, o potenciales amenazas para la armonía social, los manifestantes y activistas tenemos motivos cívicos para nuestro actuar. Así, el pasado 20 de septiembre de 2009, alrededor del kiosco del Parque Morelos – emblemático de conflictos actuales –, se concretó el Segundo Foro contra la criminalización de la protesta ciudadana.

El mensaje a proyectarse era claro. Como primera premisa, se apeló a la soberanía del pueblo – se colocaron carteles con el elocuente artículo 39. Como segunda proposición del razonamiento, se blandió el artículo 9, sobre el derecho a protestar. En este marco, quienes habían sido señalados por El Informador, y muchos otros ciudadanos participativos, declararon que no son agitadores, acarreados ni profesionales de la protesta; que no persiguen oscuros intereses individuales. Que son sólo jaliscienses con una conciencia cívica. Por obvio que sea resulte esto, ante las difamaciones, las amenazas y la falta de comprensión por parte de la ciudadanía en general, los manifestantes y activistas consideraron necesario explicar que las protestas no son un problema en sí, sino la respuesta a la ineficacia de las instituciones para resolver las necesidades y problemas públicos.

El formato para abordar estos temas fue la instalación de mesas de diálogo alrededor del kiosco central del parque, en donde participaban tanto los manifestantes y activistas convocados, como cualquiera que quisiera unirse a la discusión. Se compartieron diversas experiencias y se confrontaron

posturas diferentes, por lo que el ejercicio resultó en aprendizajes interesantes sobre el derecho a la participación, que fueron más allá de las premisas iniciales propuestas para el evento.

Las conclusiones

Un primer asunto relevante fue la coincidencia en que el punto de arranque de la participación ciudadana es, por lo general, alguna decisión, política u obra pública percibida como agravio. Se desata una indignación cuando se constata que las acciones de la autoridad, en lugar de ser en beneficio de la gente, van en su perjuicio. Los ciudadanos se activan cuando creen que es su legítimo papel intervenir en semejantes situaciones. Se constató que el tema de la movilidad en Guadalajara, actualmente, es uno de los que más suscitan estos sentimientos.

El tema del Macrobús, en específico, fue muy ilustrativo, dado que en torno a él se presentaron posturas encontradas. Tras acalorados argumentos a favor y en contra, se llegó a la conclusión de que, más allá de la controversia, quienes sostenían ambas posturas tenían algo en común: confrontaban razonamientos y datos. Esto es lo que se exigía al gobierno; tomar en cuenta los argumentos e informaciones que preparan los ciudadanos, consultarlos, pedir la colaboración de expertos, explicitar como un elemento más de decisión los intereses que están en juego, y basar las decisiones en verdaderos debates públicos que tomen en cuenta todo esto. Más que las decisiones concretas, es la opacidad y la arbitrariedad del gobierno las que ofenden a la ciudadanía.

En las mesas de discusión, se compartió también el sentimiento de impotencia ante lo infructífero que resulta apostarle a la organización o al agotamiento de recursos en las instancias legales, para solicitar que se atiendan reclamos, peticiones y propuestas. Se habló del sentimiento de ser burlados cuando las autoridades no responden y proceden según su voluntad, sin consecuencias. Esto orilla a pensar en acciones que salen de lo previsto – manifestaciones u otras más creativas o más drásticas – con tal de tener alguna incidencia en los temas trascendentales.

Los asistentes al foro resaltaron un flanco esencial de la participación ciudadana: la organización, la alianza con diversos grupos, la generación de ‘contrainformación’ y su socialización. Se mostraron convencidos de que, para que la soberanía del pueblo sea una realidad, se requiere expandir y fomentar entre la gente el hábito de considerar los asuntos públicos desde una perspectiva estructural, más allá de la realidad particular de cada uno; y la consciencia de sentir el derecho sobre estos asuntos, más allá de las vidas privadas. En el mismo tenor, los participantes de las mesas concordaron en la necesidad de crear espacios en que los diversos movimientos discutan, compartan experiencias y estrategias, y sumen fuerzas para apoyarse y defenderse unos a otros, allende las diferencias en temas y posturas. Así, el Segundo Foro contra la criminalización de la protesta condensó, a través del diálogo entre activistas y manifestantes, algunos de los aspectos significativos del actual panorama de la participación ciudadana en Jalisco.

Quienes protestan y participan en este contexto, lo hacen con la conciencia de que el poder público sirve a fines muy diferentes a los del beneficio del pueblo. Consideran como un síntoma de esto el que muchas de las decisiones trascendentales en el estado se tomen según intereses de grupos y particulares; y por tanto, de manera opaca, sin supeditarlas a la consulta, el debate y la argumentación de diversos actores. Además de percibir esto como inaceptable, los manifestantes y activistas han pasado a considerar que es su prerrogativa tomar cartas en el asunto; intentar tomar las riendas de la cosa pública. Ante el panorama descrito, no resulta sorprendente que los mecanismos de participación previstos por la ley sean a todas luces insuficientes; que no estén diseñados para que el pueblo decida; que las autoridades no soliciten plebiscitos y referéndums para definir el rumbo de sus administraciones, y que las figuras de participación sean de tan difícil acceso cuando los ciudadanos tienen la iniciativa de solicitarlas. No resulta incongruente tampoco que, cuando los ciudadanos recurren a otras formas de participación, como la protesta y la manifestación de propuestas y demandas; lejos de ser tomados en cuenta, sean ignorados, burlados, reprimidos, e incluso, como fuimos testigos este año, difamados y amenazados. El derecho a la participación ciudadana – y a una participación con *incidencia* – es precario hoy en nuestro estado.

Sin embargo, este régimen de cosas tiene como condición de supervivencia el que se lo permita. Quienes se han activado, no sólo perciben que el poder no es ejercido como debería, sino que se han convencido de que a ellos mismos corresponde vigilar y exigir a la autoridad, y apropiarse de lo público; saben también, que mientras sean grupos minoritarios, mientras los sectores más amplios de la población los vean con indiferencia o reprobación, mientras desconozcan sus luchas y sus motivos, hay pocas probabilidades de que el engranaje de poder pueda reestructurarse a favor de la sociedad y de su autodeterminación. En cambio, por más enquistados que estén los poderes fácticos y pervertido el sistema político; por más que ahora parezca que esta condición es fatídica e inamovible, no podrá sostenerse si se logra socializar una visión diferente. Por eso, los activistas y manifestantes hemos concluido que, ante la falta de respuesta, la burla, la represión y el amedrentamiento; es esencial no perder de vista que la participación ciudadana no es sólo un derecho que debería estar garantizado, sino el hábito que puede llevarnos a que el poder lo ejerza el pueblo para su propio beneficio. Los avances en el ejercicio y la expansión de este derecho, que pretende ser hábito, entonces, son pasos certeros, y no fácilmente reversibles por la adversidad.

Notas aclaratorias

1. Art. 39.
2. Art. 39.
3. El Informador

LA CIUDAD PARA UNOS CUANTOS. UNA MIRADA AL ESTADO DEL DERECHO A LA MOVILIDAD Y AL ESPACIO PÚBLICO EN GUADALAJARA, COMO ELEMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO AL DESARROLLO

*Mercedes Paloma Cruz, María Elena de la Torre Escoto,
Jaime Meade Altamirano y Étienne von Bertrab
Ciudad para Todos*

La movilidad y el espacio público como expresión del derecho a la ciudad

La movilidad y el espacio público en el marco del derecho humano al desarrollo en contextos urbanos son considerados elementos clave para recuperar la dimensión social de las ciudades, contribuir a mejorar la calidad de vida bajo modelos de inclusión y sustentabilidad, y para fortalecer la construcción de ciudadanía a través del respeto y reivindicación de lo público.

El modelo de expansión y transformación urbana que ha seguido el Estado de Jalisco, ha generado la desigualdad en el destino del territorio al concentrar las grandes inversiones en infraestructura y desarrollo en la capital del Estado principalmente, mientras que otras regiones aun no cuentan con la infraestructura básica.

Sin embargo este modelo de desequilibrio también puede observarse en la estructura del Área Metropolitana de Guadalajara. Al dar prioridad al transporte privado en las ciudades, tanto los recursos públicos como el espacio público han dejado de destinarse al dominio común. Los resultados de este modelo generan una ciudad fragmentada, privatizada y desigual en sus niveles de urbanización y accesibilidad lo cual ha generado un complejo patrón de exclusión que se vuelve cada vez más evidente en distintos ámbitos y diferentes colectivos sociales (Rojas, 2007).

La primacía del automóvil, expresada tanto en los recursos asignados como en el diseño de la infraestructura, ha generado la banalización y deterioro del espacio público. La inseguridad y la degradación de este espacio afectan principalmente a peatones y ciclistas, así como a los usuarios del transporte público, pero sobre todo se discrimina a las personas que padecen alguna discapacidad, a personas enfermas, o a mujeres que acompañan a niños pequeños.

Mientras las acciones públicas predominantes sigan destinándose a favorecer sólo al 27.3% de los viajes en vehículo privado¹ sobre el resto de los modos de transporte y no existan políticas que garanticen la seguridad real del resto de actores de la vía pública, se están transgrediendo derechos fundamentales como el derecho a la movilidad, a la ciudad y a la vida que tenemos todos los ciudadanos (Montezuma, 2006).

En el marco del Derecho a la Ciudad establecido en la “Carta Mundial por el derecho a la ciudad”, fruto de foros sociales mundiales (2004-2005), se reconocen los derechos colectivos de las personas que viven en las ciudades desde una perspectiva de la justicia y contra la discriminación. El Derecho a la Ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Asimismo, se definen los principios que garantizarán dichos derechos como son la gestión democrática de la ciudad, la función social de la ciudad y de la propiedad, el ejercicio pleno de la ciudadanía, la igualdad entendida como la no discriminación, así como la protección especial a las personas y los grupos vulnerables.

Como forma de ejercer su función social, la ciudad debe realizar proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto dentro de criterios de equidad de distribución y de respeto a la cultura, así como garantizar la sustentabilidad ecológica. Para ello, los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental.

Desde esta perspectiva, la movilidad urbana y el espacio público son parte del derecho al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad y como tales las ciudades deberán garantizar la equidad, la seguridad y la sustentabilidad en su diseño y su aprovechamiento colectivo.

La movilidad urbana es la suma de desplazamientos que requieren realizar las personas para acceder a los espacios de la ciudad o fuera de ella que les sean indispensables para su pleno desarrollo y satisfacción de necesidades, como tal, es considerada una cuestión esencial para su productividad. Asimismo deberá garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos a los bienes y servicios con un esfuerzo razonable, con la mayor seguridad y con el menor impacto posible hacia el medioambiente. De esta manera, la movilidad es un derecho humano que debe estar garantizado para todos indistintamente, cualquiera que sean sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad.

El espacio público es aquél cuya propiedad y uso son del dominio público, y su representación en la ciudad son símbolo del nivel de urbanidad y sentido comunitario que caracteriza a una sociedad determinada. Como lugares de encuentro permiten la interacción social y la coexistencia de la diversidad, indispensables para la gestión democrática de la ciudad. Además en este ámbito se produce la manifestación del ejercicio pleno de la ciudadanía y de la función social de la propiedad como garantes de una adecuada inversión del dinero público. De la misma manera, también son

lugares para la recreación, el ocio y el descanso como cualidades indispensables de la vida urbana. De esta manera, la estructura de la ciudad deberá considerar la construcción, renovación y gestión de estos espacios desde la participación como condición básica para la justicia urbana.

Si el principal espacio público en nuestra ciudad está representado en la calle, el modelo de desarrollo urbano que podría garantizar la dimensión social de la misma, y contribuir a mejorar la calidad de vida bajo modelos de inclusión y sustentabilidad, es aquel que esté articulado por espacios públicos incluyentes y seguros a través de modos de movilidad sustentables.

Derechos vulnerados. Estado del derecho a la movilidad y al espacio público en Guadalajara

Desde que el Estado abandonó la responsabilidad de planeación urbana y la cedió a particulares (actores del mercado inmobiliario y constructivo) el desarrollo de la ciudad ha dejado de tener como principio orientador el bien común. De manera simultánea -y siguiendo una tendencia histórica, intervenciones urbanas se han hecho al margen de los ciudadanos. Así, Guadalajara es una ciudad que se gestiona sin tomar en cuenta a sus habitantes, de manera que no debiera resultar sorpresivo el hecho de que sistemáticamente se violentara el derecho al ‘usufructo equitativo de la ciudad’ expuesto en la sección anterior. A continuación un recuento de hechos y actos de 2008 y 2009 que han reafirmado los patrones de fragmentación urbana, de segregación social y de uso inequitativo del espacio público en la ciudad –vulnerando los derechos a la movilidad y al espacio público, entre otros (como el del acceso a la información pública y el derecho a la participación ciudadana).² El balance se presenta en el marco de algunas cuestiones relevantes.

Uso del dinero público.

Mientras que la administración de Francisco Ramírez Acuña fue criticada por el excesivo gasto público en infraestructura vial –18 obras consumieron \$1,628 mdp (*Mural*, 17/03/07), la nueva administración a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) heredó ‘un paquete de obras urgentes’ (29 puentes, túneles y ampliaciones viales) que requeriría una inversión de \$1,983 mdp (*Mural*, 19/03/07). Efectivamente, a inicios de 2009 el gobernador anunció el arranque de obras en la ZMG (principalmente viales) por \$1,357 mdp. A pesar de utilizar una retórica a favor del peatón (y más recientemente a favor de la sustentabilidad urbana) el gobierno de Emilio González Márquez mantiene la primacía presupuestal hacia el ciudadano poseedor de automóvil. Esta política ha sido criticada no sólo por diversas agrupaciones civiles sino por parte de especialistas en materia de movilidad urbana y urbanismo, que por años han advertido que esa magnitud de recursos lograría cambios significativos para la mayoría de los habitantes si se destinara inteligentemente a proyectos de transporte público y en la movilidad no motorizada. Actualmente *Ciudad para Todos* encabeza la resistencia ante la imposición del controversial proyecto del “puente Matute Remus” (o puente atirantado), que implicará un gasto de alrededor de \$450 mdp. Detrás está la intención de conformar una autopista urbana que atraviese toda la ciudad, aunque el costoso puente (crecientemente señalado

como un capricho) sólo atendería parcialmente este objetivo. Además de apuntar en sentido contrario del necesario tránsito hacia una ciudad más sustentable e incluyente (a pesar del crecimiento en el parque vehicular, menos de la tercera parte de los desplazamientos se realizan en automóvil), la opacidad y la desinformación por parte del Gobierno del Estado han sido particularmente notables. En suma, el presupuesto de la SEDEUR fue incrementado 323% entre 2001 y 2006, a pesar de que la deuda estatal ha crecido significativamente.

Por otra parte la pobreza tanto en la planeación como en la ejecución de estas grandes obras pone en entredicho el respeto a los ciudadanos y en evidencia la nula rendición de cuentas por parte de autoridades. Un caso paradigmático es el Nodo Colón: la obra duró el doble de lo planeado mientras que costó 2.6 veces más de lo presupuestado, ascendiendo a \$425 mdp. Otro fue el paso deprimido del cruce de López Mateos con Avenida Las Rosas en 2006, que costó arriba de \$147 mdp y tuvo que sufrir serias y costosas modificaciones -estimadas en \$70 mdp, al constatar su propensión a inundarse (Público, edición de aniversario, septiembre 13 de 2009). El último responsable de esta obra y del gasto público adicional, quedó impune. De manera que no sólo la inversión en vialidades en Guadalajara está resultando un barril sin fondo que jamás alcanza a atender los congestionamientos, sino que implican un uso excesivo de recursos públicos usados de manera opaca y sin existir mecanismos de rendición de cuentas.

La predilección espacial hacia el automóvil y sus implicaciones

En doce años se triplicó el parque vehicular en la ZMG y hoy alcanza casi un millón seiscientos mil vehículos (Público, 13/09/09). Se estima que alrededor del 40% de la ciudad es destinada al tráfico y al estacionamiento de vehículos particulares. La promoción en la posesión y uso del automóvil por parte de las autoridades se traduce en una presión desmedida sobre el espacio público. Esto cuando la ciudad tiene ya un déficit importante tanto en áreas verdes por habitante, como en cantidad de árboles considerando las emisiones vertidas a la atmósfera. Un estudio reciente realizado por el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ) revela que el 95% del total de contaminantes vertidos por fuentes móviles proviene de vehículos particulares.

Las áreas verdes -en y alrededor de la ciudad- han sido víctimas notables de la irracionalidad en el desarrollo urbano. Tanto el Parque Metropolitano como Los Colomos, por mencionar algunos emblemáticos, han sufrido mermas considerables en los últimos años. Mientras, el Bosque La Primavera se degrada, el supuesto parque del Cerro del Cuatro se torna inviable y la especulación abraza la perversamente contaminada Barranca de Huentitán (Agustín del Castillo, en Público 13/09/09).

Ambos componentes -la especulación como guía del uso del territorio y la resignación a la ocupación territorial por parte de los automóviles de una minoría, han contribuido de manera significativa a la precarización del espacio público. De esta manera se atenta directamente contra el derecho al

esparcimiento y de disfrute del espacio público (que es de todos sólo en la teoría), mientras que atenta también a la calidad de vida de todos los habitantes de la ZMG.

Foto 1.



El emblemático 'viaducto' López Mateos, intento de autopista urbana para el Sur de la ciudad. Foto: Giorgio Viera

El Gobierno del Estado ha pretendido además fragmentar la ciudad con autopistas urbanas (o viaductos), que no sólo tienen impactos socio ambientales considerables, sino que carecen de visión de largo plazo, pues las vías rápidas se convierten en atractores de autos (es decir que tenderán a congestionarse). Sin embargo, el impacto en la movilidad comienza desde el corto plazo, pues las modificaciones de las vialidades para la agilización de los vehículos particulares se logra a costa de la movilidad local y del flujo del transporte masivo. De tal manera, cada intervención de esta naturaleza está minando las posibilidades de mejora en el sistema de transporte público.

Imposición de proyectos y simulación de participación ciudadana

Ante las políticas públicas adoptadas en materia de movilidad antes mencionadas, han surgido en los últimos años ciudadanos que se han unido en diferentes agrupaciones buscando los espacios para exponer la inconformidad ante el modelo de ciudad existente y manifestar sus necesidades reales y la mejor disposición para construir un modelo de ciudad diferente. Sin embargo, la legislación en materia de movilidad y planeación, más allá de su obsolescencia e ineficiencia para afrontar los

nuevos retos, no contempla la planeación participativa, los mecanismos para escuchar y sensibilizarse ante las necesidades reales de los ciudadanos, los mecanismos para gestionar adecuadamente y someter a procesos de consulta pública los proyectos que van definiendo el rumbo de nuestra ciudad y por ende, de nuestra forma de vivir. Tampoco lo contempla la voluntad de los políticos. Ante las exigencias para construir una mejor ciudad, las autoridades se hacen de oídos sordos y en lugar de transparentar los programas, planes y proyectos con el objeto de enriquecerlos con el dialogo, llevan a los ciudadanos a un camino tortuoso que incluye omisiones, rechazos, descalificaciones y en casos peores, represión. Limitan la participación ciudadana a su conveniencia, crean organismos como el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL), le asignan presupuesto y le otorgan atribuciones, sin embargo, cuando emite recomendaciones³ encaminadas a lograr un desarrollo más justo, son ignoradas. Apoyan espacios rígidos que en sí mismos son excluyentes, como el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que si bien desconocemos a fondo (pues no podemos participar en él), nos atrevemos a decir que más allá de nuestras sospechas de que se encuentra sumamente ‘alineado’ (lo preside el Gobernador), su participación es ineficiente y obsoleta, ya que no ha promovido que las intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos años en materia de movilidad procuren el bienestar social al que todos aspiramos y al que tenemos derecho.

El transporte colectivo como negocio

Mientras que el transporte colectivo en Guadalajara históricamente ha estado primordialmente en manos privadas, las administraciones panistas han tenido menos interés en atenderlo y demostrado menor capacidad para regular el interés de lucro de transportistas, todo ello en perjuicio del interés público (von Bertrab, 2009). La historia reciente de negociaciones y acuerdos entre gobierno y concesionarios del servicio da cuenta del atropello de quienes a diario hacen uso de este sistema básico de movilidad y de ciudadanos y organizaciones que se han opuesto a este manejo o señalado sus carencias. Desde inicios de 2008 y hasta la fecha, el Gobierno del Estado ha permitido la consolidación de un manejo perverso en el servicio de transporte público como negocio de unos cuantos y herramienta de negociación política y electoral a falta de una determinación política y en detrimento de lo que debería ser un servicio digno y eficiente que incide directamente en la calidad de vida de los habitantes. En marzo de 2008 la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara perfila una histórica oposición a una petición de incremento de la tarifa del transporte, recolectando 160 mil firmas como respaldo para llevar a cabo un Referéndum en contra del decreto.⁴ La solicitud de tal derecho constitucional llevó al Instituto Electoral del Estado de Jalisco a considerar y procesar tal petición y suspender el incremento hasta no analizar la legalidad del asunto. La discusión del tema llevó meses y continuó desde las manifestaciones de oposición hasta el infértil y simulado terreno legal. Una discusión (perdida en la semántica y vacíos legales) que en lo legal no considera una cuestión obvia de necesidad, coherencia y vigilancia de hacer cumplir derechos fundamentales de usuarios del transporte público, así como una nula consideración o posibilidad de discusión con la sociedad sobre el tema. Este año 2009, nuevamente el Gobierno del Estado cede

ante la presión de empresarios y subrogatarios controlados en su mayoría por el ‘pulpo camionero’, para ‘acordar’ un subsidio a los transportistas en sustitución del incremento a la tarifa, que sólo se contendría unos meses durante el periodo electoral, simulando estar del lado de la ciudadanía al condicionar el subsidio y el incremento al cumplimiento de ciertas mejoras de seguridad y eficiencia en el servicio en beneficio de los usuarios del transporte. Mejoras tales como: la implementación tarjetas de prepago, información y manejo digno en ascenso y descenso de pasajeros, seguridad y accesibilidad para discapacitados, y reducción considerable en la incidencia de accidentes mortales ocasionados por el transporte público, ya eran obligatorias y previstas desde antes en el reglamento de vialidad y trasporte, sin embargo, no se han cumplido en lo más mínimo.

Derecho a la vida en la movilidad urbana

La sociedad tapatía parece resignarse ante la creciente hostilidad del entorno urbano. Sin duda quienes reciben el mayor impacto son los actores vulnerables de la vía pública: peatones y ciclistas, y particularmente niños, ancianos, y personas con alguna discapacidad física. Más grave aún, se experimenta una deshumanizante normalización de la pérdida de vidas humanas. Los números son alarmantes: la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVT) reporta que durante 2008 hubo 580 peatones lesionados por atropellamiento, de los cuales murieron 114 (un promedio de más de dos decesos por semana). Se advierte, sin embargo, que mientras los accidentes por causa del transporte colectivo son puntualmente registrados, los decesos por automóvil particular están sub-contabilizados. En el mismo año perdieron la vida decenas de ciclistas en la ZMG. A mediados de 2009 colectivos ciclistas comenzaron a señalar estos hechos con ‘bicis blancas’ y el seguimiento más profundo los llevó a enfrentarse con una aterradora realidad: 8 ciclistas muertos en tan sólo 8 semanas.⁵ Estas estadísticas ni siquiera reciben atención pública. Autoridades como la SVT suelen ignorarlas o referirse a los sucesos como ‘accidentes’ (cuando se parecen más a homicidios) en donde la retórica suele ir en el sentido de culpar al peatón o al ciclista ‘por imprudente’. Las autoridades municipales tampoco se estremecen, aún cuando tienen una clara responsabilidad en las condiciones que conducen al accidente. Tal es el caso de un ciclista mayor de edad que falleció en el tramo carretero de López Mateos mientras la circulación se daba en total oscuridad –no por falta de alumbrado sino por la falta de energía debido a un adeudo del Municipio de Zapopan con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (*Mural* en línea, septiembre 23 de 2009). De esta manera las autoridades muestran total indiferencia y en el peor de los casos exaltan su impunidad.

Foto 2



El Periférico sin banquetas convierte a los puentes peatonales en irrelevantes mientras que se arriesga cotidianamente la vida de miles de ciudadanos. Foto: Étienne von Bertrab

Criminalización de la protesta

Desde mediados de 2007 han surgido diversos colectivos ciudadanos que cuestionan la miopía gubernamental y que tratan de incidir tanto en la percepción de la ciudadanía del problema como en las políticas públicas en la materia -tal es el caso de organizaciones como *Ciudad para Todos* y *GDL en Bici*, entre otras. Su trabajo ha ido complementando el de ONGs establecidas como el CEJ y asociaciones de profesionales como el Colegio de Arquitectos. De hecho, a mediados de 2008 se conformó el Consejo Ciudadano para la Movilidad Sustentable (CCMS) que vigila la acción gubernamental y refuerza la importancia de la discusión pública de los proyectos así como de la visión de ciudad subyacente. Miembros de estos colectivos han sido hostigados por las autoridades (tal es el caso de miembros de *Ciudad para Todos* debido a su oposición al Viaducto López Mateos). Sin embargo, movilizaciones han ocurrido tanto por parte de colectivos organizados (de índole muy diversa) como de ciudadanos que se sienten agraviados por las imposición de intervenciones urbanas. Así, en los últimos años hemos visto vecinos del Periférico (y otros 'tramos carreteros') haciendo bloqueos para demandar atención a las necesidades peatonales o ciclistas, y vecinos movilizándose al advertir un impacto negativo en su calidad de vida. Mientras que todos los 'movilizados' (colectivos organizados o espontáneos) reciben la agresión que produce el hecho de ser ignorados por el Estado,

el Poder Ejecutivo ha incurrido en escalas mayores de violencia institucional llegando a la represión. Tal es el caso del tratamiento a las marchas convocadas por opositores a la Línea 2 del Macrobus en verano de 2009. Independientemente de si existieran o no intereses particulares detrás de algunas movilizaciones, protestar es un derecho (y reprimir es un delito). Las autoridades, de nueva cuenta, han resultado impunes.

Conclusiones

El caso de Guadalajara no es muy diferente al de otras ciudades jaliscienses, en donde se generan entornos urbanos para unos cuantos, mientras que el resto de la población es despreciada y un conjunto de derechos, constantemente vulnerados. La historia reciente es un ir y venir de acciones gubernamentales, reacciones por parte de organizaciones o ciudadanos afectados y nuevas reacciones por parte de las autoridades. Cuando son demasiados los intereses en juego el aparato estatal invierte cuantiosas sumas en campañas de socialización tendenciosas en la búsqueda del aval de sectores de la población. Esto en lugar de someter los proyectos al escrutinio público desde su origen y en lugar de ampliar los espacios de participación ciudadana para garantizar que las políticas públicas se orienten al bien común. Las prácticas autoritarias del reciente Gobierno del Estado, así como de autoridades municipales, tiene un costo social demasiado alto. En Jalisco se requieren puentes verdaderos entre sociedad y gobierno y ciertamente en nada se parecen a los que este último insiste en construir.⁶

Notas aclaratorias

1. De acuerdo al estudio realizado por el Gobierno del Estado de Jalisco en 2008.
2. Aunque se advierte que estos derechos son igualmente vulnerados en otras localidades del estado de Jalisco, este reporte se centra en el caso de la ciudad capital, dada su importancia y la disponibilidad de información para su análisis.
3. Recomendación respecto del diseño e implementación de un Plan Integral de Movilidad Urbana para la Zona Metropolitana de Guadalajara ZMG, dirigida al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y a los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, aprobada por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria celebrada el jueves 21 de febrero del 2008. Cabe mencionar que ésta ha sido una demanda concreta de Ciudad para Todos desde octubre de 2007.
4. El caso muestra la irrelevancia de haber sido pioneros en la implementación de figuras de democracia directa a través de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco.
5. Las también llamadas 'bicis fantasma' son amarradas cerca del lugar donde falleció el ciclista, rindiendo honor a la persona a la vez que se denuncia colectivamente la situación que permite que esto ocurra.
6. Aportación de Carlos Páez y de Jesús Carlos Soto.

Bibliografía

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. "Estudio de demanda multimodal de desplazamientos en la ZMG. Encuestas de origen y destino", Guadalajara, 2008.

MONTEZUMA, Ricardo. “El derecho a la vida en la movilidad urbana y el espacio público en América Latina: la necesidad de un reequilibrio entre los subsistemas motorizado y no motorizado”, [disponible en <http://www.ciudadhumana.org/index.html>], 2006.

ROJAS, Eduardo. *Gobernar las Metrópolis*. Banco Interamericano de Desarrollo, Nueva York, 2007.

VON BERTRAB, Étienne, “La movilidad urbana en el desarrollo de la ciudad de Guadalajara”, Enciclopedia de Época de Jalisco, Universidad de Guadalajara, 2009 (por publicarse).

LAS MUJERES EN JALISCO

Entre leyes antimujeres y autoridades que impiden su participación ciudadana.

*María Guadalupe Ramos Ponce
Agenda Feminista Jalisco*

Las mujeres en Jalisco, se encuentran sitiadas, perseguidas, y criminalizadas, por leyes que significan un grave retroceso histórico, no solo para la reivindicación de sus derechos, sino también, para el avance democrático de un Estado de Derecho.

La “defensa de la vida” desde la concepción hasta la muerte natural, aprobada en 16 estados de la República, incluyendo Jalisco, implica un grave retroceso a la libertad y a los derechos de las mujeres, así como una franca violación al estado laico.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 4, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos”, en marzo de 2009, el congreso del Estado reformó el artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Igualmente se aprobó reformar el artículo 228 del Código Penal para el Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 228. Se impondrán de cuatro meses a un año de prisión a la madre que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin, si concurrieren las siguientes circunstancias:

- I. Que no tenga mala fama;
- II. Que haya logrado ocultar su embarazo;

III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima; y

IV. Que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo.

Faltando una de las circunstancias anteriores se le duplicará la pena, pero si faltaren dos o más, se podrá triplicar. [...]

Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo [...] el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral; bastará que lo solicite y ratifique la responsable; lo anterior, siempre y cuando no se presente reincidencia de su parte.

El tratamiento referido en este precepto será provisto por las Instituciones de Salud del Estado y tendrán como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto provocado, así como el de reafirmar los valores humanos por la maternidad procurando el fortalecimiento de la familia.

Estas reformas implican violaciones graves a los derechos humanos de las y los jaliscienses, especialmente de las mujeres, toda vez que afectan los derechos de éstas a su vida, a su salud física, emocional, mental y reproductiva. Esta situación vulnera el principio de progresividad, base de los derechos humanos, que establece que los derechos pueden aumentarse, pero no disminuirse.

Por otra parte, dichas reformas se realizaron sin tomar en cuenta toda la argumentación jurídica que se debatió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la despenalización del aborto en las primeras doce semanas en el Distrito Federal. Este debate se realizó con base en el análisis de disposiciones jurídicas nacionales e internacionales contempladas en tratados sobre derechos humanos y con base a los fundamentos científicos correspondientes. Además, en un hecho inédito, la Suprema Corte propició la inclusión en el debate de diversas posturas jurídicas, religiosas, morales y científicas que fijaron en sus posturas los diversos actores y actrices que llevaron a la Corte sus posicionamientos del tema. Esto permitió que los ministros y ministras, pudiesen contar con elementos suficientes para emitir su resolución, lo que permitió que la Corte, declarara constitucional el ordenamiento jurídico que prevé la despenalización del aborto en las primeras doce semanas en el Distrito Federal.

Entre otras argumentaciones, los ministros sustentaron su resolución en las siguientes: El Estado debe proteger los derechos de reproducción, por lo que no deben considerarse como sinónimos *el derecho a la vida y la protección de la vida*; la Constitución mexicana considera la protección de las personas, es decir, de un sujeto determinado, de lo contrario “se llegaría al extremo de sostener que también la Constitución está protegiendo a una célula, porque es vida” (ministro Sergio Valls Hernández). Además, el Ministro hizo hincapié en la recomendación que se hace al Estado Mexicano como firmante de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las

mujeres, en la que se señala que el Estado “revise su legislación de modo que cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil de las mujeres al aborto”. Señala también que la protección que brinda a las mujeres la Constitución Mexicana comprende:

su derecho a la igualdad y a la no discriminación, el respeto a su dignidad humana y a sus derechos sexuales, de reproducción, de libre desarrollo, de decidir libremente el número de hijos que desea, por lo tanto, esa libertad de procreación es una obligación para el Estado de proporcionar los instrumentos que eviten que acuda a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su vida.

La ministra Olga Sánchez Cordero señaló que la despenalización del aborto ofrece la oportunidad para las mujeres de decidir sobre la no imposición de un embarazo, sin la criminalización de su interrupción, además del acceso a servicios de atención médica que protejan su vida y su salud, por ello, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señaló que es un contrasentido que la ley contemple a la mujer embarazada como alguien que puede cometer un delito al ejercer esos derechos, ya que lo que se penaliza son sus propias libertades originadas por su condición de mujer.

El ministro Juan Silva Meza consideró que atender únicamente los derechos del embrión, implica dejar de lado los derechos fundamentales de la mujer, y al respecto señaló que:

es deber del Estado de no intervenir en una decisión personal como lo es la planificación familiar, adquiriendo además el claro compromiso de dotar a la población de los medios suficientes e idóneos para ejercer la paternidad responsable. Penalizar el aborto no salvaguarda el proceso de gestación, puesto que es una realidad social que las mujeres que no quieren ser madres recurren a la práctica de interrupciones de embarazos clandestinos, con el consecuente detrimento de su salud e incluso con la posibilidad de perder sus vidas.

Consideró que con esto, se menoscaba la libertad de las mujeres y se “reafirma la discriminación por cuestiones de género”.

El ministro Fernando Franco González Salas señaló que era necesario revisar si “entre los bienes jurídicamente protegidos por nuestra Constitución que entran en colisión, debe prevalecer, para el caso, los derechos que protegen al producto de la concepción humana en las doce primeras semanas de gestación, o los que protegen la dignidad, igualdad, salud, intimidad y autodeterminación de la mujer para decidir sobre su propia maternidad”. Señaló además que la sanción penal equivale a establecer la obligación para la mujer de llevar el embarazo y convertirse en madre, lo que “establecería una carga desproporcionada frente a la falta cometida”. En este sentido, el ministro Genaro Góngora Pimentel señaló que la penalización del aborto genera “un manifiesto estado de desigualdad entre hombres y mujeres” y establece que “no pueden existir sanciones penales que deriven de diferencias biológicas”.

Por otra parte, fueron objeto de reflexión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las argumentaciones de juristas importantes como Luigi Ferrajoli, quién señala que:

Ninguna persona puede ser tratada como medio —aunque sea de procreación— para fines que no son suyos, sino sólo como fin en sí misma. Es por lo que hablamos de autodeterminación de la mujer en el tema de la maternidad, y por lo que la decisión de la maternidad refleja un derecho fundamental exclusivamente propio de las mujeres, porque al menos en este aspecto, la diferencia sexual justifica un derecho desigual. En efecto, el derecho a la maternidad voluntaria como autodeterminación de la mujer sobre el propio cuerpo, le pertenece de manera exclusiva, precisamente, porque en materia de gestación los hombres no son iguales a las mujeres, y es sólo desvalorizando a las mujeres como personas y reduciéndolas a instrumentos de procreación como se ha podido limitar su soberanía sobre el propio cuerpo¹

Estas son solo algunas de las argumentaciones jurídicas que se vertieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no fueron consideradas por los legisladores en el Estado de Jalisco al realizar las reformas a la Constitución y al código penal del Estado, lo cual a todas luces, evidencia las graves violaciones de derechos humanos de las y los jaliscienses.

Ante esta situación, la Agenda Feminista Jalisco, integrada por diversidad de mujeres con formaciones académicas y políticas distintas, todas con una trayectoria reconocida y con una formación importante como defensoras de los derechos de las mujeres; presentaron al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), solicitud para que interpusiera la acción de inconstitucionalidad correspondiente.

El Ombudsman de Jalisco, tiene la facultad que le otorga nuestra Carta Magna en su artículo 105 inciso g), para interponer acciones de inconstitucionalidad, como parte de su obligación expresa de salvaguardar los Derechos Humanos, en este caso, los derechos de las mujeres.

Sin embargo, el Sr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, decidió no asumir la defensa de los derechos humanos de las mujeres violentando con esto, su propia ley y los Principios de París que establecen que: “2. La institución nacional (de defensa de derechos humanos) dispondrá del mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito de competencia”.

De esta manera, el “Ombudsman” estatal, no asumió la defensa que le correspondía, lo que lo convirtió en cómplice de las violaciones; de esta manera atenta contra los derechos de las mujeres jaliscienses y contraviene así su mandato, porque:

- 1) Desconoce los derechos sexuales y reproductivos de la diversidad de mujeres y niega el principio de indivisibilidad e interdependencia a los derechos de las mujeres.

2) Desdeña que el aborto sea un problema de salud pública, el cual propicia la muerte de cientos de mujeres mexicanas y elude así su obligación de defenderlas.

El Ombudsman de Jalisco, también ignoró los compromisos internacionales signados por el Estado Mexicano, que reconocen los derechos humanos de la diversidad de mujeres, tales como:

a) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).², que en su artículo 3 menciona:

Los Estados Parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Además, menciona en el artículo 12: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

Asimismo, la Recomendación general 24, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer³ señala en su apartado 31 lo siguiente:

Los Estados Partes también deberían, en particular: Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.

b) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará),³ reconoce en el artículo 2 que la violencia puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, y especifica en su artículo 7 inciso a) que el Estado debe abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar para que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones, se comporten de conformidad con esta obligación.

c) Las observaciones finales a México, extendidas el 25 de agosto de 2006 por el Comité CEDAW (Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), mencionan que:

El Comité pide al Estado Parte (México) que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.

d) La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993) menciona que:

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

Además, la Conferencia de Viena señala que la violencia, en particular la derivada de prejuicios culturales, es incompatible con la dignidad y la valía de la persona humana y debe ser eliminada. Agrega que lo anterior puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y de cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social.

e) La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), en el Capítulo VII Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, Planificación de la familia, indica en sus bases de acción que el propósito de los programas de planificación de la familia es permitir a las parejas y las personas decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos y obtener la información y los medios necesarios para hacerlo, asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento de causa y tengan a su disposición una gama completa de métodos seguros y eficaces; lo anterior para cumplir con el objetivo de prevenir los embarazos no deseados; reducir la incidencia de los embarazos de alto riesgo, y la morbilidad y mortalidad.

Asimismo, El Cairo señala que los gobiernos deberán tomar medidas oportunas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, el cual en ningún caso debería promoverse como método de planificación de la familia, sin embargo, también menciona que deberá proporcionar en todos los casos de aborto un trato humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido a él.

f) En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing (1995), los Estados se comprometen a garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Asimismo, se hace un reconocimiento explícito y se reafirma el derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, pues es básico para la potenciación de su papel. Se menciona que los Estados están decididos a:

- 23. Garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y libertades;
- 29. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;
- 30. Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de la mujer y su educación.

Por todo lo anterior, el titular de la CEDHJ, al ser omiso en la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 4 de la Constitución del Estado, ha cometido violencia institucional en contra las mujeres al ser omiso en aplicar la perspectiva de género en su actuación.

Los derechos de la diversidad de mujeres no pueden someterse a conocimiento y postura personal del Ombudsman de Jalisco, sino al irrestricto respeto de todos los derechos de las mujeres desde la indivisibilidad de los mismos y al conocimiento efectivo de la perspectiva de género para su aplicación en políticas públicas.

De la misma manera, el derecho a la participación ciudadana de las mujeres se vio también coartado por el propio Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la CEDHJ, quien decidió cerrar las puertas de la institución a la Agenda Feminista Jalisco y a las mujeres y hombres que en exigencia pública se presentaron a sus instalaciones, a solicitarle que interpusiera la Acción de inconstitucionalidad en relación a la reforma del artículo 4to. de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

La respuesta de quien se dice defender los derechos humanos en el estado, a la solicitud antes mencionada, fue un rotundo no, sin argumentaciones jurídicas y de derechos humanos válidas. Lo anterior además de evidenciar un nulo conocimiento de los derechos humanos y particularmente de los derechos humanos de las mujeres, evidencia también su escaso conocimiento jurídico en materia de derecho constitucional y de su papel como garante de los derechos humanos en el Estado.

Lo preocupante, además, es la falta de autonomía de una institución que debe estar al margen de cualquier presión política y religiosa.

La Agenda Feminista Jalisco, hizo en su momento, denuncia pública de estos hechos que evidencian el vacío que existe en el Estado de Jalisco de un verdadero “Ombudsman” que asuma la plena defensa de los derechos humanos de las y los jaliscienses y que salvaguarde el derecho a la participación ciudadana.

Por eso, es que en este momento, la diversidad de mujeres en Jalisco, se encuentran sitiadas entre la aprobación de leyes antimujeres que las criminalizan, que les impiden el libre ejercicio de su derecho a decidir, y la obstaculización para el pleno ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.

Notas Aclaratorias

- 1 (Ferrajoli Luigi, “La cuestión del embrión entre derecho y moral” en Jueces para la democracia. Información y debate, Madrid, 15 de julio de 2002, Núm. 44, pp. 3- 12).
- 2 México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De igual manera, el Estado mexicano es parte contratante del Protocolo Facultativo, el cual suscribió el 10 de diciembre de 1999 y ratificó el 15 de marzo de 2002.
3. Recomendación general 24, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 20° período de sesiones, 1999, U.N. Doc. A/54/38/Rev.1.
- 4 México ratificó la Convención Belem Do Pará el 12 de noviembre de 1998.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)

Organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, con vinculaciones e interacción con organizaciones sociales e instituciones públicas y civiles, que al intervenir desactiva los mecanismos de violación a los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Este proceso se realizará con una perspectiva de complejidad (entrelazando acciones de investigación, articulación, formación, defensa e incidencia pública), con el objeto de contribuir a un cambio estructural que mejore la calidad de vida de las personas y devenga en una sociedad que experimente los valores de la paz, el diálogo, la justicia y el desarrollo. Más información: www.cep.ad.org.mx

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC)

Somos una organización de la sociedad civil fundada en 1963 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Nuestra misión es impulsar procesos de Educación y Comunicación Popular que contribuyan a la acción y participación ciudadana autogestiva. Nos proponemos contribuir al fortalecimiento de la vigencia de los Derechos Humanos, la construcción de la Democracia y el Desarrollo Local Sustentable, en favor de las mujeres y los hombres más empobrecidos, excluidos y vulnerados en sus derechos en el Estado de Jalisco.

Francisco Macías Medina

Egresado de la carrera de Abogado de la Universidad de Guadalajara (1991-1996). Maestro en Derecho por la misma casa de estudios con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública. Ha trabajado como auxiliar del Ministerio Público; como apoderado de la Banca de Desarrollo; de visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; así como promotor y co-creador del programa Jornadas Municipales y Programa Preventivo Contra la Tortura. También ha sido colaborador de la extinta Academia Jalisciense de Derechos Humanos y del Comité Pro Derechos Humanos Anacleto González Flores, AC. Es responsable del panorama de derechos humanos y justicia de la Revista de análisis *Nueva Síntesis*. Actualmente imparte clases de “Ética profesional y derechos humanos” en la Universidad Marista de Guadalajara. Desde 2006 trabaja en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en donde se encarga de la dirección ejecutiva, además de la sistematización y desarrollo institucional.

Gerardo Moya García

Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995) y Maestro en “Educación y Procesos Cognoscitivos” por la misma casa de estudios. Ha colaborado como abogado en diversas organizaciones civiles (Fundación de Reintegración Social AC; Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz AC; IMDEC AC). Asimismo, se desempeñó como visitador adjunto y analista jurídico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de 1997 al 2004. Profesor Titular del ITESO. Desde 2000, ha impartido clases en dicha universidad, en las asignaturas de “Derechos humanos”, “Ética, identidad y profesión”, entre otras, así como en la Universidad Marista de Guadalajara. Actualmente trabaja en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) como encargado de la interlocución estratégica.

Carlos Armando Peralta Varela

Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS de Occidente. Tiene estudios de maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso). Fue coordinador del Proyecto de Educación y Organización Popular de Servicios Educativos de Occidente (SEDOC AC), en Ciudad Guzmán (1986-1990); trabajó en el Área de Educación en Derechos Humanos y la Paz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (1990- 1995). Desde 1995 ha sido profesor-investigador (titular) del Centro de Investigación y Formación Social del Iteso y ha coordinado el Programa Universitario de Derechos Humanos; el Programa de Formación e Incidencia Ciudadana; e imparte clases en diversas instancias y programas académicos. Desde 2008 es Presidente del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC.

César Octavio Pérez Verónica

Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995). Desde entonces ha ejercido la profesión de abogado litigante independiente en Guadalajara. Fue Secretario Técnico del Colectivo de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Jalisco (2001-2002). Miembro fundador de la Red de Profesores de Derechos Humanos coordinada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México (2002). Investigador en el Diagnóstico sobre la Educación Jurídica en materia de Derechos Humanos en las Universidades en México coordinada por la UIA y la American University de Washington, DC (2002). Representante de la Agenda Sectorial de Derechos Humanos del Poder Ciudadano Jalisco (2001-2002). Dentro del Cepad se encarga de la defensa jurídica de los casos calificados como estratégicos desde una perspectiva integral.

Paulina del Pilar Gutiérrez Ramírez

Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Observadora en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la American University. Actualmente labora en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) en la línea estratégica de Exigibilidad y Justiciabilidad.

Nora Berenice Lorenzana Aguilar

Egresada de la Carrera de Derecho del Instituto y Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO (2003-2006). Colaboradora del área jurídica en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 (2004-2005) y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sub. Delegación Jurídica (2005-2006). Actualmente colabora en el Área de Defensoría de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas AJAGI (2007 – 2009). Sus funciones principales son: la redacción y presentación de demandas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en específico al pueblo Wixárika (huichol); el seguimiento de los casos de las comunidades Wixaritari (Huicholas), a través de informes ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como ante la Organización Internacional del Trabajo.

Rogelio Padilla Díaz

Comunicador de Profesión y educador popular por opción. Opositor continuo del egoísmo y la injusticia, así como terco promotor de oportunidades y derechos. En 1984 inicia su labor en favor de la infancia y es en 1988 cuando funda el “Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados AC” mejor conocido como MAMA AC, obra dedicada a la generación de oportunidades para miles de niños y niñas que viven o trabajan en la calle:

Adrián Guillermo Hipólito Hernández

Pasante de la Licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara, miembro del Comité Salvabosque.

Laura Sofía Herrera Rivera

Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, miembro del Comité Salvabosque.

María Guadalupe Ramos Ponce

Doctora por la Universidad de Oviedo, España. Maestra en Administración de la Justicia y Seguridad pública, por la Universidad de Guadalajara y consejera del Consejo General Universitario de la misma Universidad. Egresada de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara y profesora e investigadora titular de la misma casa de estudios. Diplomada en Derechos humanos de las mujeres por la Universidad de Chile, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México y el ITAM. Fue Visitadora General en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Actualmente es coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Como Cladem, es responsable en Jalisco del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y forma parte del colectivo Agenda Feminista en Jalisco. Es vicepresidenta del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC.

María del Mar Estrada Rebull

Es licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales. Forma parte de Plataforma 39. Trabaja en el Proyecto de Educación Indígena Intercultural en la Sierra Wixárika como coordinadora académica externa del Bachillerato Tatei Yurienaka 'Iyarieya.

Margarita Sierra

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Lovaina y Maestra en Pedagogía por la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente es Directora y Socia del Centro de Medios Audiovisuales desde 2004. En 2004, fue asesora en la Fundación de la Universidad de Guadalajara. De 2003 a 2004, productora de TV Abierta U de G. De 2001 a 2003, productora en Radio U de G. De 1987 a 2001, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De 1982 a 1987, coordinadora de Intercambio Académico U de G y directora y fundadora del Centro de Estudios para Extranjeros U de G. Asimismo, es Diputada ciudadana en el Congreso Ciudadano de Jalisco, colaboradora en el Colectivo de Organismos Ciudadanos por el Agua y participante en Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico.

Alberto Bayardo Pérez Arce

Pasante de Tecnólogo en electrónica y comunicaciones por el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA); maestro en política y gestión pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Coordinador del Programa de Educación en Derechos Humanos y Asesoría Legal del Servicio Jesuita a Refugiados – México (SJR-México), 1997. Académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) desde 1998 a la fecha: Profesor de asignatura en el Departamento de Electrónica Sistemas e Informática (de 1998 a 2002), así como del Centro de

Formación Humana (de 1999 a la fecha); profesor de tiempo fijo en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (de 2000 a la fecha) donde ha impartido las asignaturas de Análisis de la realidad nacional, Sociología del poder y Teoría política. Ha fungido como enlace con la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y el Sistema Educativo Ibero-ITESO, en relación con el tema de los derechos humanos (2005); coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública (de 2005 a 2009); miembro del equipo coordinador de Alianza Cívica Jalisco de 1995 a 1996. Colaborador en la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Luis Miguel Vargas” de la Unión de Colonos Independientes del Cerro del 4 (UCI-C4) en Tlaquepaque, Jalisco, de 1993 a 1995. Secretario Ejecutivo y Presidente Interino del Consejo Ciudadano de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco (de 2005 a 2006). Consejero Ciudadano Propietario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (de 2006 a la fecha).

María Elena de la Torre Escoto

Licenciatura en Arquitectura, ITESO, 1997. Maestría en Vivienda y Urbanismo por la Architectural Association School of Architecture, Londres, 2000. Doctorado en Urbanismo, Universidad Politécnica de Cataluña, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Barcelona, 2006. Socia activa de la red de Investigaciones arquitectónicas para Latinoamérica redIALA y de la organización Ciudad para Todos. Coordinadora operativa del Plan de Movilidad Urbana no Motorizada de la Zona Metropolitana de Guadalajara, contratado por el Gobierno del Estado.

Jaime Meade Altamirano

Licenciatura en Arquitectura, ITESO, 1999. Profesionista independiente en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y ejecución de obra, y colaborador en proyectos urbanos. Miembro activo del colectivo Ciudad para Todos desde 2007 y de otras iniciativas de ahí vinculadas con la promoción y ejercicio democrático ciudadano como lo es la Plataforma 39.

Mercedes Paloma Cruz Vázquez

Licenciatura en Arquitectura, ITESO. Especialista en conservación del patrimonio histórico. Miembro activo de Ciudad para Todos.

Étienne von Bertrab

Licenciatura en Ingeniería Industrial, ITESO, 1994. Maestría en Planeación y Desarrollo con especialidad en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la University College London, 2003. Investigador independiente y profesor de Ecología Política en ITESO. Activista en Ciudad para Todos y en la Plataforma 39.

Paola Lazo Corvera

Licenciada en Ciencias de la Educación en el ITESO (1988-1992) y posteriormente realizó una maestría en Enseñanza y Diseño Curricular en la universidad de Louisiana State University (1993-1994). Ha cursado a su vez diplomados con relación al tema de Género y Educación, en el Colegio de México (1996) y en la Facultad de Antropología de la UNAM (1998). Trabajó en la Fundación Mexicana de Planeación Familiar (MEXFAM), en la elaboración de proyectos y en el diseño de materiales educativos para el trabajo comunitario. Coordinó el Proyecto Roma Jalisco (orientado hacia la integración de personas con discapacidad en la escuela, la familia y la sociedad). Actualmente dirige la primaria del Colegio Huellas en Guadalajara y es profesora de asignatura en el ITESO. Desde 1995 es Consejera Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO AC (CEPAD)

2009

Misión

Somos un organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, con vinculaciones e interacción con organizaciones sociales e instituciones públicas y civiles, que al intervenir desactiva los mecanismos de violación a los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Este proceso se realizará con una perspectiva de complejidad (entrelazando acciones de investigación, articulación, formación, defensa e incidencia pública), con el objeto de contribuir a un cambio estructural que mejore la calidad de vida de las personas y devenga en una sociedad que experimente los valores de la paz, el diálogo, la justicia y el desarrollo.

Valores

1. Respeto a los Derechos Humanos

La definición de este valor está enmarcada en la complejidad, ya que se construye día a día y muta constantemente. El Centro se adhiere a las definiciones internacionales que se han trabajado sobre este concepto. Sin embargo, independientemente de los grandes debates, el respeto a los Derechos Humanos (DH) son aquellas acciones o abstenciones que propician una mayor humanización mediante el ejercicio pleno de la libertad. El Centro no podrá realizar acción alguna que viole los DH de quienes integran el proyecto, ni de sus usuarios, ni de terceros.

2. Criticidad

La criticidad implica las siguientes consideraciones: una lectura y análisis complejo de la realidad desde sus diferentes dimensiones; problematizar el entorno desde la reflexividad y la transdisciplinariedad; y una postura crítica, siempre con independencia ante los diferentes sistemas sociales, políticos, económicos, y de poder.

3. Transparencia

Forma sistemática de trabajo en la que se privilegia la comunicación entre los miembros de la organización, así como con los actores públicos con los que se relacionará (organizaciones pares, contrapartes, beneficiarios, Estado, financiadoras, medios de comunicación, y sociedad en general). El Cepad se compromete a difundir información de su quehacer, sus políticas, sus valores, sus finanzas, entre otras.

4. Justicia

Entorno del que surge el deber de actuación para reconstituir el respeto a la persona, a los grupos más vulnerables y al entorno en el que se desenvuelven, con el fin de contribuir a la exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Humanos. La justicia debe ser una expresión de realidad en lo cotidiano, así como en la vida de social e institucional. La justicia es una expresión de la lucha en contra de la impunidad y la corrupción.

5. Paz

Valor fundamental que permite el ejercicio de los Derechos Humanos en la sociedad. La paz se entiende no como ausencia de conflicto, sino como una herramienta de resolución de diferencias, para la convivencia social y política.

6. Responsabilidad Social

Es la toma de postura en favor de un cambio social, privilegiando la sinergia y vinculación con agentes e instituciones de la sociedad civil.

7. Servicio profesional

La realización de actividades con capacidad, oportunidad, eficacia, eficiencia, originalidad, calidad intelectual y responsabilidad.

8. Desarrollo

Medio y fin para que las personas y grupos tengan la posibilidad de una mejora en el ámbito económico, cultural, social y político, donde puedan realizarse plenamente el cumplimiento de los Derechos Humanos.

9. Diálogo

Mecanismo de construcción de acuerdos desde las coincidencias, que permiten impulsar el cambio social dentro de un marco de democracia.

10. Independencia

Es la cualidad que permite privilegiar los principios éticos contenidos en los derechos humanos, sobre otros de tipo partidista o de credo.

11. Perfil público responsable

El Cepad, como un actor social dentro del espacio público, construirá cotidianamente un capital político a partir de su propio trabajo. Este capital deberá estar alejado de la estridencia, y tendrá que ser manejado de forma responsable, razonada y justa.

Líneas estratégicas de trabajo

Reingeniería

Reflexión y renovación sistemática de los métodos de trabajo del Centro y sus resultados, que permitan sostener la misión, así como la calidad de vida de sus miembros.

Creación y aplicación de procesos de exigibilidad y justiciabilidad

Creación y aplicación de estrategias que incidan socialmente en la mejora de la calidad de vida de las personas a través de una labor multidisciplinar y compleja.

Construcción de un actor político

Acciones de comunicación política responsable que posibiliten ser contraparte del Estado y los poderes fácticos e interlocutor de alto nivel ético e intelectual ante instituciones públicas y privadas, así como ante agentes sociales de Jalisco.

Donaciones o aportaciones voluntarias

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) es una organización civil sin fines de lucro y que trabaja por la construcción de una sociedad democrática que garantice el respeto de los derechos humanos. Si quieres hacer donaciones o colaborar como voluntaria o voluntario, comunícate a nuestras oficinas:

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad):

Calle Francisco I. Madero 836.

Colonia Americana Oriente CP. 44160.

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono y fax: +52 (33) 36134066.

Correo electrónico: cepad@cepad.org.mx

Página electrónica: www.cepad.org.mx

Blog. cepadorg.blogspot.com

Grupo facebook

Esta publicación se terminó de editar en noviembre de 2009, en las oficinas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, ubicadas en Calle Francisco I. Madero 836. Colonia Americana Oriente CP. 44160. Guadalajara, Jalisco, México.

Informe

sobre la situación
de los Derechos
Humanos en Jalisco
- 2009 -

Se terminó de imprimir en Noviembre del 2009
en los Talleres Gráficos de Prometeo Editores, S.A. de C.V.
Libertad 1457, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44160 Tel. 01 (33) 38262726
E-mail: prometeoeditores@prodigy.net.mx

El tiraje fue de 500 ejemplares
Impreso en México *Printed in Mexico*